

**JOSÉ NATANSON JULIO BURDMAN ANDRÉS FIDANZA MARTÍN SIVAK
MICHAEL KLARE ALEXANDER MAIN IGNACIO RAMONET SERGE HALIMI**

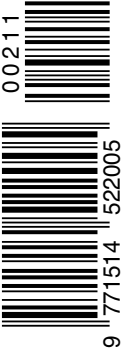
LE MONDE

diplomatie

el dipló, una voz clara en medio del ruido
enero 2017

Capital Intelectual S.A.
Paraguay 1535 (1061)
Buenos Aires, Argentina
Publicación mensual
Año XVIII, N° 211
Precio del ejemplar: \$70
En Uruguay: 100 pesos

www.eldiplo.org



Dossier

El peronismo contraataca

Superado el shock de la derrota, el peronismo se rearma y obliga al gobierno a negociar. ¿Cómo se prepara para las decisivas elecciones de octubre?

Sub.coop

Brasil: la crisis continúa

**Marcelo Falak y
Guilherme Boulos**
Págs. 21 a 25

Lejos de estabilizar el panorama, la destitución de Dilma Rousseff profundizó la crisis político-institucional. En un contexto de recesión y descrédito social, el gobierno de Michel Temer intenta imponer un brutal ajuste de la economía.

El macrismo realmente existente

por José Natanson

Entre bizantina y bizarra, la discusión en torno al impuesto a las ganancias quizás revele algo más profundo de lo que podría pensarse a primera vista. Luego de la última modificación, quedarán alcanzados por el impuesto menos del 8 por ciento del total de trabajadores, jubilados y autónomos, alrededor de 1,4 millones de personas sobre un total de 12 millones (18 si se cuentan los no registrados), obviamente situados en la cúpula de la pirámide salarial: como demuestra un informe oficial (1), hay que ganar casi el doble del salario promedio del sector privado –19 mil pesos en bruto– para comenzar a pagar ganancias (en Francia, Estados Unidos o España, por citar algunos ejemplos, tributan quienes ganan entre un tercio y la mitad del salario promedio, aunque se trata de porcentajes mínimos para las primeras escalas y aunque la capacidad adquisitiva de ese mismo sueldo promedio es por supuesto más alta).

En concreto, el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia aportó unos 50 mil millones de pesos en 2016, lo que equivale a la totalidad del presupuesto de las 53 universidades nacionales, más de tres veces los recursos destinados a ciencia y tecnología o un soterramiento del Sarmiento entero. ¿Por qué entonces, si se trata de un impuesto que genera mucho dinero y que impacta básicamente sobre los salarios más altos, es tan impopular? En primer lugar, porque su extensión a más y más personas no fue producto de una decisión explícita de política pública, impulsada desde el gobierno y defendida en un debate social franco, sino de la falta de actualización (no hubo, digamos, una batalla cultural en torno a ganancias sino una apuesta vergonzante a la inercia).

Pero además, a diferencia del IVA, más regresivo pero disperso en miles de microcompras cotidianas, y del impuesto al cheque, distorsivo porque castiga la actividad económica y fomenta la informalidad pero también desperdigado en una infinidad de operaciones bancarias, el impuesto a las ganancias es cristalino como las aguas del Caribe: cualquier trabajador sabe exactamente, con solo mirar su recibo

de sueldo, cuánto paga de ganancias, lo que lo condena a una hipervisibilidad casi pornográfica que alimenta la percepción social de injusticia.

Esto explica el estilo sobreexcitado que adquirió el debate por ganancias, con un gobierno que no dudó en desdecirse de sus promesas de campaña frente a un peronismo que no tuvo empacho en reclamar ahora lo que se negó a hacer cuando estaba en el poder. Sin embargo, la conclusión quizás sea menos deprimente de lo que parece: detrás del tono bagliniano del debate se esconde la evidencia de que tanto el kirchnerismo como el macrismo se resistieron, pese a las presiones sociales y sindicales, a eliminar del todo un impuesto que, bien diseñado, es justo.

Si se mira con atención, algo similar ocurre con las retenciones a la soja. Así como había prometido que bajo su gobierno “ningún trabajador pagará impuesto a las ganancias”, lo que derivó en una interesante discusión acerca de cuándo, a partir de qué salario, un trabajador comienza a ser un trabajador, Macri también había prometido reducir un 5 por ciento por año las retenciones a la soja, pero finalmente terminó anunciando, luego del primer recorte, un mucho más cauteloso esquema de rebaja del 0,5 por ciento mensual. En ambos casos, el macrismo prorrogó medidas adoptadas por el gobierno anterior: si una mirada crítica nos reenvía a las promesas incumplidas, una perspectiva más benigna nos podría llevar a pensar si no estamos finalmente ante una política de Estado.

En todo caso, la evidencia indica que el gobierno está dispuesto a sostener algunos trazos de la estructura tributaria anterior incluso al costo de irritar a sus votantes. Los motivos habrá que buscarlos en la otra cara de la Luna presupuestaria, el gasto fiscal, que no experimentó una caída brusca durante el 2016 sino que, considerado globalmente, se mantuvo en niveles similares a los del año anterior, del mismo modo que lo hará en 2017 según las propias previsiones oficiales.

En efecto, la ley de presupuesto estima para este año un déficit fiscal similar al de los años anteriores (4,2 por ciento contra 4,7). De hecho, está previsto que el gasto suba más que los ingresos (22,6 contra 22,4 por ciento). Y en este sentido, quienes conciben al macrismo como una copia en carbónico del menemismo deberían registrar que el alarmante aumento de los niveles de deuda, la desaprensiva apertura comercial y la obcecada política de metas de inflación no se conjugaron con un ajuste fiscal al estilo de los 90, lo que no convierte al de Macri en un gobierno progresista sino en uno que quiere ganar las elecciones.

Pero esto es solo una parte. Si el análisis de la dupla ingresos/gastos habilita una mirada más sutil sobre la gestión macrista, la evaluación detallada de la economía del 2016 confirma que el gobierno avanza en una cierta dirección. Podrá proceder por el método del ensayo y error, reconocer sus equivocaciones y disculparse como el Juan Domingo Perón de Capusotto, pero tiene un rumbo. Macri vacila, pero no gobierna contra sus deseos.

Como revela el Cuadro 1, desde que el PRO llegó al poder se produjo una gradual pero clarísima contrarreforma tributaria que involucra una disminución del peso de los impuestos más progresivos y un aumento de los regresivos: los derechos de

exportación (retenciones) pasaron de recaudar el 4,63 por ciento del PBI en 2015 al 3,42 en 2016, el impuesto a las ganancias cayó del 22,41 al 19,73 y el impuesto a los bienes personales del 1,07 al 0,92, en tanto el IVA, a pesar del desplome del consumo y la recesión, saltó del 25,49 al 26,72.

Esta regresión tributaria resultó en un nuevo panorama sectorial de ganadores y perdedores. El Cuadro 2 confirma que las tres actividades económicas que más aumentaron su participación en el PBI fueron la agricultura (pasó de representar el 7,7 por ciento del producto en 2015 a un impresionante 12 por ciento en 2016), las finanzas (del 3,9 al 4,3) y la minería (del 3,9 al 4,1), mientras que cayeron la industria (17,1 a 15,7), la construcción (del 5,3 al 4,3) y el comercio (14,3 a 13,7). Silenciosamente, la reconversión está en marcha: los ganadores del año son sectores dinámicos, competitivos a nivel global y superavitarios en divisas, pero que generan pocos empleos y escasos encadenamientos productivos. Y que quizás alcancen para satisfacer a poblaciones menos numerosas como, digamos, la chilena o la peruana, pero que resultan claramente insuficientes para alimentar a un país como el nuestro, con 40 millones de habitantes y una arraigada memoria de clase media, una fuerte pulsión plebea y una pasión carnívora que ensanchan la demanda social hasta niveles cuasieuropeos.

Estos cambios tributarios y sectoriales se completan con la siempre delicada cuestión de las di-

Cuadro 1 Contrarreforma impositiva

Estructura de la recaudación de la AFIP, promedio enero-noviembre

| | 2015 | 2016 | Variación |
|--------------------------|-------|-------|-----------|
| Ganancias | 22,41 | 19,73 | - 2,68 |
| Bienes personales | 1,07 | 0,92 | - 0,16 |
| Derechos de exportación | 4,63 | 3,42 | - 1,21 |
| IVA | 25,49 | 26,72 | 1,23 |
| Seguridad social | 32,44 | 33,34 | 0,90 |
| Impuesto al cheque | 5,71 | 6,00 | 0,29 |
| Derechos de importación | 2,03 | 2,54 | 0,50 |
| Combustibles | 3,36 | 3,35 | -0,01 |
| Internos | 1,81 | 2,11 | 0,30 |
| Blanqueo de capitales | 0,02 | 0,85 | 0,83 |
| Monotributo | 0,33 | 0,32 | - 0,02 |
| Ganancia mínima presunta | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| Resto de impuestos | 0,54 | 0,56 | 0,02 |

Fuente: Daniel Schteingart en base a datos oficiales.

Cuadro 2 Ganadores y perdedores del año

Actividades económicas que avanzan/retroceden en términos de su incidencia en el valor agregado bruto total, en porcentajes

| AVANZAN | 2015 | 2016 | Variación |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura | 7,7 | 12 | 5,39 |
| Intermediación financiera | 3,9 | 4,3 | 0,39 |
| Electricidad, gas y agua | 1,3 | 1,6 | 0,32 |
| Explotación de minas y canteras | 3,9 | 4,1 | 0,17 |
| Servicios sociales y de salud | 5,8 | 5,9 | 0,14 |
| Hogares privados con servicio doméstico | 0,9 | 0,9 | 0,03 |
| Total avance | 23,8 | 29,2 | 5,39 |
| RETROCEDEN | 2015 | 2016 | Variación |
| Industria | 17,1 | 15,7 | - 1,49 |
| Construcción | 5,3 | 4,3 | - 1,02 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 11,3 | 10,7 | - 0,66 |
| Comercio mayorista, minorista y reparaciones | 14,3 | 13,7 | - 0,60 |
| Administración pública, defensa, etc | 9,3 | 8,7 | - 0,57 |
| Enseñanza | 6,3 | 5,9 | - 0,40 |
| Transporte y comunicaciones | 6,8 | 6,6 | - 0,25 |
| Hoteles y restaurantes | 2,3 | 2,1 | - 0,22 |
| Otras actividades de servicios comunitarias, soc. y pers. | 3,5 | 3,3 | - 0,18 |
| Total retroceso | 76,2 | 70,8 | - 5,39 |

Fuente: Francisco Cantamutto y Martín Schorr en base a datos del Indec.

Staff

Director: José Natanson

Redacción

Carlos Alfieri (editor)
Pablo Stancanelli (editor)
Creusa Muñoz (editora)
Luciana Garbarino
Laura Oszust

Secretaría

Patricia Orfila
secretaria@eldiplo.org

Corrección

Alfredo Cortés

Diagramación

Cristina Melo

Colaboradores locales

Julio Burdman
Nazaret Castro
Julián Chappa
Andrés Fidanza
Diego Picotto
Josefina Sartora
Bárbara Schijman
Mariano Schuster
Martín Sivak

Ilustración

Gustavo Cimadoro
Juan Soto

Traductores

Julia Bucci
Victoria Cozzo
Georgina Fraser
Teresa Garufi
Aldo Giacometti
Florencia Giménez Zapiola
Victor Goldstein
Patricia Minarrieta
Bárbara Poey Sowerby
Gustavo Recalde
María Julia Zaparart
Carlos Alberto Zito

Diseño original

Javier Vera Ocampo

Publicidad

Maia Sona
msona@capin.com.ar
contacto@eldiplo.org

www.eldiplo.org

Fotocromos e impresión: Rotativos Patagonia S.A. Aráoz de Lamadrid 1920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. **Le Monde diplomatique** es una publicación de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
Redacción, administración, publicidad, suscripciones, cartas del lector: Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330
E-mail: secretaria@eldiplo.org
En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada.
Registro de la propiedad intelectual N° 348.966. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A.
Distribución en Cap. Fed. y Gran Bs. As.: Vaccaro Hermanos y representantes de Editoriales S.A. Entre Ríos 919, 1° piso. Tel. 4305 3854, C.A.B.A., Argentina.
Distribución en Interior y Exterior: D.I.S.A., Distribuidora Interplazas S.A. Pte. Luis Sáenz Peña 1836, Tel. 4305 3160. CF. Argentina.



La circulación de *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, del mes de diciembre de 2016 fue de 25.700 ejemplares.

Capital Intelectual S.A.

Le Monde diplomatique (París)

Fundador: Hubert Beuve-Méry
Presidente del Directorio y Director de la Redacción: Serge Halimi
Director Adjunto: Alain Gresh
Jefe de Redacción: Pierre Rimbart
1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 París
Tél.: (331) 53 94 96 21
Fax: (331) 53 94 96 26
Mail: secretariat@monde-diplomatique.fr
Internet: www.monde-diplomatique.fr

Editorial

visas. La fuga de capitales se más que duplicó entre 2015 (salieron 6.734 millones de dólares) y 2016 (14.662), impulsada por la formación de activos en el exterior y el giro de utilidades de las empresas, lo que explica que las reservas internacionales apenas se incrementaran pese a la masiva llegada de dólares por vía del blanqueo. Según los cálculos incluidos en el presupuesto, el gobierno necesitará en 2017 unos 16 mil millones de dólares para re-financiar la deuda en moneda extranjera, a punto tal que el rubro “servicios de deuda” es, comparativamente, el que más crece. Aunque la deuda total todavía se sitúa en niveles manejables, por debajo del 55 por ciento del PBI, su rápido aumento, junto a la suba de tasas dispuesta por la Reserva Federal de Estados Unidos, abre dudas sobre su sostenibilidad en el tiempo.

En suma, la economía política del macrismo realmente existente confirma la percepción de un gobierno que registra los límites que le imponen la oposición partidaria, el sindicalismo y las organizaciones sociales, atento siempre al estado de ánimo de la opinión pública, pero que de todos modos avanza. Y que si no acelera el paso es porque todavía debe terminar de definir la coalición social sobre la cual hará descansar su programa de reformas: si el alfonsinismo se apoyó en una alianza entre las clases medias urbanas, los sectores tradicionales del radicalismo del interior y muchos peronistas emancipados (“no me van a votar los obreros pero sí sus esposas”, según la clásica *boutade* del ex presidente); si el menemismo se sostuvo gracias al apoyo de los estratos más altos, las nuevas clases medias globalizadas y los sectores populares, y si el kirchnerismo obtuvo el respaldo de los grupos más pobres, una parte de las clases medias progresistas y los trabajadores organizados, ¿cuál será la alianza social que le garantizará sustentabilidad política a un gobierno que controla apenas un tercio de los diputados, un cuarto de los gobernadores y un quinto de los senadores? (2)

El hecho de que esta pregunta crucial no encuentre todavía una respuesta definitiva explica el estilo sinuoso de la gestión macrista y el ritmo un poco desconcertante con el que se mueve. Pero una cosa es el sesgo ideológico y otra muy distinta la velocidad con la que lo despliega. Como sostienen los editores del *Artepolítica.com*, confundir neoliberalismo con shock –o gradualismo con progresismo– es caer en una falacia de petición de principios. Lenta pero persistentemente, el macrismo está operando un ambicioso cambio socioeconómico, disimulado detrás de un cortina finita hecha de slogans de autoayuda e imposibles promesas win-win, pero perfectamente visible para todo aquel que quiera mirarlo. ■

1. Ministerio de Hacienda y Finanzas sobre datos de la OCDE.

2. Cuando se consulta a funcionarios e incluso intelectuales macristas, la respuesta se limita a expresiones del tipo “una alianza con todos los que quieran un país mejor” o “todos los que estén comprometidos con el cambio”, o sea que no tienen ni idea.

¿Qué quiere la clase media?

Una investigación de la consultora W y TrialPanel publicada en *La Nación* (1) indica que, aunque medida por ingresos pertenecen a la clase media el 50 por ciento de los argentinos, la autopercepción es muy diferente: el 80 por ciento de los consultados se autodefine como tal. Por eso resulta curioso que, en un país en el que una vasta mayoría social se percibe como parte de la clase media, se escuchen tantas sentencias definitivas: “Menem destruyó a la clase media”, “La crisis del 2001 mató a la clase media”. De hecho, el gobierno pos apocalíptico de Eduardo Duhalde pareció transitar sobre el desierto de esa clase que había creído demasiado en las promesas de la modernidad y que, una vez que estalló la crisis, redujo sus esperanzas a la figura de un sujeto final y quebrado (“el ahorrista”) que sólo balbuceaba en la puerta hermética de algún banco que le devuelvan “sus dólares”.

La clase media, que se ensanchó durante el kirchnerismo y se dividió frente al macrismo, es el sueño atormentado de una noche de verano, el desasosiego alucinado de un 2001 a la vuelta de la esquina. ¿Por qué es la peor pesadilla de la política en tiempos de crisis, peor incluso que los saqueos o los reclamos de las organizaciones de desocupados, incluso que el sindicalismo peronista sobreviviente tras el derrumbe neoliberal? Porque la inercia de la democracia y la economía de mercado a la que con sus más y sus menos adherimos desde 1983 dibuja en su horizonte ese sujeto ideal: el ciudadano de clase media. Si el socialismo nos proletariza y el neoliberalismo nos lumpeniza, la democracia nos hace de clase media.

En atención a estos misterios, los dilemas del más inasible de los grupos sociales conforman el eje del libro escrito por Hernán Vanoli, Pablo Semán y Javier Trimboli y prologado por Hinde Pomeraniec, segundo título de **La media distancia**, la nueva colección de *el Dipló*. Organizados en torno a tres capítulos largos que dialogan, se entrecruzan y a veces discuten entre sí, junto a un prólogo que los articula, los libros parten de una pregunta disparadora: si el primer título indagaba los motivos del cambio político en América Latina (“¿Por qué retrocede la izquierda?”) y el segundo encara la intrigante cuestión de la clase media, los próximos se ocuparán de analizar las dificultades de la economía argentina en tiempos de nuevo neoliberalismo y la heterogeneidad de los sectores obreros y populares.

El objetivo es simple pero desafiante. Sin las presiones del periodismo de coyuntura, que bueno o malo tiene su lugar asegurado, pero sin la pesadez en la que a veces suelen caer los estudios académicos, **La media distancia** pretende articular un enfoque pausado y a la vez atento al presente. Confiamos en que los lectores nos acompañen en esta nueva propuesta que se formula algunas de las preguntas que sospechamos urgentes sin resignar precisión, pasión y rigor. ■

En el panorama político actual conviven cinco peronismos, cada uno con lógicas e intereses diferentes. Todos ellos cooperan con el macrismo conduciendo a un virtual cogobierno. Pero las elecciones legislativas obligarán a unos y otros a adoptar un posicionamiento más claro.

Gobernadores, senadores, diputados, intendentes y sindicalistas

Cambiemos y los cinco peronismos

por Julio Burdman*



Buenos Aires (Juan Mabromata/AFP)

Los primeros años de Cristina Kirchner en la Presidencia fueron un sobresalto tras otro. Tras un 2008 dominado por las secuelas de la Resolución 125 y la traumática “crisis del campo”, en el año 2009 Néstor Kirchner (secundado en la lista por Daniel Scioli y Sergio Massa) perdió en la provincia de Buenos Aires las elecciones de diputados nacionales contra la lista encabezada por Francisco De Narváez. Unos meses antes, el vicepresidente Julio Cobos había votado contra su gobierno en el debate legislativo más polarizado de la Argentina contemporánea. Y el presidente del Banco Central puesto por los Kirchner, Martín Redrado, ya comenzaba a independizarse de sus jefes políticos y amenazaba con no habilitar reservas para financiar al Tesoro. En ese contexto de derrota y asedio emergió una gran coalición de di-

putados contrarios al oficialismo, el llamado “Grupo A”, que rompió algunas normas no escritas que regulaban el funcionamiento de la Cámara Baja y le arrebató al kirchnerismo la mayoría de las presidencias de las comisiones. La UCR, el PRO, la Coalición Cívica, los denominados “peronistas federales” y una red de monobloques fueron parte de ese experimento inédito de coordinación parlamentaria que parecía tomar el control del Congreso. El fantasma del “gobierno dividido” (es decir, Ejecutivo y Legislativo de colores diferentes) cobraba su forma más nítida.

Días atrás, la foto de la oposición reunida tras el proyecto alternativo de ganancias que había logrado aprobar en el recinto removió, algo exageradamente, los recuerdos pesadillescos de aquel Grupo A. Por un lado, porque uno de los aspectos más amenazantes de aquel gobierno dividido era la posibilidad de que el Congreso

condicione la política económica del Ejecutivo. ¿Acaso Massa, Kicillof, Bossio y sus socios circunstanciales pretendían hacer política fiscal desde el Congreso? Los senadores, sin perder la calma, sabían que eso no era posible. Que un proyecto así no podía aprobarse sin la anuencia del Ejecutivo. Que iba a volver a Diputados para ser discutido otra vez. Como finalmente ocurrió.

La economía, como sostienen todos los manuales de macro, tiene que contar con un timón unificado. Superministros como Cavallo o Sourrouille son el diseño institucional preferido de la ortodoxia. Coherentes, los economistas siempre prefieren superministros.

Pero además del tabú de la economía parlamentari- zada, surgía otra imagen perturbadora en esa foto de los diputados. El Grupo A constituido el 9 de diciembre de 2009 fue el primer antecedente de Cambiemos, la coalición política que venció al peronismo kirchnerista a

fin de 2015. Una imagen que se conjuga sin grandes problemas con una especie de saber popular que pervive en cierto análisis político: que todo el peronismo se va a unificar, más tarde o más temprano, y que ese día terminará el ciclo político de Cambiemos.

Hay, sin embargo, grandes diferencias. El Grupo A se constituyó después de una elección y sus miembros estaban unidos por un adversario común. El peronismo actual no está, en los hechos, enfrentado al gobierno. Más bien, lo está ayudando a gobernar. En Argentina hay un virtual cogobierno, como repite uno de los analistas políticos más lúcidos del país, Eduardo Duhalde.

Los peronismos son cinco

En el plano dirigencial, hoy no hay tres ni cuatro peronismos, sino cinco. El peronismo de los gobernadores, el peronismo de los senadores, el peronismo de los diputados, el peronismo de los intendentes y el peronismo de los sindicalistas. Todos ellos están cooperando, en mayor o menor medida, con el oficialismo. Sin esa cooperación, el gobierno de Mauricio Macri no hubiera podido siquiera arrancar.

El peronismo de los sindicalistas de la CGT es definido desde el Ministerio de Trabajo como un aliado estratégico. El PRO ya había trazado buenos vínculos con sectores del sindicalismo peronista desde el gobierno de la Ciudad, sede legal de muchas empresas, particularmente a partir de la ruptura entre Hugo Moyano y Néstor Kirchner. Aprovechando esa oportunidad, el gobierno local de Macri habilitó una instancia de resolución de conflictos en las oficinas de Producción, en las que Moyano, Barrionuevo, Venegas y otros encontraron una suerte de mini-carretera laboral paralela. Y esa misma gestión porteña hoy continúa en el Ministerio de la calle Alem. Los sindicatos saben que no están ante un gobierno peronista distributivo, y que no van a obtener ganancias relativas de ello, pero aspiran a mantener posiciones. Cuidar el empleo, las leyes laborales y la continuidad del modelo sindical argentino, que incluye el control de las obras sociales sin atrasos en las tesorerías. El primer gobierno no peronista que no sufre un paro general durante su primer año terminó de pactar la reforma de ganancias con la CGT. Tuto legal.

El peronismo de los senadores, que domina la Cámara Alta sin espejos de lo que sucede en otros peronismos, y que se desarrolla en el despacho de Miguel Ángel Pichetto y en las presidencias de las comisiones clave, es otro de los mundos que Cambiemos entendió correctamente. Aunque algunos destacados miembros del oficialismo, confundidos por culpa de una errónea tesis que sostienen algunos politólogos, hayan pedido a “los gobernadores” que detengan en el Senado el proyecto de Ganancias. Tal vez esperaban que Vidal llame a Juan Manuel Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto, o que Miguel Lifschitz utilice sus influencias personales sobre Omar Perotti... Afortunadamente, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó sí descubrieron tempranamente que senadores y gobernadores no son la misma cosa. Se llega allí a partir de una sencilla aritmética: contando cuántos senadores peronistas responden a los gobernadores y cuántos son autónomos de ellos. Pichetto no es el senador de los gobernadores: es un coordinador de senadores. Y un coordinador tampoco es un patrón. A veces, es cierto, el peronismo de los senadores y el peronismo de los gobernadores se parecen, y hasta se superponen. Pero hoy Cambiemos tiene diálogos con las dos esferas.

El peronismo de los gobernadores es uno de los más espinosos para el gobierno, aunque parezca lo contrario. Porque los gobernadores tienen distintas demandas y Macri no puede ni quiere contenerlas a todas. Y esas negociaciones no dejan mucho margen para innovar ni hacer política. No sólo piden adelantos financieros de coparticipación para pagar sueldos: tienen carpetas y carpetas de pedidos. Los gobernadores tienen influencia sobre algunos senadores, pero además casi todas las políticas públicas requieren coordinación federal, y la mayoría de los ministros llevan relaciones directas con las provincias. Parte del problema de Cambiemos, que ya han advertido algunos en el gabinete, es que la buena relación con los gobernadores peronistas les ha restado instrumentos para hacer construcción electoral para su propio molino. En su primer año,

Cambiemos hizo poco y nada para expandirse como fuerza política en el interior. ¿Cambiemos realmente está apostando a ganar elecciones en las provincias con sus propios candidatos, o se conforma con que los gobernadores que cooperan, sean del partido que sean, mantengan el statu quo? Esto puede ser una buena solución para 2017. Pero no contar con mandíbulas propias en el interior es casi un certificado de defunción para una hipotética reelección de Macri.

El peronismo de los diputados es el que más atención ha concitado, porque allí el conjunto está más fragmentado y hay figuras estelares. Por un lado, el kirchnerismo sobreviviente al cambio de gobierno se hace más visible allí, con la banca de Máximo y los fieles cristinistas. Es mucho más difícil encontrar kirchnerismo explícito en los otros cuatro peronismos, aunque haya algunas presencias minoritarias. Massa y Bossio lideran bloques que tienen comunicación fluida con el presidente de la Cámara, Monzó. La anuencia de ambos bloques no sólo permitió la sanción de leyes importantes –lo mismo cabe decir del Senado, claro–, sino también la elección de autoridades en comisión y la garantía de la línea sucesoria presidencial. En tanto contribuyentes a la gobernabilidad de Macri, tanto Massa como Bossio son frecuentemente consultados en materia legislativa: con algunas excepciones, la Casa Rosada en general dio cuenta de esta situación de cierto cogobierno, Duhalde *dixit*. Una de esas excepciones fue Ganancias. Ahora, todo se encarriló.

Por último, el peronismo de los intendentes (bonaerenses) también cuenta con su propia lógica. Entre Cambiemos y el conjunto de los peronistas se ha lanzado una suerte de “guerra fría” por los intendentes; la gobernadora Vidal partió de una buena base (facilitada por sus propios votos de octubre de 2015, que permitió arrastrar hacia abajo a algunos ganadores municipales), y también se ha movido con habilidad en la cooptación de algunos jefes municipales, y hoy uno de los logros que puede exhibir Cambiemos en la provincia, amén de un sistema de gobierno de coalición más fluido, es una presencia territorial importante. Y buena parte de la gobernabilidad lograda por Vidal y su jefe de gabinete, Federico Salvai, debemos atribuirle también a la buena relación que mantienen con un grupo de intendentes peronistas.

En el peronismo de los intendentes, detrás de los distintos “clubes” de mandatarios (Fénix, Esmeralda) se esconden diferentes tipos de relación con la gobernadora y también diferentes estrategias y proyectos electorales. En general, está algo sobrevalorada la influencia que el kirchnerismo, Massa y Randazzo tendrían sobre los intendentes peronistas, tanto en el conurbano como en el interior. Massa, tras el pase de Joaquín de la Torre al vidalismo, depende cada vez más de su proyección personal. Y el Movimiento Evita, que hasta hace pocos meses promovía la interna Massa - Randazzo, tiene poca incidencia en el peronismo de los intendentes. ¿Y si surgiese una candidatura peronista de base municipal para confrontar con Cambiemos en 2017, en el marco de una elección más provincializada? Se sostiene, con razón, que no hay tiempo ni voluntad para una “rebelión” de estas características. Pero no podemos descartar la hipótesis.

Conservadurismo o audacia

Con este trasfondo se entiende mejor el debate Monzó - Peña acerca de la relación que debe mantener, a partir de ahora, Cambiemos con sus “socios” peronistas. Ambos aspiran a lo mismo: reconstruir el “partido del ballottage” que llevó a Macri a la presidencia en 2017. Pero hay diferentes lecturas acerca de la identidad de ese partido. Monzó dice: el 51,5% de Macri fue logrado con votos peronistas (de Massa, De la Sota, Rodríguez Saá), y en 2016 gobernamos gracias a los acuerdos mantenidos con los peronismos. El razonamiento concluye: ¿por qué no sinceramos esa realidad e invitamos a algunos de esos socios a formalizar el vínculo? Así, no solo será más fácil la alianza con los socios, sino que los ayudará a fragmentarse, y será más difícil saber quién ganó y quien perdió, a nivel nacional, las elecciones de 2017.

Para Peña, en cambio, el partido del ballottage es el no-peronismo. En este debate, Monzó es el conservador y Peña el audaz: el jefe de Gabinete quiere

una campaña electoral fuertemente basada en el PRO y la figura del Presidente, y despegarse cada vez más de la categoría duhaldista del cogobierno. Monzó dice que eso es una locura, Peña le responde “atrévete a soñar”. Pasan las semanas y el planteo de Monzó no pierde vigencia, pero sí oportunidad. Todo indica un equilibrio intermedio entre las dos posiciones: ejercicio cogobernante (hasta donde se pueda), estrategia electoral autónoma.

Mientras tanto, los cinco peronismos atraviesan sin demasiada angustia esta situación de ausencia de

liderazgo coordinador. Cada uno de los cinco peronismos sigue una lógica que incluye una fórmula de gobernabilidad, supervivencia y hasta un cierto crecimiento propio. No se le puede pedir al peronismo un liderazgo personalista, ni es necesario: una vez que surja una candidatura presidencial expectante, las cinco lógicas tenderán a unificarse. No hace falta, como en 1984 o 1985, elegir un jefe hasta las elecciones de 1989:

aquí, las elecciones se aproximan a pasos agigantados.

El problema es: ¿cómo surgirá esa candidatura presidencial expectante? ¿O habrá más de una?

El massismo como partido post-peronista pierde sentido con el correr de los meses: entre las fugas de los intendentes y la cooptación de sus cuadros por parte de Cambiemos, lo que ha quedado en el Frente Renovador es una figura electoral potente, la suya, rodeada de afiliados justicialistas. Forma parte, hoy, de las opciones presidenciales del peronismo hacia 2019. Un saber extendido sostiene que el partido por la candidatura se jugará en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos también participa de este juego simbólico, ya que para el oficialismo también la elección se juega en la provincia más grande, la “madre de todas las batallas” como se la ha denominado tantas veces. Es la posibilidad de que vuelvan Cristina y Randazzo, la oportunidad de Massa; el terreno de Vidal, que es la gran esperanza electoral de Cambiemos. Todos han hecho de esta elección provincial una suerte de superclásico del 2017. Y el mecanismo de la profecía autocumplida es uno de los más fuertes que existen en la política: si todos creen que el ganador de la provincia será el candidato presidencial del peronismo, entonces es probable que así sea. Pero, hay que recordarlo, no hay una lógica institucional clara detrás de esa presunción. ¿Qué ocurriría si el peronismo pierde esa elección? ¿O si finalmente el Partido Justicialista de la provincia decide impulsar a un candidato surgido del peronismo de los intendentes? Para el conjunto del peronismo, dado el volumen de poder y gobernabilidad que maneja y teniendo en cuenta la diversidad de dirigentes y de intereses que posee en sus cinco formatos actuales, comprar la tesis de la candidatura natural bonaerense puede implicar un riesgo.

En ese sentido, el peronismo parece destinado a volver a 1988. La experiencia de ser una oposición poderosa, multinivel y con tantas responsabilidades políticas lo convierte en un macro-partido sin jefe y atravesado por diferentes lógicas e intereses. Y sin un presidente en condiciones de imponer una candidatura presidencial, ni una provincia de Buenos Aires que provea hermanos mayores –ganar una elección de senador–, después de todo, no es lo mismo que ser gobernador–, no hay razones de peso que resuelvan el proceso de liderazgo. Se impone la necesidad de una interna partidaria nacional. Va a ser conveniente, entonces, que un hábil liderazgo político de coordinación conduzca a los cinco peronismos hacia la concreción del proceso. La calma y la seguridad que exhibe buena parte de los dirigentes peronistas de hoy sobre la segura unificación por venir dependen, en buena medida, de ello. ■

La suerte de la estrategia del primer año PRO –morigerar el fracaso económico con éxito político– se vio alterada hacia fin de año: en el Congreso, los peronismos lograron aglutinarse y cortar la buena racha oficialista. El nuevo escenario le plantea desafíos no sólo al Poder Ejecutivo, sino también a la gran y heterogénea familia peronista.

Consolidación del clivaje gobierno versus oposición

Veranito peronista

por Andrés Fianza*



Buenos Aires (Marcos Brindicci/Reuters)

Emilio Monzó tiene un pin azul con la cara de Máximo Kirchner. Lo guarda en una oficina de techo alto y vista gris hacia Combate de los Pozos: uno de los despachos que le corresponden por su condición de Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, cargo que lo deja segundo en la línea de la sucesión presidencial, solamente por detrás de Gabriela Michetti. El redondelito de metal está pegado por un imán a una pizarra blanca, en un rincón del salón. Ahí, sobre un fondo con el celeste fuertón que identifica al Frente para la Victoria (en realidad es un Azul 3005U, según el riguroso código de la paleta Pantone), figura tanto la foto como el nombre del hijo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Se trata de una aclaración innecesaria en el caso de Máximo, cuyas facciones y apellido resultan inconfundibles, al punto de que a él mismo le funcionaron como un mandato casi obligatorio para postularse a diputado en el 2015. Alrededor del pin de Máximo hay otros 71 con el mismo

color: el bloque completo del FpV, con sus nombres y caras, aunque sólo un poco menos de la mitad de esos 71 legisladores responde efectivamente al liderazgo de Máximo Kirchner. La mancha de diputados azules está ubicada a la izquierda de la pizarra, tal como están dispuestas las bancas en el hemiciclo. A la derecha de esa especie de abanico representativo de la Cámara Baja, se planta el pelotón amarillo: 87 chapitas con los diputados de Cambiemos. Hasta hace poco más de un año, antes de que el macrismo rompiera el mito de la invencibilidad peronista, la distribución era a la inversa: el oficialismo kirchnerista (siempre mayoritario) ocupaba el sector de la derecha. En el TEG de la oficina monzonista, entre los azules y los amarillos aparece la tropa de Sergio Massa, incluido el jefe del Frente Renovador. Son 37 y su color es el violeta. Desde ese callejón intermedio los massistas intentan abrirse paso ansiosamente hacia la izquierda, hacia la derecha y sobre todo hacia el futuro. Pegadita a ellos, hay una franja negra de pines: los 17 justicialistas de Diego Bossio, la tercera rama peronista

(pero no la última) con voz en la Cámara. A la izquierda del FpV, en distinguido verde oceánico, figuran seis fichas del sello Peronismo para la Victoria, una escisión del kirchnerismo que incluye al Movimiento Evita de Fernando “Chino” Navarro.

A lo largo de su primer año en el poder, el gobierno se sirvió de esa dispersión opositora dentro de la gran familia peronista. Una fractura que excedió largamente las intrigas palaciegas del Congreso: la derrota en los penales del balotaje centrifugó al peronismo, hasta convertirlo en un grupo de tribus resentidas y desconfiadas entre sí. El revoleo de bolsos millonarios por parte del ex secretario de Obras Públicas José López, segundo de Julio De Vido durante 12 años, potenció la atomización. Y a su vez legitimó la versión, muy presente en las redes sociales y algunos medios, de que el kirchnerismo fue una asociación ilícita como cualquier otra banda delictiva común, sólo que más duradera y montada desde el Estado.

“Hasta la foto del peronismo unido, la contradicción principal del universo opositor radicó en la di-

ferenciación interna, con fuertes dosis de inercia: un kirchnerismo que se seguía comportando como si liderara una coalición de Gobierno, obsesionado con señalar a los que se iban, y un peronismo no-kirchnerista que no se comportaba como si fuese opositor, obsesionado con diferenciarse del kirchnerismo. Es decir: de su propio pasado reciente”, resume el director de la consultora Ibarómetro, Ignacio Ramírez.

Ante ese paisaje del apocalipsis peronista, con olor a napalm en las mañanas, el macrismo avanzó con éxito en sus políticas de ajuste. No encontró dificultades ni demasiada resistencia, salvo por la predecible (y por momentos estereotipada) que oponía el cristinismo. Para mover la economía, Mauricio Macri depositó su fe capitalista en la estampita de las inversiones privadas. Lo hizo en reemplazo de la que había elegido el kirchnerismo: la del consumo. Pero los dólares nunca llegaron, en un contexto global más bien reactivo para ese tipo de desembolsos, y entonces Argentina se quedó sin inversiones ni consumo. En una suerte de compensación no monetaria, el gobierno vivió de cierta inercia anti-kirchnerista, sumada al handicap del crédito social con el que todavía cuenta. Así, en ese *déjà vu* diario se pasó el primer año del ciclo PRO: el éxito en la acción política financió el fracaso de la economía. En la última curva del año, sin embargo, una serie de retrocesos y errores no forzados del gobierno alteraron aquel guión. La escalada de esa mala racha oficialista (que recién sobre el cierre del año se revertiría parcialmente) fue la convocatoria a sesiones extraordinarias: ahí no consiguió los votos para aprobar su proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias. Por el contrario, la oposición (con base en los cuatro ramales que tiene el peronismo en Diputados) unificó sus proyectos y consiguió darle media sanción. Los autores de su letra chica fueron los economistas Marco Lavagna (FR) y Axel Kicillof (FpV). Macri sintió ese acuerdo como una traición imperdonable por parte de Massa: se fastidió tanto, que lo acusó de impostor desde radio Mitre, omitiendo por un rato su estrategia de polarizar exclusivamente con Cristina Kirchner.

En Casa Rosada, desde su oficina amplia con vista a Plaza de Mayo, un funcionario del equipo comunicacional de Marcos Peña asegura que la maniobra terminó siendo perjudicial para Massa. “Le hizo perder el voto potencial de nuestro electorado. En los focus siempre le salta que no es confiable. Ese es su mayor déficit. Y esto lo corrobora 100%”, explica el subsecretario, sin falta protegido por su Mac finita y gris. El macrismo intenta hacer virtud de sus dificultades: negocia en bambalinas, se ofende, se autoconviene de su relato o refuerza su *speech* antiperonista, en función de las opciones que le queden a la mano.

Más allá de la agenda común

La audaz jugada de la oposición dejó al oficialismo al borde del veto o, en el mejor de los casos, de la negociación frenética con la conducción de la CGT, los senadores (especialmente con su favorito: Miguel Ángel Pichetto) y los gobernadores. Cuando la ley parecía arrinconar a Macri hacia una decisión incómoda, nueve gobernadores opositores se reunieron en el subsuelo del hotel Savoy: ahí, un poco presionados por el oficialismo (Macri no inventó esa pólvora, pero la sabe usar), sacaron mejor las cuentas sobre los millones de pesos que dejarían de recaudar. En conclusión, sellaron un clima de rechazo al proyecto.

Una vez alcanzada esa primera posta favorable, el gobierno citaría a la cúpula de la CGT en el Ministerio de Trabajo: de un lado de la mesa de madera larga, Jorge Triaca, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y un embajador de Marcos Peña: su vice en la jefatura de gabinete, Mario Quintana. Enfrente, el triunvirato cegetista compuesto por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña más algunos gordos e independientes. Sobre la mesa vidriada, vasos de vidrio altos, jarras de agua y de Coca, celulares, hojas en blanco y lapiceras. Bajo las luces de tubo de esa sala ministerial se cerraría un acuerdo sobre Ganancias, ubicado a mitad de camino entre el proyecto oficialista y el opositor.

Pero independientemente del desenlace, el solo hecho de compartir una agenda le sirvió al peronismo para recuperar la iniciativa perdida. Más aun: le sirvió

para ponerse de pie. O al menos para creer en la potencia de esa metáfora. Mientras tanto, la revitalización del PJ disimula todas las diferencias que aún subsisten entre los distintos peronistas, empezando por las surgidas a partir de una pregunta básica: ¿qué es hoy el peronismo? Mejor dicho: ¿qué quiere ser y representar? El trazo grueso de una respuesta se impone por default, casi en reacción física a la existencia del macrismo. Porque sin buscarlo, el oficialismo empuja en bloque a los peronistas hacia su izquierda. Si bien cada sello tiene una identidad y un discurso más afinados (o una pretensión al respecto), todos marchan en conjunto hacia la defensa del Estado, el empleo y la igualdad. Cualquiera otro casillero de la oferta electoral ya se encuentra tomado por el macrismo. Dentro de esa arena común, Cristina Kirchner carga con un plus épico y casi sentimental: toca el corazón de los pobres de La Matanza y el de una minoría progresista de clase media. En contrapartida, la ex presidenta irrita de forma insalvable a otros tantos, volviendo impracticable su convocatoria hacia la unidad amplia.

A la crítica por izquierda al macrismo, Massa le agrega sus dos temas fetiche: impuesto a las ganancias e inseguridad. Mago de la táctica, “ventajero” e “impostor” (cuando Macri está enojado), y creador de un postperonismo para peronistas (definición del sociólogo Ricardo Sidicaro), Massa canta a pedido de su público. Y si su audiencia está compuesta por una parte de la aristocracia obrera y los comerciantes del conurbano (una clase media emergente), el ex intendente de Tigre promete ocuparse de sus principales problemas, que parecen ser los robos y el impuesto a los salarios altos.

El veranito justicialista patea para adelante otra cuestión siempre clave para el folclore del PJ: ¿quién manda? ¿Massa o Cristina? ¿Y Florencio Randazzo? ¿Y quién de ellos es el mayor garante de la unidad? “Hay un proceso de renovación de cuadros peronistas, con intendentes y legisladores jóvenes. Lo que falta en algunos espacios es un liderazgo claro. Eso en el Frente Renovador está resuelto: es Sergio. Por una afinidad generacional, muchos se van a terminar acercando a nuestra fuerza”, apuesta el senador provincial Sebastián Galmarini. Hermano menor de Malena, Galmarini hincha en favor de la variante peronista de su cuñado. Al igual que Massa, y en contraste con la realización zen-familiar que parece buscar Macri, Galmarini curte un *way of life* integralmente dedicado a la política. Si promete devolver el llamado, lo cumple, aunque sea a las apuradas entre un acto y una reunión.

El otro interrogante, puesto convenientemente en suspenso, refiere a los principales candidatos de las próximas legislativas. El peronismo unido le ganaría con amplio margen a los postulantes de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires (¿Gladys González encabezará la boleta de senadores?). Pero a medida que se acerque el cierre de las listas esa ilusión se irá diluyendo: en el fondo, ni los massistas ni los kirchneristas creen que sea posible (ni del todo deseable) ese nivel de comunión. Para llegar a ese *deadline* faltan más de seis meses. Mientras tanto, tras un año en la trinchera (los kirchneristas), y en un cogobierno tenso con el macrismo (los massistas), las diversas tribus justicialistas se entregan a disfrutar su momento de protagonismo y de mini-gloria.

“El peronismo está en una situación muy distinta a la que teníamos seis meses atrás”, se auto-arenga el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, referente del llamado Grupo Esmeralda. “Hay un reconocimiento tácito por parte de todos: el panorama social y económico está muy complicado. Quedó claro que el gobierno no es el dueño de la pelota. Y eso generó algunos niveles de acuerdo y muchos estímulos para que nos organicemos y armemos algo en serio”, opina “Kato” con optimismo. El intendente de San Martín acaba de bajar del piso 19 del edificio porteño del Banco Provincia, ubicado a dos cuadras de la Casa Rosada. Ahí se había presentado, casi una hora antes, junto al presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, el jefe del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona. Los

cuatro se reunieron con el ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, uno de los peronistas (otro más) que fue incorporado a la administración bonaerense. En un alto de la negociación sobre el proyecto de presupuesto, el grupito peronista pidió que Vidal les cediera la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados bonaerense. Se trata de un rol que, vía un acuerdo de cogobierno entre la gobernadora y el FR, el año pasado le correspondió al massismo. Y se suponía que este año se repetiría ese

arreglo. Pero un poco a partir de la fricción entre Macri y Massa, los cuatro dirigentes se tiraron un lance. Y si bien no consiguieron ese objetivo de máxima, se llevaron otra promesa: la asignación de dos carguitos en la dirección de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Para las primeras, las segundas y hasta las terceras líneas del vasto club peronista, el cambio de clima ya se tradujo en un encadenado de asados,

brindis, chicanas por whatsapp, maquinaciones, delirios y conspiraciones en ciernes, bajo la convicción compartida de que el futuro de la patria está atado al peronismo. Signifique lo que eso signifique.

El planteo monzonista

Hasta hace un mes, Emilio Monzó miraba con orgullo la pizarra de los pines, con los nombres, las caras y la afiliación partidaria de los 257 diputados. A diferencia de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa en sus inicios presidenciales (las únicas dos gestiones no peronistas desde 1983), Mauricio Macri no tiene mayoría en Diputados. Con 87 bancas, Cambiemos constituye apenas la primera minoría de la Cámara. Pese a esa desventaja, logró aprobar más de 100 leyes propias, como el Presupuesto y el pago de casi 9.500 millones de dólares a los fondos buitres.

Ahora Monzó contempla las fichas con una mezcla de resignación y humildad a la fuerza. “Tenemos 87 bancas. Con 129 arranca una sesión. Siempre estamos 42 diputados abajo. Hay que negociar. En algunos casos uno por uno. Pero está también el trabajo de Rogelio Frigerio, un gran ministro, y los gobernadores son muy buenos. Ayudan mucho a hacer el esfuerzo para que las leyes que necesita el gobierno de Macri estén lo antes posible”, afirmó durante un almuerzo con Mirtha Legrand. Ya desde el primer plato de vegetales cocidos, la Chiqui lo había puesto bajo sospecha por su excesiva familiaridad con el universo peronista. Y cuando Monzó destacó la “inteligencia” de Máximo Kirchner y la “honestidad” de Axel Kicillof (previamente había endulzado a Massa y ninguneado al gurú Jaime Durán Barba), a Legrand ya le resultó demasiado. “Para muchos ustedes es kirchnerista”, lo acusó directamente, aunque una vez más lo hizo en nombre de la gente. Omitiendo sus orígenes en el semillero de la UCEDE (un olvido en el que también caen Massa, Amado Boudou y Ricardo Echeagaray), Monzó se justificó como pudo: “Soy peronista, Macri lo sabe desde el primer día”. Antes de sumarse al PRO, en 2011, Monzó fue duhalista, sciolista, randazzista y narvaecista. A lo largo de ese periplo se consagró como empleado de planta permanente del sistema político, siempre a golpe de teléfono para el cambio circunstancial de camiseta. Macri, en cambio, es un líder mucho más ideológico. El presidente acata los tips duranbarbianos que recomiendan hablar el idioma amable de los timbrees, las fotos con Antonia y el perro Balcarce. Pero a la vez se planta contra las exigencias de la ONU y reafirma que Milagro Sala, la jefa de la Tupac Amaru, tiene exactamente lo que se merece: prisión preventiva.

Monzó formó parte del gabinete ampliado (31 varones y 4 mujeres) que convivió durante dos días en la residencia presidencial de Chapadmalal. El macrismo presentó el evento costero como un retiro →

Desde la presidencia de Carlos Menem, el peronismo se volvió una identidad gelatinosa.

Dossier

El peronismo
contraataca

→ espiritual, aunque en la práctica estuvo más influenciado por las técnicas empresariales para mejorar los vínculos entre empleados y, por lo tanto, también sus rendimientos. Ahí, en el quincho del complejo construido por Perón en 1947, Monzó fue víctima de *bullying* por parte de sus compañeritos macristas. ¿El motivo? Sus elogios públicos a Máximo Kirchner. Hasta Macri lo chicaneó a la pasada, con ese tono papa en la boca que se le dispara cuando quiere ser sarcástico.

“Nos cargan porque elogiamos a Máximo y Massa, pero a ellos les responden setenta tipos. ¿Qué esperan que hagamos?”, contraataca un operador de Monzó, trajeado impecablemente al estilo del jefe, en una pausa de su relajo al celular.

Antes de aterrizar en Chapadmalal, Monzó ya se había hecho fama de problemático al reclamar una serie de cambios de gabinete, incluida la incorporación de peronistas. Si bien dio los nombres de Florencio Randazzo, Julián Domínguez y Gabriel Katopodis, el planteo apuntaba a sumar dirigentes (más) eficaces, tanto para la gestión como para el arte de la rosca. “Pedimos ni más ni menos que lo que está haciendo Vidal”, resumió un asesor de Monzó. En privado, el pálpito monzonista era (y sigue siendo) que el gobierno tendrá problemas de gobernabilidad en caso de no modificar la táctica vigente. Si Macri no apura algún cambio, Monzó pronostica dos complicaciones: caída electoral en provincia, más un año legislativo a la defensiva, en el que su trabajo se limitará a atajar los penales de la oposición.

“No se trata de amontonar”, le respondió Macri. El presidente cerró así la discusión, unos días antes de que se concretara el mini golpe palaciego en nombre del Impuesto a las Ganancias. Ante el hecho consumado, con Monzó haciendo cara de “yo te avisé”, no hubo ningún tipo de arrepentimiento por parte de Macri. A casi ningún presidente le resulta fácil cambiar de rumbo, de ideología o de ADN. Mucho menos después de haber llegado a la presidencia con la única ayuda de un radicalismo debilitado. Hace un año y medio, el macrismo desoyó el consejo de analistas, consultores, editorialistas, punteros, sindicalistas, chamanes y sabios de la política: se concentró en el juego propio y ganó las elecciones sin la necesidad de acordar con el peronismo.

Desde la vereda del PJ, en las últimas semanas hubo un bajón de libido respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno. Con la economía congelada y el clima de campaña a la vuelta de la esquina, hasta los peronistas más pragmáticos lo pensarían dos veces.

“Hay gente que todavía tiene buenos recuerdos del peronismo: ahí está su capacidad para revitalizarse”, señala el doctor en Sociología Ricardo Sidicaro, autor del libro *Los tres peronismos*. Con dedo en la sien y tono pausado, Sidicaro echa luz sobre el triángulo compuesto por Macri, Monzó y el peronismo: “En el gobierno, cada uno piensa algo distinto cuando habla de peronismo. Los más realistas o los que tienen cuestiones negociables saben que todo se arregla. La confusión es creer que existe algo que existió hace 30 o 40 años, pero ya no existe más”.

Desde la presidencia de Menem, el peronismo se volvió una identidad gelatinosa. Es un dato viejo, sólo ignorado por algunos románticos o carcamanes esencialistas. No hay un peronismo: hay peronistas. Para todos ellos, con la excepción de la minoría que ya integra Cambiemos, el 2017 llegó con una alteración del escenario. Y no se trata de un intento de unidad mítica, casi inviable (y excepcional) en la Argentina real de los peronistas reales. La novedad es la consolidación del clivaje gobierno versus oposición, hasta ahora relegado por la omnipresencia de Cristina Kirchner y los pases de facturas intra-peronistas. Aliviado por el cambio, un intendente no cristinista del conurbano lo explica a su manera: “Al fin dejamos de hablar de la imagen 70%-30% en contra que tiene Cristina, y pasamos a hablar del 60%-40% en contra que tiene Macri”. ■

PERONISTAS ORIGINARIOS Y RECIÉN LLEGADOS

Lejos de la pose purista de Macri

Los constantes pases de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires desmienten los esfuerzos de algunos dirigentes PRO que insisten en presentar a su fuerza como “pura”.

Immediatamente antes del “perá, perá, perá” de manual, el filósofo Alejandro Rozitchner sentenció: “El peronismo no existe más”. Lo aseguró en el programa *Animales Sueltos*, ante un excitado Alejandro Fantino, quien pronosticó en el acto que la frase escalaría hasta volverse *trending topic*. La performance televisiva de Rozitchner ocurrió dos días después de que las distintas ramas del peronismo se aliaran en la Cámara de Diputados con la intención de votar el proyecto (finalmente trunco) de reforma al Impuesto a las Ganancias. El filósofo y asesor presidencial a su vez resumiría ese ensayo de unidad como “un rejunto de dirigentes probablemente llevados de las pestañas por Cristina”.

A pesar del aire nietzscheano que emana la afirmación sobre la muerte del peronismo, Rozitchner le da un sentido más empírico que filosófico. Tanto él, como Marcos Peña y Jaime Durán Barba concluyen que las mochilas de los partidos dominantes ya casi no tienen influencia. Según sus cálculos, si más del 50% de los votantes tiene hasta 40 años, la mayoría de los argentinos ya se liberó de ese mandato (de esas cadenas, mejor dicho), al momento de elegir a sus gobernantes. Y el resto de la sociedad, pese a cierta inercia del *Ancien Regime*, marcha sobre un monorriel hacia ese comportamiento autónomo. La mezcla entre biología, modernidad líquida y pragmatismo de época atenta contra la vigencia de la marca peronista. Ante los ojos de Rozitchner, Peña y Durán Barba, el triunfo electoral de Cambiemos funcionó como la confirmación práctica de esa evidencia. “La mayoría considera irrelevante si un candidato es peronista o no. Es un fenómeno de dirigentes que desconocen las necesidades del votante y así les fracasa el truco”, remataría Rozitchner frente a Fantino.

A sus 55 años, Rozitchner nunca había entrado a la Casa Rosada. Ojeroso, de barba, fanático de Led Zeppelin y fumador casi diario de marihuana, ahora tiene oficina propia en el segundo piso, arriba de la de su amigo Mauricio Macri. Sobre las paredes blancas de su despacho colgó más de veinte rectángulos de 20 por 15 centímetros: son impresiones del *power point* que proyecta en su curso sobre positividad inteligente. “El pensamiento crítico es falsa inteligencia”, afirma una de las máximas rozitchnereanas que decoran su oficina.

Estilo PJ

La mini-aldea del asesor presidencial, sin embargo, no pinta acabadamente al mundo PRO. En planta baja, al fondo de la Casa Rosada, el viceministro del Interior optó por una ambientación en la que Mauricio Macri puede convivir en armonía con Perón y Evita. En su despacho, ubicado a la misma altura que el de Rozitchner, Sebastián García de Luca colgó dos cuadros: una foto de Macri recién asumido como presidente, alegre con el bastón y la banda; y otra del abrazo mítico entre

el General y Eva. A los 36 años (nació en Chivilcoy 6 años después de la muerte de Perón), García de Luca es un engranaje de peso en la maquinaria político-electoral del macrismo. Un sistema que atiende, contiene y discute con intendentes, gobernadores y legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. En su vida previa al PRO, el segundo de Rogelio Frigerio fue secretario durante la gobernación bonaerense de Felipe Solá.

“Vengo del peronismo, siento la bandera y la defiendo. Pero he visto cómo muchas personas que cantan la Marcha y están afiliados han hecho lo contrario a lo que indica la historia del partido. Creo más en los hechos y en la gestión concreta, tal como promueve Macri, que en la necesidad de ubicarse en determinadas banderías”, afirma García de Luca, en un alto de su encadenado de reuniones.

Lejos de la post-ideología de las buenas ondas, y también de la invocación peronista hecha con arreglo a fines prácticos, María Eugenia Vidal se anota un puntito por cada dirigente del PJ que suma por goteo a sus filas. Meses atrás, se agenció al ex intendente de San Miguel (primero por el kirchnerismo y después por el masismo), Joaquín de la Torre. La gobernadora le dio el cargo de ministro de Producción, y después lo ascendió a ministro de Gobierno. Y hace tres semanas recibió en el edificio porteño del Banco Provincia al intendente de Castelli, el peronista Francisco Echarren. Los funcionarios Federico Salvai y Axel Campbell (los dos casi cuarentones y con cierta tradición peronista en sus biografías) fueron los encargados de gestionar la incorporación. Mediante la difusión de una foto de Echarren y Vidal (ella muy sonriente), ambos sentados en un sillón de gamuza, el PRO anunció el cambio de camiseta del intendente. Ex militante del llamado Grupo Fénix (el colectivo de mandatarios aún cercanos a Cristina Kirchner), Echarren ya asumió como subsecretario bonaerense de Vivienda, Tierra y Hábitat. En el lapso de un mes, pasó de cristinista línea Julio De Vido a funcionario macrista del ala de Vidal. Y si bien es un dirigente desconocido, y Castelli es un municipio con menos de diez mil habitantes, Vidal le inyectó hormonas a la noticia. Todas las que pudo.

En contraste con la pose purista de Macri, la gobernadora y su equipo no disimulan a los peronistas de su gabinete. Al contrario, estetizan peronistamente cada pase, cada acuerdo y cada negociación que revuelca y empareja al PJ con Cambiemos. Se trata de los rituales machos que, según supone un sector del macrismo, facilitan la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires. ■

A.F.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

*Periodista.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

AHORA MÁS SIMPLE

nopucid[®] Focus

E F E C T I V O
100%
No tóxico
NO ES UN MEDICAMENTO

con **DeltaCitrol** de acción directa para eliminar piojos y liendres al instante.

PROTEGE EL PELO

DESDE LOS 2 AÑOS

RENDIDOR



nopucid.com.ar

Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

Codesarrollo



CONICET
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

ELEA

Luis Felipe Noé, *Estamos en el siglo XXI*, 2004 (Gentileza Rubbers)

La derrota del Frente para la Victoria y las medidas del nuevo gobierno favorables al Grupo Clarín envalentonaron a Magonetto a contar su versión de la guerra con el kirchnerismo. En un libro administrado por su propia empresa, el CEO confirma que el duelo está lejos de terminar.

Sobre *Así lo viví*, conversaciones entre Magonetto y Novaro

Kirchner y yo

por Martín Sivak*

Un año después de inventariar los cañones del periodismo de guerra que comandó durante siete años, Héctor Horacio Magonetto pierde la oportunidad de autoexaminarse y examinar el mundo *Clarín*. En un libro de conversaciones revisita la oratoria que su firma desplegó durante la prolongada confrontación con el matrimonio Kirchner. Pero el CEO no explica las razones o el origen del conflicto, elude las inquisiciones sobre la trayectoria del grupo y elige la esgrima contra las caricaturas anti-clarinistas.

El contexto de publicación de *Así lo viví: el poder, los medios y la política argentina* podría prestarse a la magnanimidad del que se cree vencedor. Con la derrota electoral del Frente para la Victoria, el Grupo ha recuperado su proyecto de expansión y diversificación *en suspense* desde la 125: semanas después de la asunción del ingeniero Macri consiguió la primera gran caricia oficial con la derogación vía decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su 7-D invertido. Poco interesado por el presente promisorio y el muy frecuentado debate sobre el futuro de la industria, Magonetto se inclina por el pasado para continuar su diálogo imaginario con Néstor Kirchner, el otro duelista. Esa fijación no ha quedado en el mundo privado del CEO, ni en su libro: ciertos segmentos de sus medios continúan li-

brando el cuerpo a cuerpo con Cristina Fernández de Kirchner, como si la guerra nunca hubiese empezado.

El poder de no explicar

Desde que en 1982 Magonetto instrumentó el despido de sus camaradas frigeristas para comenzar el mayor proceso de expansión de la prensa moderna en América Latina, su empresa recurrió al asesoramiento de intelectuales en dos ocasiones. A comienzos de la década de 1990 contrató a un grupo heterogéneo –Eliseo Verón, Oscar Landi, Aníbal Ford, Alberto Ure, Alejandro Piscitelli– en busca de análisis cuantitativos sobre sus lectores y de ideas y sentidos para darle forma y coherencia al multimedios. Verón determinó que las Criollitas y el Obelisco eran como *Clarín*: parecía todo y nada a la vez. Para diferenciarse, debía apostar a la calidad periodística en un período de supremacía y prestigio social.

En 2010, el multimedios convocó a una mesa de intelectuales y especialistas para administrar el conflicto con el kirchnerismo. Participaban Marcos Novaro, el hoy *animal suelto* Sergio Berensztein y otros. En esas mesas de arena, Novaro advirtió lo que nadie quería escuchar en la calle Piedras: que CFK podía recuperarse de la muerte de su esposo y conseguir la reelección.

Desde entonces Novaro ha sido consultor de la empresa, ha participado en la publicación de varios libros de *Clarín*, co-

mo *Democracia y Desarrollo* y expone sus opiniones sobre Argentina y el mundo en los medios del multimedios. Investigador del Conicet, autor de libros sobre historia reciente y de divulgación, Novaro subraya que en su trabajo sobre los empresarios argentinos encontró una incertidumbre similar a la de los dirigentes políticos. Su impresión de Magonetto destaca una dualidad: cierta apertura que no disimula “una profunda y constitutiva intransigencia”.

En este libro, administrado por su propia empresa, Magonetto mantiene su intransigencia: no responde a la intemperie. Desde que entró a *Clarín* en 1972 ha dado muy pocas entrevistas. La mayoría durante el conflicto con el kirchnerismo y a la prensa internacional. A los periodistas argentinos les ha fijado reglas precisas: preguntas anticipadas, *off the record*, difusión pactada de algunas respuestas. Magonetto sólo se expuso a una entrevista no controlada con un argentino cuando aceptó la invitación de Bernardo Neustadt a un vivo de *Tiempo Nuevo* en diciembre de 1989. Les sobraban razones para lucir exultantes: *Clarín* acababa de ganar la licitación de Canal 13 y Neustadt oficiaba de escribano de las privatizaciones de la presidencia Menem.

Los CEO de las grandes empresas periodísticas –los pares de Magonetto–, los jefes de Estado, las autoridades de sindicatos y empresas han mostrado mayor predisposición para las entrevistas que el elusivo Magonetto, mucho más próximo a los procedimientos de las monarquías europeas.

El poder, para Magonetto, es la prescindencia de dar explicaciones. *Así lo viví* es la continuación de esa idea por otros medios.

Pretendidamente invisible, consigue que su rostro no aparezca en el libro, como había ocurrido con su biografía autorizada *El hombre de Clarín*, también administrada por su empresa. Para intentar condensar una época, elige una foto de una bandera desplegada de *Clarín mente* –aquel eslógan que Moyano no patentó a tiempo– y firmada por Comunidad del INDEC. El libro debería llamarse *Kirchner y yo*.

Reescribir la historia

Magonetto pretende establecer el fin de las metáforas. No practicó periodismo de guerra, no se divorció de los Kirchner. También avanza sobre hechos verificables: desconoce empatía y un buen vínculo inicial con Néstor Kirchner. No hubo nada hasta que, inopinadamente, el santacruceño se propuso quedarse con su empresa y conseguir su arresto. Como pionero que primea a la doctora Carrió, asegura que había advertido el riesgo totalitario en 2003. “Recuerdo una luz amarilla que mencioné ya en el encuentro gerencial a fines de 2003, época en la que, según el mito, supuestamente estaba en pleno auge el idilio entre *Clarín* y los Kirchner. Dije que el reto que tenía el gobierno era encarar la construcción desde una visión pluralista, evitando la tentación hegemónica y aceptando las críticas.” En el anexo del libro se publican frases parciales de ese y otros discursos privados que intentan mostrar que descubrió al monstruo en su concepción.

Hay una constante de la empresa en sus tres etapas (la de Roberto Noble, la de Rogelio Frigerio y la de Héctor Magonetto): no tiene una conversación sobre su historia; prefiere la reescritura. El suplemento de los 50 años, en 1995, es uno de los ejemplos contundentes. Con una elección capciosa de párrafos, intenta cambiar sus posiciones editoriales sobre el primer peronismo, el Cordobazo, la última dictadura militar, el gobierno de Alfonsín y otros.

Magonetto resalta la obsesión de Kirchner con los contenidos de *Clarín*, cuantifica sus encuentros bilaterales (no más de siete u ocho en los cuatro años de mandato y un par de veces más desde que asumió CFK) y hasta aporta una versión de uno de esos encuentros. Antes de las elecciones de 2009, el entonces ex presidente le pidió al CEO acompañamiento en la campaña electoral a cambio de no mandar una ley que se parecería a la “ley de medios”. Ante cada oferta de Kirchner, Magonetto aparece como sorprendido. Como si de la nada alguien le hubiese ofertado algo impensado y no como parte del ajedrez tenso que ambos practicaron.

Magonetto omite las concesiones del kirchnerismo a *Clarín* –como la fusión de las empresas de cable–, y minimiza un tema central del origen del conflicto: el ingreso de *Clarín* a Telecom, prioridad del Grupo para acceder al triple Play. Kirchner inicialmente dio luz verde para que el multimedios entrara, luego exploró que se asociara con un grupo de empresarios afines a la Casa Rosada y cuando la relación se agrietó, evitó el ingreso de *Clarín*. “Creo que él llegó a fantasear con algún tipo de sociedad con nosotros. De hecho, quiso apostar a algo así con el tema de Telecom”. No fue una fantasía: fue un proyecto concreto del que participaron ejecutivos del Grupo Clarín que no actuaron como librepensadores.

Así lo viví es, en muchos pasajes, un libro sobre los intentos del CEO de *Clarín* de caracterizar al kirchnerismo: “un régimen de orientación autoritario y populista”, ensaya. Entre sus rasgos, el contador destaca la concentración de poder, la perpetua-

ción, la apropiación de recursos, la primarización de la producción y el consumo sin inversión. Magnetto no ve en el Kirchner rasgos desarrollistas ni el esbozo de una ideología: lo describe como un mero acumulador de poder y dinero. Sostiene que Argentina iba camino a convertirse en Venezuela. Rogelio Frigerio (abuelo del actual ministro) no hubiese tolerado la idea de la venezuelización: educó a sus cuadros a estacionar la economía antes que a la política y evaluar las condiciones estructurales que harían imposible ese viaje. Magnetto le reconoce a Kirchner la renegociación de la deuda externa, el abordaje del conflicto social sin violencia, la contención temporaria de las tarifas, los superávits gemelos y la renovación de la Corte.

¿Por qué *Clarín* sobrevivió al kirchnerismo? La cohesión interna de la empresa, la fidelidad de las audiencias y la integridad en los negocios son las explicaciones del CEO. En otras palabras, Magnetto cree que ganó porque tuvo la calle, otra de las aparentes disputas con NCK. Omite una variable fundamental a la supervivencia: la espalda financiera del negocio del cable.

El kirchnerismo subestimó esos rasgos centrales, en particular la masividad de sus audiencias, y prefirió pensar en la tomografía de un medio cómplice de la dictadura y padrino del neoliberalismo.

Desde la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas investigó el caso Papel Prensa entre 1984 y 1988. En las conclusiones de su trabajo –el más serio y riguroso producido por un organismo estatal– señala que se trató de uno de los casos de corrupción más graves de la historia argentina. En lugar de responder a Molinas, Magnetto eli-

ge levantar la guardia a los desvaídos guantes de Guillermo Moreno. Sostiene que en el informe Papel Prensa preparado por el ex secretario de Comercio, Moreno inventó pruebas. “Fue el episodio más parecido a los juicios de Moscú que se haya visto en el país. Todo una leyenda.” En los juicios de Moscú de la década del 30 se juzgó –y en muchos casos se ejecutó– a ex miembros del Partido Comunista. Magnetto insiste con una idea: la compra de Papel

Magnetto tiene una notable insensibilidad frente al dolor ajeno y elude responsabilidades.

Prensa fue beneficiosa para la industria y para la sociedad. En la única mención a su política editorial durante la dictadura militar destaca que *Clarín* “fue el primer diario en cuestionar el plan económico”.

Magnetto tiene una notable insensibilidad frente al dolor ajeno y elude responsabilidades. En el libro elige presentarse como víctima. “Uno de los peores momentos (del conflicto) fue cuando intentaron mezclar dos historias inventadas, el caso de Noble y lo de Papel Prensa, para tratar de meternos presos a la señora de Noble y a mí.” Hasta el 10 de diciembre de 2015, el grupo Clarín eludió el au-

toexamen sobre su línea editorial frente a la dictadura por considerarlo una concesión al kirchnerismo. En su libro Magnetto confirma que no tiene ningún interés en ensayar una explicación.

Los tiempos de Macri

En el mundo de los dueños de medios argentinos, Magnetto es el que tiene mayor formación política e intelectual. Lee, estudia y no hace citas eruditas innecesarias. En las conversaciones con Novaro decide desconocer una parte de su biblioteca y de las bibliotecas del mundo: las que sostienen que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación es un problema para la democracia. Considera la concentración como un fenómeno global que *Clarín* también padece con anunciantes cada vez más concentrados. Cuando Novaro le insiste con el tema, responde que se trata de una pregunta anacrónica y analógica. “Su pregunta parecería trasuntar cierto reproche. Como que hubiera responsabilidad de *Clarín* en la ausencia o escasez de otros multimedios”. Todos los competidores de Magnetto piensan lo contrario: Julio Ramos de *Ámbito Financiero*, Héctor Ricardo García de *Crónica* y Jorge Fontevicchia de *Perfil*, entre otros, lo han dicho en voz alta. Magnetto dice creer que la competencia es franca y que nunca jugó con la cancha inclinada.

En cuanto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pensada para reducir el tamaño de *Clarín*, Novaro le cuestiona al CEO que su empresa haya priorizado el escueto planteo de inconstitucionalidad. Magnetto tampoco responde: “La ley fue una parte esencial de una estrategia de domesticación de la prensa”.

Desde que asumió Macri, *Clarín* ha conseguido el decreto de anulación de la Ley, la recomposición de la pauta publicitaria (el Poder Ejecutivo se propone fijar montos de acuerdo a las audiencias), el buen trato y el acceso periodístico y el fin de la “clarinización” del debate público. La posición del gobierno es que el mercado, o los grandes jugadores del mercado, ordenen la industria y eventualmente disminuyan la influencia del multimedios. Asoman las primeras tensiones leves a través del conflicto entre Telefónica y *Clarín* por el reingreso a la telefonía celular, la televisación del fútbol y otros.

Desde el primer semestre Macri ha recibido pedidos específicos del multimedios, como que ayude a terminar las causas judiciales pendientes (1). Sobre el final del segundo semestre, el juez Fabián Ercolini sobreesayó a Magnetto en la causa de Papel Prensa. Cuando *Clarín* se vuelve más crítico del gobierno, el Presidente ubica al CEO en el círculo rojo que siempre lo subestimó y, supuestamente, apuesta al empoderamiento de Sergio Massa. En su libro Magnetto dice muy poco sobre el Presidente. “Se cierra un ciclo negativo y hay una oportunidad... Veo aciertos y errores de gestión, pero también un camino orientado a recuperar cierta normalidad a la Argentina (sic)”. Para el Grupo, la normalidad argentina se parece a la *pax clarinista*. ■

1. Un viejo consultor de la empresa, Fabián Rodríguez Simón (*Clarín* administró su libro *Clarín y la ley de medios* que salió días después del fallo adverso de la Corte y por eso sólo se distribuyó en la cadena Cúspide, perteneciente al Grupo) es el principal operador judicial de Macri.

*Periodista. Autor de *Clarín, la era Magnetto* (2015) y *Clarín, el gran diario argentino. Una historia*, (2013), Planeta. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

EXPLORADOR

Los cinco números del año reunidos en una caja

Cuarta serie

1. CUBA
2. COLOMBIA
3. VENEZUELA
4. PERÚ
5. BOLIVIA



EN VENTA
EN LIBRERÍAS

LE MONDE
diplomatique

www.eldiplo.org

Ci Capital intelectual

Con una hoja de ruta sin demasiados apegos a grandes principios estratégicos, el nuevo presidente republicano redefinirá el papel de su país en el mundo, percibido como una gran selva donde los peligros pueden presentarse en cualquier lado. Su primer objetivo será “aniquilar al Estado Islámico”.

EE.UU.: El mundo según Donald Trump

“Primero Estados Unidos”

por Michael Klare*



Andy Warhol, *Guns*, 1981 (gentileza Christie's)

Es difícil saber con precisión cómo será la política exterior de Donald Trump. El presidente republicano no detalló sus intenciones ni en documentos escritos ni en discursos. Muchos le atribuyen un enfoque poco informado o incoherente, que se alimenta de los grandes titulares de la prensa y de su experiencia de hombre de negocios. Algunas entrevistas o declaraciones de campaña y, más recientemente, la elección de los miembros de su administración permiten ver las cosas de un modo un poco más claro. Trump posee una visión, tal vez no reflexionada con madurez pero relativamente coherente, del mundo y del lugar

que ocupa su país. Dicha visión contrasta con la de la mayoría de los expertos o responsables políticos estimados por Washington.

Estos últimos, como lo percibe rápidamente cualquiera que pase unos días en la capital, ven círculos concéntricos que se despliegan a partir de la Casa Blanca. Canadá, el Reino Unido y los demás aliados anglófonos se sitúan en un primer anillo, los otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Japón, Corea del Sur e Israel en un segundo, los socios económicos y militares de larga data, tales como Taiwán, Filipinas y Arabia Saudita, en un tercero, y así sucesivamente. Fuera de ese

sistema de relaciones de dependencia se encuentran los rivales y adversarios de Estados Unidos: Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Durante décadas, la política exterior estadounidense apuntó a reforzar los vínculos con y entre los países amigos, y a debilitar o aislar a los excluidos. A veces, esto implicó entrar en guerra para proteger a aliados periféricos por el temor, real o supuesto, de que los aliados más cercanos se encontraran en peligro.

Trump, que no pasó mucho tiempo en Washington, no comparte esta visión común a la mayoría de los responsables políticos, republicanos o demócratas. Como hombre de negocios neoyorquino con intereses en el mun-

do entero es ajeno a cualquier concepción estructurada que atribuya roles definidos a los aliados, amigos y enemigos. Así, se siente más a gusto con Rex Tillerson, el CEO de ExxonMobil al que acaba de elegir como secretario de Estado. Los dos hombres perciben el mundo como una enorme selva en la que la competencia es la regla y en la que las oportunidades y los peligros pueden presentarse en cualquier lado, independientemente de la lealtad de los países concernidos o de su supuesta hostilidad hacia Washington.

Un tablero mundial competitivo

Desde esta óptica, Estados Unidos no es el centro de una familia de Estados dependientes que tendría la misión de proteger, sino uno de los poderes que luchan para asegurarse posiciones y beneficios en un tablero planetario competitivo. El objetivo de la política exterior se convierte, entonces, en promover sus intereses, es decir, también en poner en jaque a aquellos que busquen obtener una ventaja a costa de ellos. De esta manera, cada Estado será juzgado con el rasero de su contribución a los intereses estadounidenses, y Trump planea utilizar los instrumentos de los que dispone para recompensar a los socios y castigar a los adversarios. Los primeros pueden esperar ser recibidos en la Casa Blanca y que se les propongan acuerdos comerciales ventajosos. Los segundos deberán pagar derechos de aduana disuasivos, resignarse a ser diplomáticamente aislados y, en caso de provocaciones que se juzguen inadmisibles, sufrir una intervención armada.

Para mantener esta hoja de ruta despejada de cualquier apego a grandes principios, Trump se rodeó de un equipo capaz de recompensar la colaboración por medio de interesantes arreglos (Tillerson en el Departamento de Estado) o emplear la fuerza contra los enemigos designados (el general Michael Flynn como asesor de seguridad nacional y el general James Mattis como secretario de Defensa). Para garantizar la credibilidad de una eventual opción militar, recomendó una expansión masiva de las Fuerzas Armadas –en particular de la marina, la más adaptada a las demostraciones de fuerza y las operaciones de choque (1)–.

¿Cómo será la puesta en música de esta partitura en las diversas regiones del mundo? Hay que comenzar por Medio Oriente y la guerra contra la organización del Estado Islámico (EI). En efecto, desde el principio, Trump clamó que su objetivo número uno sería “destruir al EI” y aplastar toda otra manifestación del “terrorismo del Islam radical”. El 7 de septiembre de 2016, en Filadelfia, declaraba: “Inmediatamente después de mi entrada en funciones, pediré a mis generales que me presenten en treinta días un plan para vencer y destruir al EI” (2).

En gran medida, la guerra de Estados Unidos contra este grupo es percibida como un problema de política interior. La determinación a destruirlo le debe mucho al temor a atentados en suelo estadounidense y a la hostilidad que inspira el “Islam radical” en general. Trump anunció que este combate no tendrá medias tintas: todos los recursos de los que disponga el ejército serán consagrados a una impiadosa campaña de aniquilación; si parientes y civiles asociados al EI pagan las consecuencias, mala suerte para ellos.

Aunque este enfrentamiento conlleve sobre todo al ejército, conlleva

importantes implicaciones diplomáticas. En primer lugar, hay que saber a quién le podrá pedir Washington que contribuya en la erradicación del EI. Es en ese marco en el que Trump imagina una posible alianza con Vladimir Putin. “¿No sería estupendo juntarse con Rusia para demoler al EI?”, se preguntaba el 25 de julio de 2016 durante un mitin en Carolina del Norte (3). También sugirió retomar relaciones con Damasco: “No me gusta nada Al-Assad, pero está combatiendo al EI”, declaró en el segundo debate televisivo que lo enfrentó a Hillary Clinton, el 9 de octubre de 2016. A cambio, los presidentes ruso y sirio podrían obtener algunas ventajas: para el primero, el reconocimiento de hecho de la anexión de Crimea por parte de Rusia y el levantamiento de las sanciones; para el segundo, el cese a toda asistencia a los rebeldes que luchan contra su régimen.

Probablemente Trump intente cerrar arreglos de este tipo con los demás actores principales de la región. Por ejemplo, es posible imaginar un acuerdo rápido con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, por el que los turcos acentuaran su presión sobre el EI a cambio de un mínimo apoyo estadounidense a los combatientes kurdos de Siria –los que, sin embargo, hasta ahora demuestran ser la fuerza más eficaz en la ofensiva terrestre contra los yihadistas–. Erdogan fue uno de los primeros jefes de Estado extranjeros en felicitar a Trump después de su victoria y ambos habrían mencionado una cooperación intensificada contra el “terrorismo”. También es posible que Trump facilite la extradición del religioso turco exiliado Fethullah Güllen, que Ankara considera responsable por el golpe de Estado abortado de julio de 2016 (4).

En cambio, las relaciones de Washington con Arabia Saudita corren el riesgo de padecer la intensificación de la ofensiva estadounidense contra el EI. Los dirigentes de esta organización, como los de Arabia Saudita, son sunnitas, como también lo serían la mayoría de las futuras víctimas de los bombardeos aéreos contra las posiciones de la organización. De forma simétrica, las fuerzas que combaten al EI en el terreno cuentan con una proporción elevada de chiitas, ya se trate, en Irak, de las milicias apoyadas por Irán, o, en Siria, de los alauitas y sus aliados. A los ojos de Riad, su victoria y la subsistencia del régimen de Al-Assad sólo pueden significar el triunfo de Irán, su principal rival en el Golfo. Un próximo deterioro de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita parece tanto más probable cuanto que Trump insiste en hacerle pagar a precio de oro la protección que recibe. En uno de esos atajos antropológicos cuyo secreto parece tener, durante un mitin el 16 de diciembre, lanzó: “Los Estados del Golfo no tienen otra cosa que dinero. Nosotros no tenemos dinero y tenemos una deuda de 20 billones de dólares...”

Los sinsabores de Riad no necesariamente resuelven los problemas de Irán, el que, a primera vista, tiene mucho que temer de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Efectivamente, a lo largo de su campaña, este último calificó el acuerdo nuclear con Teherán –oficialmente llamado “plan global de acción conjunta”– como el “peor acuerdo de toda la historia”. Y prometió “desmantelarlo”. El general Flynn, al que acaba de nombrar asesor de seguridad nacional, es considerado un adversario inflexible de Irán y segura-

mente lo presionará para que mantenga su promesa (5). No obstante, la prioridad de aplastar lo más rápido posible al EI podría imponerse sobre la voluntad de sancionar a Irán. Por cierto, el acuerdo también tiene como firmantes a Francia, Alemania, el Reino Unido, China y Rusia, que no manifestaron ningún deseo de reconsiderarlo.

Las relaciones entre Washington y Moscú son susceptibles de mejorar desde los primeros días de la administración Trump. En efecto, el nuevo presi-

Trump cree que Europa, como entidad política, no será capaz de contribuir a la defensa de los intereses vitales de Estados Unidos.

dente expresó en varias oportunidades su admiración por Putin y le propuso un encuentro con miras a mejorar las relaciones bilaterales actualmente muy deterioradas. Después de una conversación telefónica entre los dos hombres, el Kremlin dio a conocer que se habían puesto de acuerdo para “normalizar las relaciones y llevar adelante una cooperación constructiva sobre una amplia gama de temas” (6). La elección de Tillerson como secretario de Estado se explica en parte por las buenas relaciones que el CEO de Exxon tejió de larga data con Moscú en ocasión de los acuerdos entre la compañía petrolera y las empresas rusas que operan en el Ártico y en la isla de Sajalín. De todos modos, sería imprudente predecir una luna de miel duradera en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. La preocupación principal del nuevo presidente es promover los intereses de Estados Unidos, lo que, desde su perspectiva, excluye cualquier entendimiento susceptible de ser interpretado como una renuncia a su posición hegemónica.

Provocando a China...

Por cierto, Trump está decidido a reforzar el ejército, aun cuando el presupuesto únicamente de las fuerzas navales equivale al doble de la totalidad de los gastos militares rusos. Semejante intención no es susceptible de atraer a Putin. Y si algunas de las recomendaciones del nuevo presidente de Estados Unidos, como el fortalecimiento de la Marina, parecen dirigidas principalmente contra China, otros proyectos podrían alarmar a Rusia. En particular el de modernizar la flota estadounidense de bombarderos estratégicos y adquirir un “sistema de misiles defensivos de última generación”. Tales iniciativas preocupan en primer lugar a Moscú, dado que Rusia cuenta principalmente con su armamento nuclear para disuadir cualquier acción militar de Occidente en su contra. Por lo demás, en su discurso anual sobre el Estado de la Nación, el 1º de diciembre, Putin no disimuló su preocupación: “Quisiera resaltar que las tentativas de romper la paridad estratégica son extremadamente peligrosas y pueden llevar a una catástrofe planetaria” (7).

A lo largo de toda su campaña, Trump acusó a los chinos de haber recurrido a prácticas comerciales inequitativas en detrimento de Estados Unidos y de haber insultado al presidente Barack Obama al lanzar la construcción de una base militar en el Mar de China del Sur. El 26 de marzo, declaraba a los periodistas de *The New York Times*: “Los chinos se burlan de nosotros. No tienen ningún respeto por nuestro país y ningún respeto por nuestro Presidente”.

El nuevo ocupante de la Casa Blanca prevé, pues, que las relaciones con Pekín se van a tensar. ¿Podría desembocar esto en un conflicto armado? Cuando se le preguntó si utilizaría la fuerza para sacar a los chinos de sus bases en el Mar de China del Sur, respondió: “Tal vez... Pero tenemos un gran poder económico sobre China: el poder del comercio”. Sin entrar en detalles, sugirió que preferiría servirse de derechos de aduana y otros mecanismos comerciales. Su llamado telefónico a la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen –primera conversación conocida entre un presidente estadounidense, o un presidente electo, y un dirigente taiwanés desde la ruptura de relaciones diplomáticas con la isla en 1979– puede ser interpretada en el mismo sentido: una amenaza de escalada a fin de invitar a Pekín a aceptar ciertas exigencias.

Sin embargo, Trump no ignora que, en determinadas cuestiones esenciales, necesitará de la colaboración de los dirigentes chinos. En particular en el caso de Corea del Norte –una de las cuestiones imperiosas de seguridad nacional que tendrá que enfrentar una vez que asuma sus funciones–. Los dirigentes norcoreanos, aunque estén muy aislados internacionalmente, parecen haber logrado incrementar su arsenal nuclear y poner a punto misiles balísticos capaces de llegar hasta Japón o los territorios estadounidenses del Pacífico. Por el momento, los chinos, que parecen temer el derrumbe del régimen de Kim Jong-un (susceptible de precipitar a la vez la afluencia hacia China del Norte de centenares de miles de refugiados y la unificación de Corea bajo la tutela estadounidense), le procuran un apoyo material decisivo. De modo que si Trump espera forzar a Pyongyang a congelar su programa nuclear, necesitará que Pekín siga reduciendo su comercio con Corea del Norte. “China tendría que resolernos ese problema”, lanzó en ocasión de su primer debate con Hillary Clinton. Pero un arreglo como éste implicaría negociaciones con Pekín, y, por lo tanto, concesiones mutuas.

Europa, relegada

La manera en que el presidente electo parece encarar las relaciones con Europa y la OTAN revela claramente la distancia entre sus concepciones y las de sus predecesores. Mientras que estos veían en la Alianza Atlántica la piedra angular de la política de seguridad estadounidense y a Europa como un escudo del orden liberal, él le da la espalda a este enfoque. Para Trump, la OTAN se mostró ineficaz en la guerra más importante de estos tiempos, la que se libra contra el “terrorismo islamista radical”. Y Europa, como entidad política, le parece que no será capaz de contribuir a la defensa de los intereses vitales de Estados Unidos. Así pues, merece menos atención que potencias como Rusia o China, más activas en el gran juego mundial.

Sin embargo, durante una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el 18 de noviembre, Trump habría reafirmado la “importancia constante” de la Alianza; pero desde aquel entonces, no aportó ninguna confirmación. Y ni una sola de sus designaciones para cargos militares de responsabilidad parece señalar una pasión particular por el teatro de operaciones europeo. El interés que le inspira la OTAN al nuevo ocupante de la Casa Blanca parece resumirse en dos preocupaciones: imponer a los miembros de la Alianza una contribución financiera extra para la defensa común y exigir que se dediquen prioritariamente a la guerra contra el EI. Las otras cuestiones, como la defensa del “flanco oriental” europeo contra un eventual ataque ruso, aparentemente le son indiferentes a Trump, que parece pensar que, en el tablero mundial, Europa no constituye más que un foco secundario de tensión. Por lo tanto, sólo se preocupará si se ven amenazados intereses esenciales. Lo que, a fin de cuentas, resume bastante bien la línea de conducta del próximo presidente. “Primero Estados Unidos” y todos los demás países serán valorados en función de un único criterio: ¿representan una ventaja o un obstáculo para la realización de los objetivos estadounidenses fundamentales? ■

1. “Transcript of Donald Trump’s speech on national security in Philadelphia”, *The Hill*, 7-9-16, www.thehill.com

2. *Ibid.*

3. “Trump says he would consider alliance with Russia over Islamic State”, *Reuters*, 25-7-16.

4. “Trump, Turkey’s Erdogan discuss boosting ties, fighting terrorism: Sources”, *Reuters*, 9-11-16.

5. Véase Matthew Rosenberg, Mark Mazzetti y Eric Schmitt, “In Trump’s security pick, Michael Flynn, ‘sharp elbows’ and no dissent”, *The New York Times*, 3-12-16.

6. Neil MacFarquhar, “Putin and Trump talk on phone and agree to improve ties, Kremlin says”, *The New York Times*, 14-11-16.

7. Andrew Higgins, “A subdued Vladimir Putin calls for ‘mutually beneficial’ ties with U.S.”, *The New York Times*, 1-12-16.

*Profesor en el Hampshire College, Amherst (Massachusetts). Autor de *The Race for What’s Left. The Global Scramble for the World’s Last Resources*, Metropolitan Books, Nueva York, 2012. Traducción: Bárbara Poey Sowerby

Archivo

El regreso de la Guerra Fría

por Michael Klare, Nº 207, septiembre de 2016.

Provocaciones atlánticas

por Serge Halimi, Nº 206, agosto de 2016.

Las guerras de los otros

por Benoît Bréville, Nº 203, mayo de 2016.

Hombres de mano dura

por Serge Halimi, Nº 200, febrero de 2016.

Recelos de Arabia Saudita

por Ibrahim Warde, Nº 198, diciembre de 2015.

Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil... Después de años de gobiernos progresistas, el avance de la derecha arremete fuertemente en la región marcando un nuevo mapa político y concediéndole a Estados Unidos una mayor influencia en su tradicional “patio trasero”.

EE.UU.: El mundo según Donald Trump

¿Cambio estratégico hacia el “patio trasero”?

por Alexander Main*



Charles Bell, *Miami Beach*, 1989 (gentileza Christie's)

Cuando le preguntaron sobre su candidato preferido en la presidencial estadounidense, la respuesta del jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa fue una sorpresa: “¡Trump!”. El hombre de negocios estadounidense ¿no había atacado a los migrantes, no había prometido construir un muro en la frontera con México para impedir la llegada “de violadores y traficantes de droga”, no había proclamado la urgencia de terminar con “la opresión” en Venezuela e incluso su intención de dar marcha atrás con la política de apertura de su predecesor en lo referente a Cuba? “El gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una política que evoluciona muy poco y cuyos efec-

tos son casi los mismos desde siempre”, observaba Correa. Entonces, ¿no había que esperar ningún cambio con Donald Trump? Por el contrario: “¡Es tan grosero que va a provocar una reacción en América Latina, lo que podría reforzar la posición de los gobiernos progresistas de la región!” (TeleSur, 29-7-16).

Un mismo horizonte

La brújula estratégica que hereda el nuevo presidente estadounidense cuenta con tres agujas: “prosperidad”, “seguridad” y “democracia y gobernanza”. Las tres apuntan hacia el mismo horizonte.

En la jerga del Departamento de Estado estadounidense, “trabajar en la prosperidad” latinoamericana implica

firmar tantos tratados de libre comercio (TLC) como sea posible. ¿Había negociado un TLC con Panamá y Colombia el presidente Georges W. Bush? Su sucesor volvió a tomar la antorcha desplegando toda su energía para garantizar su aprobación por el Congreso. Y esto a despecho de una fuerte oposición demócrata, en parte motivada por los asesinatos de sindicalistas en Colombia.

La búsqueda de prosperidad se entiende también como un sinónimo de “reformas neoliberales”: austeridad, desregulación, reducción arancelaria, etc. Desde hace más de una década este programa comenzó a ser más difícil de imponer: los países de la región se emanciparon poco a poco de la “ayuda” del FMI,

cuyos programas de ajuste estructural implicaron una baja del crecimiento económico y un aumento de la pobreza en los años ochenta y noventa. La administración de Barack Obama, sin embargo, condicionó su ayuda a los países más pobres a la puesta en marcha de reformas que benefician a los inversores extranjeros. Como con la Alianza para la Prosperidad –una actualización del “Plan Puebla Panamá” promovido por Bush–, lanzado a fines de 2014 con los países del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

En el campo de la seguridad, la estrategia actual de Washington se desprende de los programas militares de contrainsurgencia y de lucha contra la droga de las administraciones precedentes. Durante los mandatos de William Clinton (1993-2000) y de Bush (2001-2008), miles de millones de dólares fueron consagrados al Plan Colombia, una vasta ofensiva militar contra el tráfico de cocaína (1). Resultado: miles de muertos, millones de desplazados y... poco impacto sobre la producción de droga.

Pero no solamente se mantuvo el Plan sino que sirvió de modelo a otras “asociaciones” con México (Iniciativa de Mérida) y con América Central (Central America Regional Security Initiative). Mismas causas, mismos resultados: oleadas de violencia sin precedentes que produjeron innumerables muertos entre los presuntos criminales pero también en la población, sobre todo en el seno de los movimientos sociales.

Presentado como apolítico, el programa “de democracia y gobernanza” cuyas riendas pasará Obama a Trump oficialmente apunta a la “consolidación de las instituciones” y al refuerzo del Estado de Derecho. Los cables diplomáticos del Departamento de Estado revelados por WikiLeaks en 2010 y 2011 pintan un cuadro diferente: los diplomáticos estadounidenses recurren a métodos bien afinados para debilitar, recuperar o eliminar a movimientos políticos molestos –entiéndase “de izquierda” (2)–. Particularmente aquellos considerados como ideológicamente cercanos al difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

Pero no todas las operaciones destinadas a desestabilizar a la izquierda latinoamericana se caracterizan por su discreción. El 28 de junio de 2009, el presidente de Honduras Manuel Zelaya, cercano a Venezuela, era derrocado por el ejército. La secretaria de Estado Hillary Clinton se negaba a calificarlo como un golpe de Estado, lo que habría conducido a suspender la mayoría de las ayudas estadounidenses. Las maniobras de Washington que contribuyeron al éxito del golpe escandalizaron a la región (3), sin que eso impidiera que Estados Unidos apoyara a los gobiernos conservadores que se sucedieron desde entonces en Tegucigalpa.

Un oscuro panorama

Desde 2010, el contexto económico desfavorable debilitó a América Latina, permitiendo que la Casa Blanca registrara importantes avances. Venezuela se hunde en una crisis económica y política que la priva de su capacidad de actuar en la escena internacional. Luego de la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Estados Unidos apeló a cualquier recurso: por un lado el diálogo; por el otro la desestabilización, por el sesgo de ciertos sectores de la oposición (4). Así, la política de apertura frente a Cuba traía aparejada una actitud opuesta con respecto a Venezuela, con un nuevo régimen de sanciones a fines de 2014.

Al mismo tiempo, Argentina y Brasil viraron a la derecha tras doce años de gobiernos progresistas. La administración Obama prestó su ayuda a tales evoluciones: oposición a los préstamos de las instituciones multilaterales concedidos a Buenos Aires (rápidamente levantada tras la llegada al poder del conservador Mauricio Macri en diciembre de 2015) y apoyo diplomático al gobierno interino en Brasil cuando todavía estaba en curso un procedimiento de destitución (controvertido) contra la presidenta Dilma Rousseff (5).

Desde la llegada de Obama a la Casa Blanca, el paisaje político, en consecuencia, cambió mucho. Hace ocho años, la izquierda dirigía la mayoría de los países de la región, y proclamaba su independencia con seguridad. Al entregar las llaves del despacho oval a Trump, Obama podrá presumir de varios “logros” latinoamericanos ante aquellos

que le reprochen sus fracasos en Medio Oriente y en Europa del Este. Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil: los gobiernos de izquierda cayeron uno tras otro, y Estados Unidos recuperó una parte de su influencia pasada en la región.

Nadie sabe cuál será realmente la estrategia del nuevo presidente estadounidense. Desde el comienzo de la campaña se mostró demagogo y caprichoso. No obstante la composición de su gabinete sugiere la probable política de su administración. Dos tendencias se manifiestan: la creciente militarización de la política exterior; la obsesión de la “amenaza” iraní y del “islam radical”. Dos tendencias que podrían tener importantes consecuencias para América Latina.

Aunque criticó el intervencionismo estadounidense durante la campaña y fustigó a los “suboficiales” que “no hacen su trabajo” (CBS, 13-11-16), Trump nombró más ex militares en los más altos

cargos en el área de seguridad que cualquier otro presidente desde la Segunda Guerra Mundial. Los generales retirados James “Mad Dog” (“Perro Loco”) Mattis y Michael Flynn, respectivamente secretario de Defensa y consejero de Seguridad Nacional, habían (se dice) sido ambos descartados por Obama en virtud de sus posiciones extremistas y belicistas hacia Irán y el “islam radical”. Interrogado sobre las amenazas más graves para Estados Unidos, Mattis respondió: “Irán, Irán, Irán” (6), llegando a sugerir incluso que Teherán se ocultaba tras el Estado Islámico (EI). Una hipótesis audaz...

General retirado y ex jefe del teatro de operaciones para el continente americano, John Kelly pilotará el Departamento de Seguridad Nacional. Él había alertado al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado acerca de Irán y de “grupos islámicos radicales” que, aprovechando la “confusión financiera que reina entre las redes criminales y terroristas”, alentarían a células en la región (12-3-15). Esta tesis cuenta con otros partidarios, entre ellos Yleem Poblete, ex jefa de Estado Mayor e Ileana Ros-Lehtinen, la representante de origen cubano que propició la ley “Countering Iran in the Western Hemisphere Act” (“Contener a Irán en el Hemisferio Occidental”) en 2012.

Con Obama en la Casa Blanca, tales ideas quedaban limitadas a los márgenes del debate. En adelante podrían guiar la política estadounidense en la región. La lucha contra los gobiernos de izquierda podría así justificarse por las relaciones que mantendrían con Irán, y los programas llamados de “seguridad” aprovechar medios suplementarios para luchar contra la “infiltración terrorista” del crimen organizado. Por lo tanto, no se puede suponer que la próxima administración se aparte de los objetivos de “seguridad” y de “promoción de la democracia” de sus predecesores. El modelo del Plan Colombia, por el contrario, podría ser extendido a nuevas regiones tales como la zona de la “Triple Frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Porque incluso si –caso poco probable– el nuevo secretario de Estado se opusiera a la militarización creciente de la política regional, tropezaría con una doble resistencia: la de la burocracia del Departamento de Estado, cada vez más militarizada (particularmente la Oficina internacional de estupefacientes y de aplicación de la ley, que tiene una inmejorable financiación), y la del complejo militar-industrial, que se beneficiará con representantes del más alto nivel en la próxima administración.

¿Y qué pasa con Cuba? Cualquier cuestionamiento de la política de apertura suscitaría la oposición de una gran parte del mundo de los negocios, preocupados por aprovechar un nuevo mercado. Pero si hay un punto sobre el cual Trump fue claro es que no quiere complicarles la vida a los empresarios. A la decisión de proseguir el camino señalado por Obama, sin embargo, podría añadirse otro: adoptar una estrategia más agresiva de “promoción de la democracia”; entendiéndose: desestabilizar el poder castrista utilizando métodos de intervención discretos. Pero todavía sería preciso que el estilo “grosero” descrito por el presidente ecuatoriano no refuerce la determinación de las capitales latinoamericanas de proseguir su emancipación más allá de sus divergencias ideológicas.

Varios interrogantes, una certeza

Otros factores podrían desempeñar un papel más determinante todavía en un alejamiento entre Estados Unidos y el

subcontinente. Si Trump mantuviera su promesa de renegociar los tratados comerciales que ligan a su país e imponer derechos de aduana a diversos productos que compiten con la producción latinoamericana, entonces haría más que los presidentes Chávez, Correa o Evo Morales por luchar contra el libre comercio y el dominio de las empresas del Norte sobre la región. Sin embargo, en ese campo debería enfrentar la oposición –fuerte– de la elite económica de su país. Una elite de la que ya nombró a diversos representantes en el seno de su gabinete, inclusive en el Departamento de Estado, y que, por otra parte, no carece de portavoces en el Congreso.

En el medio de todos estos interrogantes, una certeza: la principal amenaza para la hegemonía estadounidense en la región provendrá de China. El incremento de las inversiones y los préstamos de China a los países latinoamericanos contribuyó a erosionar el peso financiero y económico de Washington. Los intercambios comerciales saltaron de alrededor de 13.000 millones de dólares en 2000 a... 262.000 millones de dólares en 2013, propulsándolos al segundo rango de los destinatarios de las exportaciones regionales. Si bien las inversiones chinas suscitan los mismos problemas sociales y ambientales que las que provienen de Estados Unidos, en general no están sujetas a una cláusula de reciprocidad, una diferencia de envergadura. La expansión económica de China en la región, pues, representó un golpe de suerte para los gobiernos progresistas, puesto que les permitió poner en marcha políticas sociales audaces. Entre 2002 y 2014, la pobreza en América Latina bajó del 44 al 28%, tras haber aumentado en el curso de los veintidós años precedentes.

Si la desaceleración del crecimiento chino tuvo un impacto negativo en la región, Pekín parece determinado a ocupar cada vez más espacio en los campos económico y político. La decisión de Trump de denunciar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) ofrece nuevas perspectivas para el comercio y las inversiones chinas, como enfatizó el presidente Xi Jinping a fines de noviembre durante un viaje a Chile, Ecuador y Perú. Frente a una administración estadounidense imprevisible y potencialmente hostil, que declaró su intención de resistir la influencia china en el Este Asiático, el llamado de Xi a una “nueva era de relaciones con América Latina” (7) denota su ambición estratégica de desarrollar sus relaciones comerciales y diplomáticas en el “patio trasero” estadounidense. ■

1. Véase Hernando Calvo Ospina, “En las fronteras del Plan Colombia”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2005.

2. *The WikiLeaks Files: The World According to US Empire*, Verso, Londres, 2016.

3. “A new chapter of engagement’: Obama and the Honduran coup”, NACLA Reports on the Americas, Nueva York, enero de 2010.

4. Véase “Au Venezuela, la tentation du coup de force”, *Le Monde diplomatique*, París, abril de 2014.

5. Véase Laurent Delcourt, “Coup d’État parlementaire au Brésil”, *Le Monde diplomatique*, París, mayo de 2016.

6. Mark Perry, “James Mattis’ 33-year grudge against Iran”, *Politico Magazine*, Nueva York, 4-12-16.

7. Matt Ferchen, “What’s new about Xi’s ‘new era’ of China-Latin America Relations?”, 26-11-16, www.thediplomat.com

*Analista político en el Center for Economy and Policy Research (CEPR), Washington, DC. Traducción: Víctor Goldstein

LAS MENTIRAS DE LOS MEDIOS

Temerarios distribuidores de patrañas

por Pierre Rimbert*

Desde la derrota de Hillary Clinton en la elección presidencial estadounidense, los principales editorialistas de Nueva York, Londres o París descubren una sobrecogedora verdad: los medios mienten. No ellos, por supuesto: los otros. Diarios en línea cercanos a la ultraderecha estadounidense, oscuros blogs creados en Macedonia, *trolls* que publican falsas noticias a granel: el Departamento de Justicia habría ordenado “borrar de inmediato todos los tatuajes que representan a la bandera confederada”, el Papa apoyaría a Donald Trump, Hillary Clinton dirigiría una red de pedofilia desde la trastienda de una pizzería de Washington... Estos cuentos chinos divulgados por Facebook, Twitter y Google habrían burlado la capacidad de discernimiento de las mentes simples que no leen *The New York Times*.

La prensa virtuosa no precisaba nada más para entrar en resistencia. “Es una amenaza a la pertinencia y utilidad mismas de nuestra profesión –estima la reportera estrella de CNN Christiane Amanpour, el 22 de noviembre de 2016–. El periodismo y la democracia corren peligro de muerte.” La opinión es compartida por *The New York Times*, cuyo largo editorial titulado “Verdad y mentiras en la era Trump” (10 de diciembre de 2016) incrimina a las redes sociales y deplora la indiferencia popular por las informaciones confiables –fue una pena que la versión digital de ese texto estuviese infelizmente ilustrada por una publicidad para un sitio de “fake news” que anunciaba la muerte del actor Alec Baldwin–. Según *The Washington Post* (1), la epidemia de noticias falsas procede más bien de una “campaña propagandística sofisticada” comandada por Rusia, pero su investigación se basa en fuentes tan poco confiables que, a su vez, es denunciada como un “caso químicamente

puro de ‘fake news’” por el periodista Glenn Greenwald (*The Intercept*, 26 de noviembre de 2016).

Se sobreentiende que antes de la entrada en campaña de Trump, la democracia y la verdad triunfaban. Por cierto, los medios vivían gracias a la publicidad que promete el bienestar a los bebedores de Coca-Cola y difundían las “actualidades” fabricadas por agencias de comunicación. Pero las “noticias falsas” se llamaban “información”, puesto que eran publicadas de buena fe por periodistas profesionales. Los que engañaron a toda la Tierra en diciembre de 1989 con las falsas matanzas de Timisoara, en Rumania; los que difundieron sin verificar, en octubre de 1990, la fábula de los soldados iraquíes destruyendo incubadoras en la maternidad de Kuwait City, para preparar a la opinión pública para una intervención militar; los que revelaron en la portada de *Le Monde* (8 y 9 de abril de 1999) la Operación Herradura, pergeñada por los serbios para “deportar” a los kosovares –una elucubración de los servicios secretos alemanes, destinada a legitimar los bombardeos sobre Belgrado–. Sin olvidar a las eminencias de *The New York Times*, *The Washington Post* o *The Wall Street Journal*, que difundieron en 2003 las pruebas imaginarias de la presencia de armas de destrucción masiva en Irak para abrir el camino a la guerra.

Actualmente, su monopolio de la influencia se hace polvo y ellos fulminan: los pesos pesados de la desinformación se indignan de que los temerarios distribuidores de patrañas engañen a los lectores sin permiso. ■

1. Craig Timber, “Russian propaganda effort helped spread ‘fake news’ during election, experts say”, *The Washington Post*, 24-11-16.

*De la redacción de *Le Monde diplomatique*, París. Traducción: Patricia Minarieta



Yazidíes escapando de Sinjar hacia la frontera con Siria tras el ataque del EI, 11-8-14 (Rodi Said/Reuters)

En agosto de 2014 el pueblo yazidí, que habita las regiones kurdas de Irak, fue víctima de un feroz ataque por parte del Estado Islámico. Sin la ayuda del ejército iraquí ni de los peshmergas, sufrieron una masacre. Perseguidos con frecuencia desde el siglo XIX, los yazidíes vuelven a ser víctimas de una violencia extrema que busca exterminarlos.

Atrapados en la guerra contra el Estado Islámico

Los yazidíes, eternos perseguidos

por Vicken Cheterian*, enviado especial

Sinjar, en el noroeste de Irak, todavía es una ciudad cuasi desierta. Mientras que 80.000 habitantes huyeron ante la llegada del Estado Islámico (EI), en agosto de 2014, apenas unas cincuenta familias retornaron tras la reconquista de la ciudad por parte de las fuerzas kurdas, el 13 de noviembre de 2015. Un pequeño grupo de combatientes camina lentamente bajo el sol de la media mañana. Cuando el viento hace golpetear lo que queda de las persianas metálicas de los negocios, hechos trizas por los bombardeos, se eleva un clamor, como si fantasmas atormentados asediaran la ciudad. Hombres armados entran y salen de una escuela transformada en cuartel general o se sientan esperando órdenes. “En el pasado fuimos víctimas de masacres, pero esta nueva matanza ¡ocurrió en la era de la tecnología avanzada! Lloramos a miles de víctimas; miles de nuestras hermanas todavía están en manos del EI”, recalca Kasim Shahso, el comandante de los peshmergas de Sinjar, cercanos al Partido Democrático del Kurdistan (PDK) y de origen yazidí.

Abu Majed, cocinero, organizaba fiestas de casamiento. Le cuesta retener las lágrimas cuando nos muestra fotografías de su familia. Aquel fatal 3 de agosto de 2014, yihadistas del EI raptaron a su mujer, sus tres hijas y uno de sus hijos. Sólo su hija de 23 años, que había si-

do mantenida en cautiverio en Raqqa, la “capital” del EI en Siria, logró dar noticias hace algunos meses. Abu Majed se encuentra solo con uno de sus hijos. Todas las familias tienen historias como la suya para contar.

Si se reescribiera la historia de Medio Oriente desde el punto de vista de los yazidíes, el resultado sería un libro muy diferente de aquellos de los que disponemos. Ese pueblo kurdo hablante (kurmanji) posee una cultura única, construida alrededor de una religión monoteísta transmitida oralmente, que hunde sus raíces en el zoroastrismo, al que se agregan influencias cristianas e islámicas. Los yazidíes pueblan esencialmente las regiones kurdas de Irak, dado que su principal lugar de culto se ubica en Lalesh, al norte de Mosul. También se los puede encontrar en Transcaucasia y en las diásporas occidentales. En Irak, se inscriben en un rico paisaje religioso de ritos antiguos con los shabaks, los adeptos al mandeísmo, las iglesias cristianas caldea, asiria de Oriente o siria. Su comunidad está dividida en clases, dirigidas por los jeques (jefes) o autoridades religiosas. El matrimonio fuera de la comunidad les está estrictamente prohibido.

Masacre 73

Durante el verano de 2014, el EI llevó a cabo una ofensiva relámpago. En junio, algunos centenares de yihadistas causa-

ron sorpresa al apoderarse de Mosul, segunda ciudad de Irak. Las fuerzas militares iraquíes, estimadas en 30.000 hombres, abandonaron rápidamente la ciudad, en el contexto de una lucha de poder entre tribus sunnitas privadas de sus derechos y personalidades urbanas descontentas por su pérdida de influencia después de la invasión estadounidense. También era una consecuencia de la política sectaria del primer ministro chiita de aquel entonces, Nuri al-Maliki. Para sorpresa general, después de haberse dirigido hacia Bagdad, las tropas del EI dieron media vuelta para arremeter contra regiones bajo el control de los kurdos. El ataque comenzó en las primeras horas del 3 de agosto de 2014 en la región de Sinjar, habitada por los yazidíes. La autoridad peshmerga, presa del pánico, ordenó a sus combatientes que se retiraran, dejando a la población a merced de los yihadistas. La resistencia, equipada con armas livianas, se desplomó en pocas horas. La población intentó huir hacia las montañas, pero numerosos habitantes, sobre todo aquellos que no tenían vehículo, no pudieron escapar.

Los hombres fueron separados de las mujeres y en muchos casos fueron abatidos en el lugar. Los civiles huyeron hasta Sardasht, la altiplanicie en la cima del mon-

te Sinjar, donde los persiguieron los yihadistas, al tiempo que continuaban con las masacres y las tomas de rehenes, hasta que combatientes yazidíes se apoderaron de una metralleta abandonada por los peshmergas y lograron repelerlos. Los hombres que no aceptaban convertirse al Islam fueron asesinados. Las mujeres y las niñas, entre ellas chiquillas que no tenían más de 9 años, fueron reunidas en centros, enviadas a Tal Afar, no lejos de allí, y vendidas como esclavas sexuales a los yihadistas de todo el “califato”. No se conoce con precisión la cantidad de asesinados y de cautivos, pero las organizaciones yazidíes hablan de 2.240 muertos, 1.020 desaparecidos –de los que se teme que hayan sido ejecutados– y más de 5.800 prisioneros, esencialmente mujeres y niños. Más de 280 personas, en su mayoría niños, murieron de sed y agotamiento en el transcurso de los primeros días.

Ningún otro grupo humano fue tan maltratado por el EI como los yazidíes. El objetivo de la organización parece haber sido no solamente intimidar y someter, sino también destruir una cultura y un modo de vida muy particulares en la región. La violencia sufrida por los yazidíes no empezó ayer. Para ellos, los acontecimientos de 2014 representan la masacre número 73 y para designarla emplean el término otomano de *farman*, que significa “decreto sultánico”. Se refiere a las masacres perpetradas a fines del siglo XIX por el sultán Abdul Hamid II con el objetivo de colocar a las regiones yazidíes remotas bajo el control del Estado, imponer a sus habitantes el servicio militar y los impuestos y convertirlos a un Islam sunnita. Los yazidíes no gozaron de la protección concedida a los cristianos y los judíos, adeptos a religiones monoteístas cuyo mensaje original el Islam pretende restablecer.

Considerados como paganos, incluso como “adoradores del diablo”, los yazidíes han sido perseguidos con frecuencia. El régimen baasista iraquí los trató de forma discriminatoria. En 1975, en el marco de un amplio proyecto de modernización y para garantizar al Estado el mejor control de una región montañosa y apartada, las autoridades baasistas los forzaron a abandonar sus pueblos tradicionales del monte Sinjar para instalarlos en “colectividades” al norte y al sur de la montaña. El agua necesaria para la irrigación no llegó nunca a la mayoría de esos lugares, lo que obligó a sus habitantes empobrecidos a depender de sus vecinos árabes más ricos trabajando sus tierras.

La semilla del caos

La invasión estadounidense a Irak en 2003 desestabilizó la jerarquía sociorreligiosa del país. Numerosos árabes sunnitas de Al-Baaj, así como los turcomanos de Tal Afar, de donde eran originarios muchos oficiales de Saddam Hussein, quedaron descontentos al ver que el poder se les escapaba. La resistencia armada antiestadounidense reclutó mayoritariamente en la antigua base del partido Baas, la que en ese entonces era influida por una nueva fuerza: la internacional salafista yihadista. Al mismo tiempo, los yazidíes y otras minorías del norte de Irak, multiétnico, podían trabajar en bases estadounidenses o enrolarse en el nuevo ejército armado iraquí.

Aquellos que se unieron a la lucha contra los estadounidenses pertenecían a una nueva generación, mucho más radical que los afganos responsables de Al Qaeda (1). La organización Jamaat al-Tawhid wal-Yihad, fundada por el militante jordano Abu Musab Al-Zarqawi, integró la ideología salafista yihadista para adaptarse al nuevo conflicto sectario. Esta ideología pronto iba a sembrar el caos. Según su lectura de la *sharia*, los yazidíes tenían la opción entre convertirse al Islam o perecer. En abril de 2007, algu-

nos militantes detuvieron un ómnibus que transportaba a trabajadores que venían de una fábrica textil de Mosul. Les ordenaron a los cristianos y a los musulmanes que descendieran, tomaron a los 23 trabajadores yazidíes y los asesinaron. Pero lo peor iba a ocurrir el 14 de agosto de 2007, cuando cuatro camiones bomba lanzaron ataques suicidas masivos en dos localidades yazidíes, Qahtaniyah y Siba Sheikh Khidir, dejando un saldo de 500 muertos y 1.500 heridos.

El ejército estadounidense no disponía de los hombres suficientes para poder controlar esta zona fronteriza. Una gran parte del noroeste de Irak, una región estratégica en la frontera siria, se convirtió en una autopista para los voluntarios islamistas. En un campamento en el desierto cerca de Sinjar, los soldados estadounidenses encontraron los rastros de cerca de 700 voluntarios venidos de diferentes países, principalmente de Arabia Saudita y de Libia, para defender la causa yihadista en Irak (2).

A cada cual su enemigo

Todavía no se sabe oficialmente por qué el ejército iraquí se derrumbó frente a la ofensiva del EI. A lo que se agrega otro misterio: ¿por qué éste no continuó su ataque contra Bagdad, la capital y el centro del poder en Irak, en lugar de lanzar una ofensiva contra las regiones yazidíes de Sinjar, bajo el control de los peshmergas kurdos? Este ataque no tenía sentido en la lucha de influencias entre el poder chiíta de Bagdad y los revanchistas sunnitas.

El ataque contra Sinjar pone en evidencia las contradicciones de la organización islamista. Varios yazidíes desplazados nos confirmaron que el ataque inicial había sido llevado a cabo esencialmente por tribus

árabes vecinas de Jiheysh, Abu Mtemet y Khatuni. Su voto de lealtad (*bay'a*) al nuevo califato coincidió con la ofensiva contra Sinjar. En otras palabras, las tribus árabes locales, con la excepción de los shammar de la región de Rabia, se unieron al EI para atacar a los yazidíes sin razón aparente (3). Una de las explicaciones se relacionaría con la gran

Aquel fatal 3 de agosto de 2014, yihadistas del EI raptaron a su mujer, sus tres hijas y uno de sus hijos.

diversidad de las tropas del EI: vieja guardia baasista que sueña con volver al poder en Bagdad, combatientes de una guerra sectaria contra el régimen sirio, yihadistas internacionales que quieren socavar la sociedad occidental, chechenos, turcos, etc. Cada grupo aporta su fuerza, pero también un nuevo enemigo. A fin de cuentas, el EI pelea contra el resto del mundo –un combate para el que claramente le faltan recursos–. Al atacar Sinjar, dicha organización ganó reclutas entre las tribus árabes. Pero abrió un nuevo frente en los “territorios disputados” de Nínive y Kirkuk entre kurdos, poder central chiíta y notables sunnitas de Mosul.

Desde 2003, la zona de Sinjar, aunque forma parte de la región de Nínive, estaba bajo el control de los peshmergas. Cuando el EI atacó, los kurdos –entre 3.000 y 7.000

hombres, que tenían la superioridad numérica– se retiraron sin combatir y sin evacuar a la población civil. “Los yazidíes siguen esperando una explicación de los dirigentes de la región autónoma del Kurdistán”, nos declara Jamil Shawmar, director de la organización humanitaria Yazda, con base en Dohuk. Las autoridades kurdas parecían sorprendidas por el ataque del EI. Y al dejar a las regiones yazidíes sin defensa, alimentaron las cuestiones identitarias: ¿los yazidíes forman parte o no de la nación kurda? Sin embargo, una semana después de la ofensiva del EI, combatientes kurdos llegados de Siria lograron abrir un corredor y salvar a decenas de miles de yazidíes atrapados en la cima del monte Sinjar.

Después del contraataque de las fuerzas kurdas apoyadas por la aviación estadounidense, en noviembre y diciembre de 2015, sólo 50.000 civiles, de 300.000, regresaron a la región. La mayoría de las ciudades y pueblos están en ruinas, quedaron destruidos durante los combates o por los yihadistas durante su retirada. Algunos esperan una clarificación política antes de volver. Ya que Sinjar quedó, de ahí en más, dividida entre el este, bajo la influencia del Partido Democrático del Kurdistán (PDK, en el poder en la región autónoma iraquí), y el oeste, bajo la del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, originario de Turquía) y sus aliados sirios. Estas dos fuerzas pertenecen a acuerdos regionales antagonistas: mientras que el PDK de Masud Barzani está aliado con Turquía, el PKK está en guerra contra Ankara. El PKK incluso creó una milicia local compuesta de yazidíes pagados por Bagdad, pero bajo su control.

A las masacres otomanas contra los yazidíes en 1892 les siguió una fuerte reacción

y, luego, un renacimiento de esta identidad y esta cultura en la región del monte Sinjar (4). Sus descendientes ¿podrán sobrevivir a este aniquilamiento en curso? Nada es menos seguro. Actualmente la mayoría de ellos viven en campamentos de refugiados rudimentarios y superpoblados. Muchos otros tomaron el camino hacia Europa. A pesar del avance de las milicias chiitas para cortar el abastecimiento entre Mosul y Siria, pueblos yazidíes al sur de Sinjar todavía están bajo el control del EI, el que, desde esas bases, lanza ataques regulares contra las posiciones kurdas y yazidíes. Cerca de 2.000 mujeres fueron liberadas; 3.200 todavía están cautivas, la mayoría en Raqqa, en Siria. Los yazidíes están dolidos y se sienten traicionados: fueron masacrados por sus antiguos vecinos árabes, traicionados por sus hermanos étnicos, los kurdos, y olvidados por la “comunidad internacional”. Antes de regresar a sus hogares y construirse una nueva vida, necesitan poder esperar que ese *farman* número 73 sea el último. ■

1. Véase Vicken Cheterian, “Et l’Irak accouche d’une nouvelle génération de djihadistes”, *Le Monde diplomatique*, París, diciembre de 2008.

2. Brian Fishman y Joseph Felner, *Al-Qaeda’s Foreign Fighters in Iraq. A First Look at the Sinjar Records*, Combating Terrorism Centre, West Point, 2-1-07.

3. No todas las tribus árabes se unieron al EI. La poderosa tribu de los shammar, que habita en particular la región de Rabia, es un importante enemigo del EI.

4. Nelida Fuccaro, *The Other Kurds. Yazidis in Colonial Iraq*, I. B. Tauris, Londres, 1999.

*Profesor de historia y de relaciones internacionales en la Universidad de Ginebra y en la Webster University de Ginebra. Autor de *Open Wounds: Armenians, Turks, and a Century of Genocide*, Hurst & Company, Londres, 2015. Traducción: Bárbara Poey Sowerby

¡NUEVA! SERIE  LA MEDIA DISTANCIA

¿Qué quiere la clase media?

La clase media está en el centro de las pasiones argentinas. ¿Es el límite para una mayor igualdad o el producto de una incesante lucha por la justicia social?

HERNÁN VANOLI / PABLO SEMÁN / JAVIER TRÍMBOLI

EN VENTA
EN KIOSCOS
Y LIBRERÍAS



LE MONDE
diplomatique

www.eldiplo.org

 Capital intelectual

Rivales ancestrales, turcos e iraníes han vivido un acercamiento inédito desde la llegada al poder de Erdogan en 2003, basado en el intercambio comercial y energético. Sin embargo, desde las “primaveras árabes” y el inicio de la guerra en Siria, distintos focos de tensión oponen de manera recurrente a Ankara y Teherán.

Diferencias en torno al conflicto sirio

Irán y Turquía, ¿aliados o rivales?

por Mohammad-Reza Djalili y Thierry Kellner*



Frontera con Irán, Hakkari, Turquía, 25-6-12 (Bulent Kilic/AFP)

A lo largo de su historia, Irán y Turquía dieron muestras de pragmatismo en sus relaciones bilaterales, a pesar de su rivalidad e intereses a veces divergentes (ver recuadro). Sin embargo, las revueltas de la “primavera árabe” revelaron –y a veces crearon– profundos antagonismos. Desde el inicio de la crisis en Siria, surgieron los desacuerdos (1). Tras haber invitado (en vano) al gobierno de Bashar al-Assad a llevar a cabo reformas, Turquía –aunque cercana a ese país en el marco de su política de “cero problemas con los vecinos”– ofreció su apoyo a la oposición. Fue una versión muy diferente la que hizo oír Irán, cuya estrategia en

el Levante se basa en Damasco. Teherán apoyó al régimen y movilizó a sus aliados libaneses, entre ellos Hezbollah, así como a otros relevos: milicias chiitas iraquíes y voluntarios chiitas provenientes de diversos países; estos últimos se destacaron particularmente en los combates por la toma de Alepo Este. Mientras que Irán se convertía en el aliado más importante del régimen sirio –al menos, hasta la intervención rusa de septiembre de 2015 (2)–, Turquía autorizaba a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a instalar en su territorio un escudo antimisiles, después de las violaciones de su espacio aéreo por parte de la aviación rusa, pero también para prote-

gerse mejor contra los disparos provenientes de Siria. La República Islámica se oponía a estas decisiones: desde su punto de vista, estas instalaciones estaban en parte dirigidas contra ella.

Para el régimen iraní, Turquía abandonó su política de independencia respecto de Estados Unidos, iniciada en 2003, cuando se había negado a facilitar la intervención militar estadounidense en Irak. En julio de 2015, autorizó el despegue de los aviones del ejército estadounidense desde su base de Incirlik para su campaña de bombardeos contra las tropas de la organización del Estado Islámico (EI). La decisión, aunque contribuyó a contener el avance del EI, generó la ira de Teherán, que vio en ella

sobre todo un nuevo medio de acercamiento entre Ankara y Washington. A Irán también le preocupa la convergencia que se perfiló a comienzos de 2015 entre Turquía, Arabia Saudita y Qatar sobre Siria. En efecto, estos tres países se pusieron de acuerdo para coordinar mejor sus acciones e incrementar su ayuda a la oposición (3). Los resultados no se hicieron esperar: a partir de fines de marzo de 2015, las fuerzas rebeldes avanzaron en diversas regiones del país. Teherán presionó entonces a Moscú para que interviniera (4).

A pesar de la celebración de un acuerdo sobre la cuestión nuclear iraní en julio de 2015, Ankara y Teherán se lanzaron a una guerra verbal a propósito de Siria, acusándose mutuamente de apoyar “movimientos terroristas”. Al presidente Recep Tayyip Erdogan no le gustaron demasiado las acusaciones de los medios de comunicación iraníes sobre la compra por parte de Turquía de petróleo proveniente de los pozos sirios controlados por el EI. Más espectacular aun, en un contexto de intensificación de las relaciones con ciertas monarquías petroleras, Ankara inauguró en mayo de 2016 –y por primera vez desde el fin del Imperio Otomano– una base militar en el territorio de su aliado más cercano en la región, Qatar. Esta iniciativa bilateral reproduce la alianza sunnita oficialmente lanzada por Riad en marzo de 2016, alianza de la cual Ankara y Doha forman parte. Esta serie de acontecimientos, por no hablar de la penetración turca en el Golfo Pérsico, que Teherán considera como su zona de influencia natural, preocupa al régimen iraní.

Necesario pragmatismo

Aunque enfrentados en el conjunto de las cuestiones regionales, Turquía e Irán siguen ligados por sus intercambios económicos y energéticos. Turquía le compra a Irán petróleo y gas, mientras que Irán continúa con sus importaciones de bienes de consumo turcos. Señal de que el disenso político sin embargo pesa: el volumen de los intercambios comerciales cayó de 21.890 millones de dólares en 2012 a 13.700 millones de dólares en 2014 y a sólo 9.700 millones de dólares en 2015. Aun cuando la caída del precio de los hidrocarburos explica en parte esta evolución, muy lejos se está del objetivo de 35.000 millones que ambas partes se habían fijado. Tras el derribo de un avión ruso por cazas turcos el 27 de noviembre de 2015, Irán ofreció sus buenos oficios en la crisis desatada entre Ankara y Moscú, sin duda para mejorar sus relaciones con Turquía. Prueba de que cierto pragmatismo prevalece: ambos países firmaron en la primavera de 2016 un acuerdo sobre turismo y discuten una cooperación estratégica en materia de petróleo y gas.

El intento de golpe de Estado en Turquía, la noche del 15 al 16 de julio de 2016, brindó a Teherán una ocasión inesperada para acercarse a su vecino. Mientras el golpe se estaba produciendo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní envió un mensaje de apoyo al gobierno turco por Twitter. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional, reunido bajo la presidencia de Hassan Rohani, expresó luego su apoyo oficial al “gobierno legítimo de Turquía”. Esta rápida reacción contrastó con la reacción, más bien lenta, de los países de la OTAN, aliados sin embargo del gobierno de Erdogan. Inmediatamente después del fracaso del golpe, el presidente

Rohani propuso discusiones sobre los problemas regionales. Teherán aprovechó pues claramente el acontecimiento para invitar al poder turco a revisar sus posiciones sobre Siria. En menos de un mes, se produjo un acercamiento. El consenso giraba en torno de los tres objetivos principales ya discutidos, aunque sin éxito, durante encuentros secretos que se iniciaron tres meses después de la elección de Rohani: el mantenimiento de la integridad territorial

del país, la lucha contra todos los movimientos extremistas y terroristas, y finalmente el establecimiento de un gobierno de unidad nacional mediante la organización de elecciones bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (5).

Divergencias religiosas

Más allá del acuerdo formal sobre estos puntos, las diferencias persistieron, especialmente sobre el papel de Bashar

al-Assad, lo que debilitó el acercamiento. Estados Unidos y Turquía trabajaron para mejorar sus relaciones, congeladas tras el fallido golpe de Estado de julio: Barack Obama y Erdogan se encontraron a principios de septiembre; y, sobre todo, Turquía lanzó el 24 de agosto de 2016 en el norte de Siria la operación “Escudo del Éufrates”, con el acuerdo de Washington, pero sin comunicárselo a Teherán. Sorprendido, este último calificó la operación de “violación de la soberanía siria”, acusando a Ankara de complicar la situación regional. Lo que no impidió que Turquía extendiera sus operaciones para establecer *de facto* una “zona segura” en el territorio de Siria destinada a la oposición. Un santuario cuya ejecución adquiere importancia con la anunciada caída de los bastiones rebeldes de Aleppo Este, y que no es del agrado del régimen iraní.

Si bien Teherán y Ankara dan muestras oficialmente de un apaciguamiento de sus relaciones, tal como lo sugiere el encuentro entre Rohani y Erdogan en septiembre pasado paralelamente a la reunión de la Asamblea General de la ONU, sus posiciones sobre la política regional siguen pues divergiendo. Frente a la política exterior iraní, siempre alineada con la causa chiita, Erdogan se erige poco a poco en protector de los sunnitas. En Irak, en el contexto de las operaciones militares para la reconquista de la ciudad de Mosul, el presidente turco condenó la presencia de las milicias chiitas apoyadas por Teherán, considerando que amenazaban

a los sunnitas. Concentró tropas en la frontera iraquí, dando a entender que no permanecerían inactivas si los sunnitas pagaban los platos rotos por las operaciones contra el EI en Mosul y Tal Afar (donde vive una importante minoría turkmena). Según algunos observadores, esta advertencia contra los relevos de Teherán en Irak –e, indirectamente, la política iraní en este país– podría constituir una base para un acercamiento entre el poder turco y la nueva administración Trump. Una situación que, si se confirma, correría el riesgo de no ser demasiado apreciada en Teherán, teniendo en cuenta el discurso del presidente estadounidense electo y sus asesores cercanos respecto de Irán. ■

1. Véase Mohammad-Reza Djalili y Thierry Kellner, “L'Iran et la Turquie face au ‘printemps arabe’. Vers une nouvelle rivalité stratégique au Moyen-Orient?”, Grupo de Investigación e Información sobre la Paz y la Seguridad (GRIP), Bruselas, 2012.
2. Mohammad-Reza Djalili y Thierry Kellner, “Iran's Syria policy in the wake of the ‘Arab Springs’”, *Turkish Review*, vol. 4, N° 4, Estambul, 2014.
3. “Turkey, Saudi Arabia agree to boost support to Syria opposition”, Anadolu Agency, 2-3-15.
4. Laila Bassam y Tom Perry, “How Iranian general plotted out Syrian assault in Moscow”, Reuters, 6-10-15.
5. Julian Borger, “Iran and Turkey's secret talks on Syria revealed”, *The Guardian*, Londres, 13-12-16.

*Profesor emérito del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), respectivamente. Coautores de *L'Iran en 100 questions*, Tallandier, París, 2016. Traducción: Gustavo Recalde

UNA COEXISTENCIA SINGULAR

Condenados a ponerse de acuerdo

Similitudes históricas, afinidades culturales: Irán y Turquía muestran una singular cercanía. Contrariamente a muchos de sus vecinos de Medio Oriente, la construcción de estos dos Estados no árabes tiene varios siglos de antigüedad. Surgidos de dos grandes imperios, el Safávida y el Otomano, cuya rivalidad data del siglo XVI, se enfrentaron con frecuencia; también lograron, a veces, encontrar puntos de acuerdo.

Su desarrollo político a lo largo del siglo XX presenta múltiples semejanzas. Tanto la Revolución Constitucional de 1906 en Persia como la de los Jóvenes Turcos en 1908 transformaron la escena política nacional. Tras la Gran Guerra, ambas capitales lanzaron de común acuerdo programas de transformación dirigidos por el Estado. Desde su fundación por Mustafá Kemal Atatürk, en 1923, la República de Turquía implementó una política de modernización autoritaria que Reza Shah tomó de modelo para el establecimiento de la dinastía Pahlevi, a fines de 1925. Tras la Segunda Guerra Mundial, y hasta la Revolución Islámica de 1979, Ankara y Teherán temieron la “amenaza soviética”: cercanos a los occidentales, y en particular a Estados Unidos, ambos países cooperaron en materia militar en el seno del Pacto de Bagdad (1955-1958), reemplazado tras la caída de la monarquía iraquí, en 1958, por la Organización del Tratado Central (CENTO, 1958-1979).

A partir de 1979, dos sistemas políticos de naturaleza muy diferente, uno laico, el otro teocrático, debieron coexistir. El nuevo régimen iraní condenó la laicidad, rechazó el kemalismo y la occidentalización de la sociedad turca. Reprobó los lazos de Ankara con Estados Unidos, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y, más tarde, con Israel. En política internacional, optó por el Movimiento de los No Alineados e inauguró una “diplomacia islámica” que rechazó prácticamente todas las formas de regímenes existentes en Medio Oriente y en general en el mundo musulmán. Pero, durante la guerra Irán-Irak (1980-1988), Teherán no tuvo otra alternativa que impulsar una política más conciliadora res-

pecto de su vecino: las relaciones comerciales bilaterales irano-turcas se reanudaron progresivamente. Tras el fin de la guerra, a pesar de la brecha ideológica que los separaba y la aparición periódica de disensos, ambos países continuaron desarrollando sus intercambios comerciales, evitando cualquier agravamiento de las tensiones.

En 2002, la llegada al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en la época islamista moderada) en Turquía favoreció una mayor cooperación. La década de 2000 se caracterizó por un acercamiento inédito desde la caída del Shah. Los lazos políticos se fortalecieron, las visitas oficiales se multiplicaron, la colaboración en el campo energético se consolidó y los intercambios económicos vivieron un auge sin precedentes. El volumen de comercio pasó de 1.000 millones de dólares en 2000 a 16.050 millones en 2011 (1). En 2012, Irán era el primer proveedor de petróleo y el segundo proveedor de gas de Turquía, inmediatamente después de Rusia (2). Al afectar las sanciones estadounidenses las relaciones comerciales y financieras entre Irán y Dubai, Turquía cumplió el papel de base de repliegue para las compañías iraníes. Su número se multiplicó en el país. Según el ministro de Economía turco, en 2014 se registraban 3.604.

En el terreno diplomático, Ankara, en cooperación con Brasil, se involucró –sin éxito– en una mediación sobre la cuestión nuclear iraní. Esta iniciativa alivió sin embargo a Teherán frente a las presiones occidentales. Votando contra la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que imponía nuevas sanciones contra Irán, en junio de 2010, Turquía de hecho le confirmó su apoyo. ■

1. “Direction of Trade Statistics Yearbook, 2015”, Fondo Monetario Internacional (FMI), Washington, DC, octubre de 2015.
2. “Oil and Gas Security. Emergency response of IEA Countries”, Agencia Internacional de la Energía, París, 2013.

M-R. D. y T. K.

Traducción: Gustavo Recalde



STAFF PREVISIONAL
CORPORATE

PLANIFIQUE EL FUTURO DE SUS EMPLEADOS

GRACIAS A NUESTRA EXPERIENCIA, OBTENDRÁ EL MÁXIMO BENEFICIO JUBILATORIO



- GESTIONES Y TRATO PERSONALIZADO
- AHORROS DE COSTOS LABORALES
- TALLERES DE CONTENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA DISFRUTAR DEL RETIRO JUBILATORIO

STAFF PREVISIONAL

ASESORAMOS A PERSONAS Y EMPRESAS DESDE HACE 58 AÑOS. TODAS LAS INDUSTRIAS Y SECTORES.

Especialistas en convenios internacionales jubilatorios



LLÁMENOS PARA UN
ASESORAMIENTO SIN CARGO

0800 222 3727

www.staffprevisional.com.ar
info@staffprevisional.com.ar

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el tablero internacional se reordena, en particular los vínculos de Estados Unidos con Medio Oriente. Los funcionarios que acompañarán al presidente republicano se caracterizan por definir a Irán como la principal amenaza a la estabilidad de la región.

Estados Unidos y la guerra contra el terrorismo

Medio Oriente en la mira

por Ignacio Ramonet*

Unos días después del acuerdo entre Rusia y Turquía que permitió acabar con la interminable batalla de Aleppo, leí en un célebre semanario francés el comentario siguiente: “La permanente crisis de Medio Oriente está lejos de resolverse. Unos piensan que la solución pasa obligatoriamente por Rusia, mientras otros creen que todo depende de Turquía. Aunque lo que queda claro ahora es que, de nuevo y definitivamente –por lo menos cabe desearlo–, Rusia tiene en sus manos los argumentos decisivos para poner punto final a esa crisis.” ¿Qué tiene de particular este comentario? Pues que se publicó en la revista parisina *L'Illustration*... el 10 de septiembre de 1853.

O sea, hace ciento sesenta y tres años la crisis de Medio Oriente ya era calificada de “permanente”. Y es probable que lo siga siendo... Aunque un parámetro importante cambia a partir de este 20 de enero: llega un nuevo Presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca: Donald Trump. ¿Puede esto modificar las cosas en esta turbulenta región? Sin ninguna duda porque, desde fines de los años 50, Estados Unidos es la potencia extranjera que mayor influencia ejerce en este área y porque, desde entonces, todos los presidentes estadounidenses, sin excepción, han intervenido en ella. Recordemos que el caos actual en esta zona es, en gran parte, la consecuencia de las intervenciones militares estadounidenses decididas, a partir de 1990, por los presidentes George H. Bush, Bill Clinton y George W. Bush, y por el (más reciente) azorado apoyo a las “primaveras árabes” estimuladas por Barack Obama (y su secretaria de Estado Hillary Clinton).

Aunque globalmente la línea que defendió el candidato republicano durante su campaña electoral fue calificada de “aislacionista”, Donald Trump ha declarado en repetidas ocasiones que la organización Estado Islámico (ISIS, por su sigla en inglés) es el “enemigo principal” de su país y que, por consiguiente, su primera preocupación será destruirlo militarmente. Para alcanzar ese objetivo, Trump está dispuesto a establecer una alianza táctica con Rusia, potencia militarmente presente en la región desde 2015 como aliada principal del gobierno de Bas-

har al-Assad. Esta decisión de Donald Trump, si se confirma, representaría un cambio de alianzas espectacular que desconcierta a los propios aliados tradicionales de Washington. En particular a Francia, por ejemplo, cuyo gobierno socialista –por extrañas razones de amistad y negocios con Estados teocráticos ultrarreaccionarios como Arabia Saudita y Qatar– ha hecho del derrocamiento de Bashar al-Assad, y por consiguiente de la hostilidad hacia el presidente ruso Vladimir Putin, el alfa y el omega de su política exterior.

Una tensa relación

Donald Trump tiene razón: las dos grandes batallas para derrotar definitivamente a los yihadistas del ISIS –la de Mosul en Irak, y la de Raqqa en Siria– aún están por ganar. Y van a ser feroces. Una alianza militar con Rusia es, sin duda, una buena opción. Pero Moscú tiene aliados importantes en esa guerra. El principal de ellos es Irán que participa directamente en el conflicto con hombres y armamento. E indirectamente pertrechando a las milicias de voluntarios libaneses chiitas del Hezbollah.

El problema para Trump es que también repitió, durante su campaña electoral, que el acuerdo con Irán y seis potencias mundiales sobre el programa nuclear iraní, que entró en vigor el 15 de julio de 2015, y al que se habían opuesto duramente los republicanos en el Congreso, era “un desastre”, “el peor acuerdo que se ha negociado”. Y anunció que otra de sus prioridades al llegar a la Casa Blanca sería desmantelar ese pacto que garantiza la puesta bajo control del programa nuclear iraní durante más de diez años a la vez que levanta la mayoría de las sanciones económicas impuestas por la ONU contra Teherán.

Romper ese pacto con Irán no será sencillo, pues se firmó con el resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Francia, Reino Unido, Rusia) y Alemania, a los que Washington tendría que enfrentarse. Pero es que, además, como se ha dicho, el aporte de Irán en la batalla contra el ISIS, tanto en Irak como en Siria, resulta fundamental. No es el momento de enemistarse de nuevo con Teherán. Moscú, que ve con buenos ojos el acercamiento de Washington,

no aceptará que esto se haga a costa de su alianza estratégica con Teherán.

Uno de los primeros dilemas del presidente Donald Trump consistirá pues en resolver esa contradicción.

Trump anunció que una de sus prioridades al llegar a la Casa Blanca sería desmantelar el acuerdo con Irán sobre su programa nuclear.

No le resultará fácil. Entre otras cosas porque su propio equipo de halcones, que acaba de nombrar, parece poco flexible en lo que concierne a las relaciones con Irán.

Por ejemplo el general Michael Flynn, su asesor de Seguridad Nacional (lo que Henry Kissinger fue para Ronald Reagan), está obsesionado con Irán. Sus detractores lo definen como “islamófobo” porque ha publicado opiniones que muchos consideran abiertamente racistas. Como cuando escribió en su cuenta de Twitter: “El temor a los musulmanes es perfectamente racional”. Flynn participó en las campañas para desmantelar las redes insurgentes en Afganistán e Irak. Asegura que la militancia islamista es una “amenaza existencial a escala global”. Igual que Trump, sostiene que la organización Estado Islámico es la “mayor amenaza” que enfrenta EE.UU. Cuando fue director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (AID), de 2012 a 2014, dirigió la investigación sobre el asalto al consulado estadounidense de Bengasi, en Libia, el 11 de septiembre de 2012, en el que murieron varios marines y el embajador estadounidense Christopher Stevens. En aquella ocasión, Michael Flynn insistió en que el objetivo de su agencia, como el de la CIA, era “demostrar el rol de Irán en ese asalto”. Aunque jamás haya habido evidencia de que Teherán tuviera cualquier participación en ese ataque.

Curiosamente, a pesar de su hostilidad a Irán, Michael Flynn está a favor de trabajar de manera más estrecha con Rusia. Incluso, en 2015, el general viajó a Moscú donde fue fotografiado sentado al lado de Vladimir Putin en una cena de gala para el canal estatal de televisión, Russia Today (RT), donde ha aparecido regularmente como analista. Posteriormente, Flynn admitió que se le pagó por hacer ese viaje y defendió al canal ruso diciendo que no veía “ninguna diferencia entre RT y el canal estadounidense CNN”.

Otro anti-iraní convencido es Mike Pompeo, el nuevo director de la CIA, un ex militar graduado de la Academia de West Point y miembro del ultraconservador Tea Party. Tras su formación militar, fue destinado a un lugar de extrema tensión durante la Guerra Fría: patrulló la “Cortina de Hierro” hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. En su carrera como político, Mike Pompeo formó parte del Comité de Inteligencia del Congreso, y se destacó en una investigación que puso contra las cuerdas a la candidata demócrata Hillary Clinton por su pretendido papel durante el asalto de Bengasi. Ultraconservador, Pompeo es hostil al cierre de la base de Guantánamo (Cuba), y ha criticado a los líderes musulmanes de Estados Unidos. Es un partidario decidido a dar marcha atrás al tratado nuclear firmado con Irán, al que califica de “Estado promotor del terrorismo”.

Pero quizás el más rabioso enemigo de Irán, en el entorno de Donald Trump, es el general James Mattis, apodado “Perro Loco”, que estará a cargo del Pentágono, o sea secretario de Defensa. Este general retirado de 66 años demostró su liderazgo militar al mando de un batallón de asalto durante la primera Guerra del Golfo en 1991; luego dirigió una fuerza especial en el sur de Afganistán en 2001; después comandó la Primera División de la Infantería de Marina que entró en Bagdad para derrocar a Saddam Hussein en 2003; y, en 2004, lideró la toma de Faluya en Irak, bastión de la insurgencia sunnita. Hombre culto y lector de los clásicos griegos es también apodado el “Monje Guerrero”, alusión a que jamás se casó ni tuvo hijos. James Mattis ha repetido infinitas veces que Irán es la “principal amenaza” para la estabilidad de Medio Oriente, por encima de organizaciones terroristas como el ISIS o Al Qaeda: “Considero al ISIS como una excusa para Irán para continuar causando daño. Irán no es un enemigo del ISIS. Teherán tiene mucho que ganar con la agitación que crea el ISIS en la región”.

En materia de geopolítica, como se ve, Donald Trump va a tener que salir pronto de esa contradicción. En el teatro de operaciones de Medio Oriente, Washington no puede estar –a la vez– a favor de Moscú y contra Teherán. Habrá que clarificar las cosas. Con la esperanza de que se consiga un acuerdo. De lo contrario, hay que temer la entrada en escena del nuevo amo del Pentágono, James Mattis “Perro Loco”, de quien no debemos olvidar su amenaza más famosa, pronunciada durante la invasión de Irak: “Vengo en paz. No traje artillería. Pero con lágrimas en los ojos, les digo esto: si me fastidian, los mataré a todos”. ■

*Director de *Le Monde diplomatique*, edición española.
© *Le Monde diplomatique*, edición española



Protestas contra la enmienda constitucional que limita el gasto público, San Pablo, 27-11-16 (Nacho Doce/Reuters)

Dossier

Crisis sin fin en Brasil

La polémica destitución de la presidenta Dilma Rousseff no puso fin a la grave crisis política e institucional que vive Brasil, enmarcada por una persistente recesión. Las revelaciones de sobornos golpean al nuevo presidente Michel Temer y su círculo íntimo así como a un gran número de representantes, que sin legitimidad están implementando un brutal ajuste económico, alimentando la indignación popular.

La lenta agonía institucional y política de Brasil, por Marcelo Falak **22**
Recuperar la radicalidad, el desafío de la izquierda, por Guilherme Boulos **24**

Dossier

La crisis sin fin



Manifestación en defensa de Dilma Rousseff, San Pablo, 13-3-15 (Nacho Doce/Reuters)

La destitución de Dilma Rousseff no ha logrado frenar la implosión institucional que vive Brasil, que amenaza conducir al país por el camino de una lenta agonía, con una clase política corrupta abroquelada en defensa de sus privilegios, y con un creciente conflicto de poderes en puerta.

Lenta agonía institucional y política

Brasil sangra

por Marcelo Falak*

Pese a lo traumática que fue, pese al debate interminable que suscitó sobre si se había tratado o no de un “golpe institucional” (con perdón del oxímoron) y pese al modo en que devaluó el voto popular en beneficio de una casta política terminalmente sospechada, la destitución de Dilma Rousseff no fue el punto más bajo de la crisis política en Brasil. El 31 de agosto de 2016, con su reemplazo definitivo por Michel Temer, no se consumó otra cosa que un momento más, trascendente pero parcial, de una implosión institucional de larga duración, en cámara lenta, que nos sobresaltará aún por un largo tiempo.

Con dos años de mandato por delante, el Presidente de reemplazo (toda una especialidad de su Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) enfrenta varios frentes potencialmente fatales para él.

Uno, sus pésimos niveles de respaldo popular, poco compatibles con el calado de las reformas estructurales, de impactante impronta ajustadora, que está encarando con el apoyo del Congreso. Sobre este escenario descansa la posibilidad de una renuncia anticipada.

Dos, las filtraciones de la “delación del fin del mundo”, como la encarada por los setenta y siete ex ejecu-

tivos “arrepentidos” de la megaconstructora Odebrecht, que no sólo pegan de lleno sobre el círculo más íntimo del mandatario sino sobre él mismo, por el presunto pedido explícito de dinero negro, desviado de contratos con el Estado, para financiar campañas. Pero si eso es suficientemente explosivo, algo todavía peor despunta en el horizonte: la tentación de Eduardo Cunha, el otrora poderoso presidente de la Cámara de Diputados, que fue fundamental en el esquema del juicio político a la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) y que siente que su ex socio Temer no hizo nada por salvarlo de la cárcel ni, consumada esta, por sacarlo de ella. Cunha estuvo por años en el corazón de muchos negocios oscuros, que lo llevaron a construir con dinero de la misma tonalidad una fortísima bancada propia, multipartidaria, el llamado *centrao*. Es enorme el cúmulo de cosas de las que podría “arrepentirse”, y resuenan cada vez más acechantes en el mundillo de Brasilia las palabras que pronunció apenas antes de su caída en desgracia: “Voy a ser recordado como el hombre que terminó con dos presidentes en este país”. ¿Pura bravata? Sobre este doble escenario se monta la hipótesis de un *impeachment* como el que sufrió Dilma.

Tres, una amenaza menos contemplada (sólo por el momento) en los análisis pero que puede ser

más concreta: la chance de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) anule el resultado de las elecciones de octubre de 2014, que consagraron en segunda vuelta la fórmula Rousseff-Temer por presunta financiación ilegal de su campaña. Este escenario revelaría a quien ha sido tildado de gran titiritero como un mero aprendiz de brujo, incapaz de contener las fuerzas que ayudó a desencadenar.

Pero el análisis frío obliga a agregar un cuarto escenario: el de un Temer “sangrando” hasta el final del mandato, el 1º de enero de 2019, cumpliendo el mismo destino que él y los suyos le impusieron a Dilma desde el primer día de su segunda gestión.

Señalemos en este punto una cuestión central: ¿qué clase de gobierno encabeza Michel Temer? Uno cuya legitimidad y fortaleza parecen insuficientes para cumplir con el dramático ajuste que el *establishment* le reclama, el que justificó el empeño y los recursos que puso en su entronización. ¿Será que al final Dios sí juega a los dados?

¿Impeachment 2.0?

El altísimo rechazo popular que rodea al Presidente es la contracara de sus posibilidades de supervivencia. Según la última encuesta de Ibope, el mandatario recoge un 64% de imagen negativa,

contra un 55% de septiembre cuando acababa de ser confirmado por el Congreso.

La palabra “renuncia” ya se escucha en algunas tertulias de alto nivel en Brasilia. Su sola mención resulta elocuente sobre la existencia de usinas que comenzaron a operar.

A su vez, las delaciones premiadas de decenas de ex ejecutivos de Odebrecht a cambio de reducciones de sus condenas ya tuvieron un par de convenientes filtraciones a la prensa para ubicar a Temer en reuniones en las que pidió explícitamente 10 millones de reales (unos 3 millones de dólares al cambio actual) para financiar campañas de políticos aliados. La administración de esas gestiones quedó en manos de tres de sus hombres de mayor confianza: el ministro jefe de la Casa Civil (jefe de gabinete), Eliseu Padilha; el asesor especial de la Presidencia, José Yunes, y el secretario del Programa de Asociaciones de Inversión (público-privadas), Moreira Franco. Ellos forman parte de su mesa más chica, que en los últimos meses fue perdiendo otros integrantes, todos implicados en denuncias graves de corrupción o de obstrucción a la Justicia.

Todo lo que digan los “arrepentidos” deberá pasar por el tamiz del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema), que, cotejando palabras con pruebas que se deben ofrecer como anexo, definirá –se espera que en el primer trimestre de 2017– si “homologa” o no dichas denuncias. La esperanza (pero no confirmada aún) delación de Eduardo Cunha tendría tiempos algo más largos.

La cuestión de las fechas es importante, ya que, según la Constitución, si la falta del presidente y el vice se produce durante la segunda mitad del mandato, quienes siguen en la “línea sucesoria” (el jefe de Diputados y, luego, el del Senado) ya no deben convocar a elecciones sino organizar una votación del Congreso para que designe a quien deba completar el período. Una “salida Duhalde”.

Si las denuncias contra Temer se hacen vehementes, las opciones serían la renuncia o un nuevo *impeachment*. Lo primero queda reservado a su psiquis, por lo que hay poco para especular. Lo segundo sí puede analizarse.

Se ha dado el mote de “delación del fin del mundo” a la de los hombres de Odebrecht porque esa firma, que llegó a ser la principal constructora de América Latina, lubricó con dinero legítimo y del otro cientos de campañas electorales de todos los niveles y sectores políticos desde el retorno de la democracia. Se estima que en esas confesiones puede haber hasta doscientos dirigentes poderosos inculcados, en gran medida legisladores con mandato en curso. Que estos acepten mansamente deshacerse de Temer no parece demasiado probable, ya que ello implicaría quedar directamente expuestos a la próxima fase de la barrida moralizadora. No por nada el Presidente mantiene el apoyo de más del 60% de cada Cámara, algo que acaba de comprobarse en varias votaciones clave.

De hecho, el Congreso ya activó sus mecanismos defensivos. Dando clamorosamente la espalda al sentir popular, se trabó en una guerra de poderes con parte del Poder Judicial, básicamente con los fiscales y el juez Sérgio Moro de la operación “Lava Jato”, con el procurador general Rodrigo Janot y con el sector militante del Supremo. Esa tensión se vio asimismo en la resistencia a la destitución como titular del Senado del multidenunciado y ya formalmente reo de la Justicia Renan Calheiros y en una primera votación de un paquete “anticorrupción” al que se le enganchó una cláusula para llevar a la cárcel a los magistrados que se excedan en sus funciones.

¿Y la voluntad popular?

Ante la tercera amenaza, la que más llama la atención, Temer parece más inerte: el fallo pendiente del TSE en una causa iniciada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) antes del *impeachment* a Dilma... y antes también de que Temer emergiera como la gran figura de recambio.

La denuncia, en plena conmoción por el escándalo en Petrobras, apuntaba a la supuesta financiación ilegal de la campaña oficialista con dinero desviado del Estado. Precavido, el jurista Temer mantuvo reuniones con jueces del STF ya en los tiempos en los que se comenzaba a espesar el caldo del complot contra la desangelada ex mandataria. Acudió con la idea de separar las cuentas

de ambos. Una iniciativa demasiado creativa y de imposible sustento jurídico. Así, en su andanada ciega de entonces, el PSDB no previó que Temer terminaría siendo su ariete principal contra el PT.

En Brasilia indican que dentro del TSE, cuyo fallo se espera para comienzos de 2017 pero que, apelaciones mediante al Supremo, podría quedar firme unos cuantos meses más tarde, hay hoy una tendencia mayoritaria a fallar en contra de la fórmula. Una decisión que, con Dilma fuera de la foto, sólo encontraría como víctima al propio Temer.

Brasil es un país curioso. En caso de una sentencia a favor de la moción del PSDB, pasará en pocos meses de una situación en la que un poder de la República (el Congreso) hizo uso de sus atribuciones, polémicas aparte, para descabezar al Ejecutivo a una todavía más controvertida: la de otro poder, el Judicial, que avanzaría no ya contra el jefe de Estado en funciones sino contra el voto popular que lo puso, aunque haya sido a dos bandas, en ese lugar. ¿Cómo es posible anular el resultado de una votación que en su mecánica y escrutinio no fue fraudulenta en base a la financiación ilegal de una campaña? ¿Cuál es el conector legal o lógico que ata inexorablemente el voto de cada ciudadano al impacto de un acto público o una campaña en TV financiada con dinero oscuro? Un juez, un voto.

Ahora bien, dado que el fallo del TSE llegará una vez que Temer ya haya pasado el meridiano del mandato, Brasil se aleja, *a priori*, de un escenario de elecciones anticipadas. ¿Es así?

Los enjuagues para lo que llamamos “salida Duhalde” ya existen, y entre los nombres de juristas respetados y otros “notables” que se barajan para timonear la transición, emerge otro con particular fuerza: el del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Hombre de 85 años, en principio parecería apto para encarar una transición necesariamente corta y sin apetencias propias a futuro. Pero también tiene contras. Una, que su prestigio es mayor en el exterior que en su país, donde para una gran mayoría popular su nombre es sinónimo de ajuste neoliberal. Otra, su condición de presidente de honor del PSDB, que lo hace sospechoso ante el temerismo de ser el caballo de Troya que prepare el desembarco final en el poder de algún “socialdemócrata” (conservador) y postergue el sueño de perpetuación del PMDB. Una sospecha que ya comenzó a llenar de sombras la relación entre ambos partidos, hoy aún socios.

¿Pero qué legitimidad social tendría, en caso de una caída de Temer, un “gobierno del Congreso”, el cuerpo que carga con el mayor nivel de desprestigio dentro de la devastada clase política brasileña?

Esta pregunta hace que muchos comiencen a imaginar una salida electoral anticipada, que adelante la cita prevista para octubre de 2018 a 2017. La idea es respaldada por el 63% de los brasileños según un sondeo reciente de Datafolha. ¿Qué se podría esperar si eso fructificara en medio de la presión de la calle?

Hoy las encuestas muestran primero a Luiz Inácio Lula da Silva, pero con un índice de rechazo tan alto que lo haría inviable en una segunda vuelta ineludible. Y eso si alguna de las varias causas por corrupción que tiene abiertas no lo pone antes en la cárcel.

Su ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, candidata “honestista” y que ensayó en la primera vuelta de 2014 un “camino del medio” ineficaz, da el perfil de lo que un sector del electorado espera en términos éticos. Pero sus ambigüedades ideológicas, su debilidad política y hasta su endeblez física siempre la ponen en duda.

Para algunos, la sucesión debe salir del PSDB. Pero su presidente, el senador Aécio Neves, parece algo manchado de petróleo, lo mismo que el canciller José Serra, un amigo cercano de Temer. El gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, derrotado como los dos anteriores por Lula y Dilma en su momento, emergería con menos complicaciones y brega contra aquellos para separar lo más posible al partido del actual presidente. Pero los números no le dan.

¿Y un tapado? ¿Un *outsider*? ¿Cómo anticiparse a eso?

El ajuste ontológico

La palabra “sangrar” era la que los enemigos de Dilma soñaban como su futuro fatal cuando el juicio político parecía de difícil concreción. Temer esperó sigilosamente, sabiendo que la sangre no es infinita. Acaso, por qué no, ese sea ahora el futuro que le es-

pera si el Congreso lo protege (más que por amor, en defensa propia) y si los enjuagues en el TSE contradicen lo que se parece cocinarse en estas horas.

Ese respaldo del Congreso es lo que explica que el Presidente esté logrando sacar adelante polémicas enmiendas constitucionales, que requieren dos votaciones con tres quintos de los votos en cada Cámara. Estas enmiendas son parte de un plan de ajuste que parece estar muy por encima de las precarias bases de su administración en términos

de legitimidad de origen y de respaldo público.

Muchos comienzan a imaginar una salida electoral anticipada, que adelante la cita prevista para octubre de 2018 a 2017.

Una, crucial es la PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) del techo al gasto público, ya aprobada. En síntesis, establece un congelamiento de las erogaciones de Estado en términos reales desde 2017 por veinte años (con la posibilidad de establecer una revisión en la mitad de ese plazo), ya que sólo podrán ser actualizadas de acuerdo con la inflación pasada. Si bien admite un aumento mayor en salud y educación,

cuyos topes además comenzarán a regir desde 2018, ese beneficio deberá ser siempre a expensas de otras partidas, de modo que se mantenga el tope general.

Ahora bien, dados los crecientes recursos que se destinan a honrar los intereses de una deuda pública que ya supera el 70% del PIB y el enorme peso de los pagos de salarios, jubilaciones, pensiones y asistencia social, el presupuesto brasileño resulta muy inelástico.

El problema es que la población crece, y no basta con actualizar los presupuestos en base a la evolución de los precios. ¿Cuántos más pacientes acudirán hasta 2037 a los hospitales públicos, cuántos chicos más a las aulas? Dada la duración que se le ha dado, el ajuste propuesto resulta brutal.

Tanto es así, que hasta el mercado duda y no son pocos sus analistas que le ven una vida mucho más corta que la que pergeñaron sus padres, Temer y su ministro de Hacienda, el otrora comodín de Lula para seducir a la ortodoxia, Henrique Meirelles. Aquellos creen que la misma vigencia del ajuste ahogará la administración pública.

Curiosa fe la del ajuste ontológico, receta *a priori* y ajena a que el contexto sea de expansión o de encogimiento de la actividad. Hasta ahora, a Temer, como a tantos y tantos en la región y en el mundo en la historia del capitalismo, le ha ido mal con ella. La caída del 3,8% del PIB de 2015 se replicará con una de, al menos, 3,6% en el 2016, que lo encontró como responsable de la debacle. Pero el déficit fiscal, ajeno a esa porfía, sigue creciendo (¡vaya sorpresa!); pese a la vigencia de un esquema de blanqueo de capitales, el resultado primario (antes del pago de deudas) de los primeros diez meses de 2016 fue el peor en veinte años. Asimismo, las proyecciones para 2017 de un rebote de la economía ya son la mitad del exiguo 1% con el que hasta hace poco se soñaba.

Por otra parte, la pelea por la aplicación del techo al gasto conlleva otra, también de gran envergadura: la reforma previsional.

Hay cierta razonabilidad en la iniciativa, ya que Brasil es una rareza mundial que no establece una edad mínima para acceder a la jubilación. Sin embargo, los extensos períodos de aportes que prevé el texto oficial (hasta 49 años para acceder al 100% de la prestación) y el umbral de 65 años tanto para hombres como para mujeres auguran una pelea muy dura, si no dentro del palacio legislativo, seguramente en la calle.

Ya sea en 2017 si los tiempos se precipitan o en 2018 si Temer “sangra”, sufriendo en carne propia la maldición que en su momento colaboró para imponerle a Dilma, Brasil deberá volver a pasar por las urnas. ¿Qué candidato podrá pretender ganar sin prometer la reversión de, al menos, el doloroso tope al gasto público?

Mientras, cada vez más brasileños hacen suyo el “*Fora Temer*”.



Dossier

La crisis sin fin

San Pablo, 16-8-15 (Nacho Doce/Reuters)

Tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el severo programa económico de Michel Temer pone a la izquierda frente a un doble desafío: amplificar la protesta social y construir un nuevo campo político progresista, ante el evidente retroceso del Partido de los Trabajadores.

El doble desafío de la izquierda brasileña

Recuperar la radicalidad

por Guilherme Boulos*

Después de cuatro elecciones presidenciales sucesivas ganadas por el Partido de los Trabajadores (PT) desde 2002, las fuerzas conservadoras lograron reorganizarse para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y reemplazarla por el vicepresidente Michel Temer. Más que dudosa en el plano jurídico (1), la maniobra no habría resultado tan sencilla si el PT no hubiera cometido tantos errores. Renunció a solicitar la movilización popular, llevó a cabo repetidas alianzas con diversos sectores de la derecha (algunos de los cuales luego trabajaron en su derrocamiento) y escogió responder a la crisis económica por la vía de la austeridad, a riesgo de amplificar el descontento social (2). Tales decisiones no facilitaron la emergencia de una reacción amplia frente a la ofensiva de la derecha.

Una vez en el poder, Temer no tardó en poner manos a la obra. Su receta: un liberalismo frenético en el plano económico y un conservadurismo militante en el plano político. Sus primeras deci-

siones esbozan ya un período de regresión social sin precedentes en la historia reciente del país.

La composición de su gabinete permite pensar que diversidad y paridad no figuran en el rango de sus prioridades. Ninguna mujer, ningún negro: solamente ancianos blancos ligados a las oligarquías regionales, muchos de los cuales están sospechados de corrupción. Los ministerios de Derechos Humanos y de Reforma Agraria han desaparecido. Poco faltó para que el nuevo presidente no se librara también del Ministerio de Cultura; renunció a hacerlo ante las protestas indignadas de un medio artístico que no se escandalizó tanto por la supresión de las otras carteras.

Programa de ajuste

Si bien el programa de Temer cuenta con el apoyo del sector bancario y de las grandes empresas, nunca fue sometido al voto. Durante un encuentro con los grandes nombres del empresariado brasileño, por otra parte, el nuevo presidente prometió que “no [sería] candidato a [su] reelección”, antes

de recalcar que ese compromiso le dejaba las manos libres para “dar prioridad al ajuste presupuestario” (3). En otros términos, se mostrará tanto más decidido cuanto que no corre el riesgo de pagar el costo político de las medidas impuestas a la población, que se anuncian severas.

El programa económico de Temer se organiza alrededor de tres propuestas: una enmienda constitucional destinada a ponerle techo a los gastos públicos (la PEC 241); una “reforma” de la protección social; una “flexibilización” de la legislación sobre el trabajo. Todas implican la supresión de derechos conquistados en reñida lucha.

La PEC 241 impone el congelamiento de las inversiones públicas en todos los sectores por un período de veinte años. Tras su aprobación, el gasto federal no crecerá más que la inflación hasta 2037; por lo tanto no aumentará en términos reales, contrariamente a la demografía. La medida, sinónimo de derrumbe de los servicios públicos y de eliminación de los programas sociales, carece de precedentes a nivel internacio-

nal. Pretexto invocado por el poder: la urgencia de reabsorber el déficit presupuestario y de pagar la deuda pública. En alza desde 2014, ésta no representa sin embargo más que el 66% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel inferior a aquellos registrados en el seno de la Unión Europea. La PEC 241 fue finalmente aprobada por el Senado el 13 de diciembre de 2016.

La reforma de la protección social no es menos alarmante. Temer retomó, llevándola aun más lejos, una idea expresada por Rousseff que ya implicaba una reducción de derechos. Los detalles del proyecto oficial todavía no fueron presentados al Congreso, pero ya se sabe que prevé el diferimiento de la edad legal de la jubilación a los 65 años. En ciertas regiones del país, la esperanza de vida no llega a tanto...

Tercera ambición: flexibilizar la legislación sobre el trabajo y rebajar el "costo" de la mano de obra. ¿Cómo? Autorizando la tercerización en todos los sectores de actividad y dando preponderancia a la negociación de empresa sobre la ley. Este último punto retoma un proyecto de ley ya en estudio en el Parlamento que pretende legalizar contratos... derogatorios de la legislación, a partir del momento en que fueron negociados entre patrones y empleados.

Este conjunto de propuestas logró obtener el consentimiento de las elites económicas al proyecto de destitución de Rousseff concebido por la derecha parlamentaria, respecto del cual se habían mostrado vacilantes en un primer momento. ¿Acaso no había tratado la presidenta de apaciguarlos sentando ella misma las bases de un ajuste estructural en 2015 y encarando una reforma de la protección social? Un cálculo errado: sus medidas agravaron la recesión y el descontento popular; por su parte, las empresas y los bancos, considerando insuficiente su determinación, prefirieron reemplazarla por Temer...

El fin del "consenso"

Su destitución marca el fin de un ciclo en Brasil. Durante trece años los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y, luego, de Dilma Rousseff trabajaron para reforzar un "pacto" consistente en promover ciertos avances sociales y una mejoría de la vida de los más pobres sin amenazar los intereses de los más ricos. La miseria retrocedió al tiempo que los beneficios pegaban un salto. Así, Lula da Silva fue el gran arquitecto de una política de "conciliación" (4).

El "piso inferior" de la sociedad fue beneficiado con políticas de revalorización del salario mínimo, de refuerzo de la capacidad de consumo de los trabajadores, así como de programas sociales de lucha contra la miseria o de acceso a la universidad, a la vivienda y la salud. El "piso superior", por su parte, gozaba de créditos asignados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y generosas exenciones fiscales. Sus privilegios históricos nunca fueron cuestionados. La fiscalidad, regresiva, no fue modificada, así como tampoco el nivel de concentración de la tenencia de tierras y de la propiedad urbana. El PT mantuvo –y hasta reforzó– la política que apuntaba a liberar un excedente primario de manera de garantizar el reembolso de una deuda en gran parte en manos de las clases dominantes del país. Nunca intentó impugnar el dominio del sector privado sobre los medios de comunicación ni erradicar la corrupción, lubricante del sistema político que heredaba (5).

Este acuerdo presentado como "ganador-ganador" no habría sido posible sin crecimiento.

Éste fue significativo (4% en promedio durante los dos gobiernos de Lula), sobre todo gracias a una situación internacional favorable: alza de los precios de las materias primas y crecimiento chino. Ese contexto facilitó el aumento de las reservas de divisas del Estado y permitió acrecentar las inversiones sociales sin tener que realizar la más mínima reforma estructural.

Con la crisis de 2008 y el cambio de contexto internacional, este modelo se vino abajo. En 2009 la política anticíclica de Lula da Silva logró en un primer momento mantener el crecimiento y postergar la catástrofe. Pero en 2014, cuando Rousseff dirigía el país, el acuerdo "ganador-ganador" comenzó a dar señales de agotamiento. El margen de maniobra para mantener la conciliación de los intereses se restringía, y la respuesta de la presidenta –la austeridad– precipitó la crisis.

Una crisis que se agudizó durante las manifestaciones de junio de 2013 (6), que marcaron el fin del consenso social que garantizaba la hegemonía del PT. La operación de lucha contra la corrupción "Lava Jato" ("lavado de alta presión") opacó la imagen del partido al tiempo que reducía la capacidad de inversión de la compañía petrolera nacional Petrobras y de las grandes empresas. La base parlamentaria del gobierno implonaba precisamente cuando la derecha procedía a juntarse. A partir de entonces, resultaba imposible ignorar la debacle estratégica del PT y su colapso institucional.

Esta situación pone a la izquierda brasileña y a los movimientos sociales frente a nuevas dificultades. La derrota del PT arrastró al conjunto del campo progresista, facilitando la ofensiva de los conservadores y los liberales. Los escándalos de corrupción afectaron profundamente la autoridad moral de aquellos que encarnan la izquierda a los ojos de la población. Y la incapacidad del partido para llevar a cabo una real autocrítica o para medir el agotamiento de su estrategia agrava la crisis.

Objetivos ambiciosos

El PT fue la fuerza hegemónica de la izquierda brasileña durante treinta y cinco años. Representó el lugar de unión de las fuerzas del movimiento social y de los sectores progresistas. En la actualidad, su capacidad para desempeñar ese papel se ha debilitado. Lo cual no significa que haya muerto, como lo pretenden los editorialistas. Lula da Silva sigue disponiendo de un fuerte apoyo en la población; probablemente encarna la mejor opción ante la perspectiva de la próxima elección presidencial, a pesar del linchamiento jurídico-mediático de que fue objeto. No obstante, el partido perdió mucho de su dinamismo y de su capacidad de movilización. Ha envejecido.

¿Cómo reaccionará la izquierda, en la medida en que no ha aparecido ninguna fuerza capaz de ocupar el espacio dejado por el PT? Por supuesto, se observan importantes resistencias, sobre todo contra la PEC 241 y la corrupción de los dirigentes políticos (el presidente del Senado Renan Calheiros, por otra parte, acaba de ser inculcado por desvío de fondos públicos, un juicio que echó leña al fuego de la ira popular). Los sin techo llevaron adelante im-

Las primeras decisiones de Temer esbozan un período de regresión social sin precedentes en la historia reciente del país.

portantes movilizaciones en las grandes ciudades. En el plano político, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), aunque minoritario, reúne a un grupo de parlamentarios combativos que dejaron el PT para crear una formación más a la izquierda. Pero estas iniciativas todavía son insuficientes para representar una solución.

Por lo tanto, la izquierda se encuentra ante dos grandes desafíos. El primero: lograr amplificar la protesta contra el gobierno de

Temer, lo que dependerá de la capacidad de los movimientos sociales para unir sus fuerzas y hacer comprender a los trabajadores la gravedad de estos ataques. El segundo: construir un nuevo campo político de izquierda, tomando debida nota del hecho de que el período del consenso ha pasado. En el momento actual, no es posible encarar el menor avance social sin ruptura ni confrontación. En otros términos, ya no es posible gobernar sin movilizar a la calle. La elite y la derecha lo han comprendido; una parte de la izquierda sigue vacilando.

La renovación de las fuerzas dependerá de la capacidad de la izquierda para encarnar una solución contrahegemónica. De no ser así, la insatisfacción social y política –amplificada por la crisis– será canalizada por esa "nueva derecha" que, a nivel internacional, supo recuperar la furia a través de *outsiders* como Donald Trump en Estados Unidos y Nigel Farage en el Reino Unido o Marine Le Pen en Francia. Un fenómeno que no preservará a Brasil.

La izquierda debe recuperar la radicalidad que conscientemente relegó. Radicalidad democrática, con un objetivo de participación política y de representación de la diversidad brasileña. Radicalidad estratégica, con un programa de transformación social ambicioso, susceptible de reanimar la esperanza. La forma institucional que adoptará este campo todavía no es clara, así como tampoco el tiempo que exigirá su constitución. Pero su necesidad se hace cada día más evidente. ■

1. Laurent Delcourt, "Coup d'Etat parlementaire au Brésil", *Le Monde diplomatique*, París, mayo de 2016.

2. Breno Altman, "Dilma capituló ante los mercados", *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril de 2015.

3. *Folha de São Paulo*, 30-7-16.

4. Geisa Maria Rocha, "El balance social de Lula", *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, septiembre de 2010.

5. Lamia Oualalou, "300 ladrones con título de doctor", *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, noviembre de 2015.

6. Janette Habel, "Un pays retrouve le chemin de la rue", *Le Monde diplomatique*, París, julio de 2013.

*Coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y del frente Pueblo Sin Miedo. Traducción: Víctor Goldstein

Archivo

Brasil, ¿el destino de Sudamérica?

por Federico Vázquez, Nº 204, junio de 2016.

La corrupción hecha sistema

por Marcelo Falak, edición web, abril de 2016.

El desarrollismo brasileño en peligro

por Marcelo Falak, Nº 202, abril de 2016.

Las personas que toman decisiones importantes están en Very Important People

¿Quiere conocerlas?

La información actualizada para sus negocios y comunicaciones con empresas, instituciones y organismos

comercial@verinfo.com

www.verinfo.com



Mientras se multiplican los arrestos y renuncias en torno a la alcaldesa de Roma, del Movimiento 5 Estrellas, éste surge como el gran vencedor del referendo organizado por el ahora ex presidente del Consejo. Los electores rechazaron la reforma constitucional, y condenaron la continuidad de las políticas de austeridad.

La apuesta perdida de Matteo Renzi

Italia, ruptura y *statu quo*

por Raffaele Laudani*



Matteo Renzi, Roma, 30-11-16 (Remo Casilli/Reuters)

El *rottamatore* (1), el demolidor, finalmente fue demolido. “Vuelvo a Pontassieve, como todos los fines de semana. Entro en la casa, todos están durmiendo... como de costumbre. Salvo que esta vez es diferente. Conmigo llegan cajas, libros, ropa, cuadernos. Cerré la residencia del tercer piso del Palacio Chigi [lugar de residencia del jefe de Gobierno italiano]. Vuelvo a casa de veras”. Así reaccionó, en Facebook, Matteo Renzi tras el referendo en el que su proyecto de reforma constitucional fue rechazado por el 60% de los votantes, con una tasa de participación récord: más del 65%.

En realidad, su caída no es sorprendente. El ex alcalde de Florencia fue víctima de la lógica que lo llevó al po-

der en febrero de 2014; una lógica propia del sistema político italiano, que permanentemente se inventa nuevos hombres providenciales, para luego incinerarlos con la misma rapidez con el objeto de satisfacer el deseo de ruptura compartido por amplios sectores de la sociedad, pero sin cuestionar el *statu quo* (2). Si bien en los casos de Mario Monti (2011-2013) y Enrico Letta (2013-2014) ese proceso había adquirido un aspecto tecnocrático, con el ascenso de Renzi adoptó un giro más político, ampliamente fundado en la denuncia del *establishment*.

Tras bambalinas

Desde el comienzo, su situación tenía algo de maquiavélico. Para resistir el inexorable proceso de debilita-

miento –Maquiavelo habría hablado de “corrupción” (3)– de su capital de innovación, el nuevo “príncipe” italiano hubiera podido tratar de volverse popular rompiendo con las políticas neoliberales que gobiernan a Italia desde hace treinta años. Pero semejante predisposición no figuraba en su ADN político, ni en el de las fuerzas sociales que lo llevaron al poder. También hubiera podido profundizar la vía demócrata-cristiana y tratar de construir un amplio partido centrista en el que cupieran todos –el supuesto “Partido de la Nación”–, apoyándose en una relación especial con Forza Italia, la formación de Silvio Berlusconi. Pero el *rottamatore* pecó de orgullo. Convencido de tener al electorado moderado en el bolsillo, creyó

que podía librarse de Berlusconi y de la mediación de los partidos. En consecuencia, escogió el camino bonapartista del consenso plebiscitario, con un referendo que personalizó en exceso. Tenía en su contra todas las fuerzas políticas, los sindicatos y hasta un sector de su propio partido; se jugó el todo por el todo y perdió, en particular debido al voto de los jóvenes (4).

De conformidad con el estilo fanfarrón del personaje, la elección del referendo sin embargo no estaba desprovista de cierta racionalidad: Renzi era consciente de que su imagen se deterioraba y de que su proyecto de modificación constitucional (5), apoyado en una sólida retórica anticasta, le ofrecía una buena ocasión de recuperar su prestigio perdido de “reformador”. Ese proyecto, además, obligaba al Movimiento 5 Estrellas (M5S) –su principal competidor en el tema del cambio– a presentarse como defensor del orden establecido. Una victoria finalmente lo habría liberado de la minoría de contestatarios de su partido, permitiéndole romper en forma definitiva los lazos del Partido Demócrata (PD) con la izquierda (6).

Su error fue subestimar la profundidad del descontento popular y creer que todavía podría apaciguarlo, como lo había hecho Berlusconi, con bellos discursos, falsas promesas y una ocupación agresiva de los medios de comunicación. Como escribió Ferruccio de Bortoli, ex director del *Corriere della Sera*, el ex alcalde de Florencia “no se dio cuenta de que después de tres años en el poder” ya no era, a los ojos de los italianos, el *outsider* que encarnaba la promesa del cambio: “el poder era él”, el que tenía los medios de movilizar las cosas, pero se quedó de brazos cruzados (*Il Fatto Quotidiano*, 12 de diciembre de 2016).

Más allá de sus anuncios de campaña –en los cuales nadie creyó verdaderamente– sobre su retiro de la vida política en caso de derrota, la relación voraz de Renzi con el poder le impide tomarse un año sabático bien merecido. Probablemente se encargará, durante los próximos meses, de ajustar cuentas en el interior del PD, con el objeto de evitar que las corrientes que hasta entonces lo apoyaban –en particular la poderosa tendencia Area Dem, conducida por el ministro de Cultura Dario Franceschini– se unan a sus principales competidores, Pier Luigi Bersani y Massimo D’Alema. Renzi aboga por una rápida disolución de la Asamblea y un retorno anticipado a las urnas, en nombre del 40% de electores que votaron por el “sí”, o sea, alrededor de 12 millones de votos. Obtenido sin aliados, ese resultado le permitiría presentarse como la víctima de un bloque conservador que le impidió “modernizar” el país. Mientras espera las elecciones, el *rottamatore* sigue controlando discretamente las palancas del poder.

Nombrado el 12 de diciembre de 2016, el nuevo jefe del Gobierno –el ex ministro de Relaciones Exteriores Paolo Gentiloni– tiene todos los atributos de un títere. Personaje discreto, que logró un pobre 14% en las primarias de centro-izquierda por la alcaldía de Roma en 2013, se apoya en la misma mayoría parlamentaria que Renzi, y casi continuó con el mismo equipo ministerial. Únicos cambios notables: el despido de la ministra de Educación, Stefania Giannini, que elaboró una reforma escolar muy discutida que hizo de ella

la responsable apuntada de la derrota del gobierno, y la promoción de Maria Elena Boschi. Anteriormente ministra de la Reforma Constitucional, esa fiel entre los fieles de Renzi se convirtió en secretaria de Estado en la Presidencia del Consejo, una posición clave por la cual transitan los principales expedientes gubernamentales.

Si bien, al controlar el gobierno desde el exterior, el *rottamatore* espera dominar la acción y la duración de la administración Gentiloni, al tiempo que se libera él mismo para la campaña que se abre, pone a su partido en una posición difícil: el PD deberá asumir una vez más la carga del gobierno durante la campaña y, como señaló D'Alema (*La Repubblica*, 12 de diciembre de 2016), podría terminar “sumergido por una ola” en las próximas elecciones, que se presentan en una bandeja de plata para Grillo y sus partidarios. Estos últimos, por otra parte, ya se pusieron sus trajes favoritos, aquellos que usan los defensores de la “dignidad de los ciudadanos” contra un gobierno y un partido que pisotean la “soberanía popular” (7).

Captar el descontento

El M5S logró hacerse pasar ante los electores como el verdadero opositor a la reforma constitucional. Durante meses monopolizó la escena política y mediática, sobre todo gracias a su nueva estrella ascendente, Alessandro di Battista. El joven diputado realizó una campaña estival muy destacada, recorriendo Italia y sus playas en un ciclomotor con la inscripción “#iodicono” (“Yo digo ‘no’”) mientras los representantes de las otras fuerzas políticas disfrutaban las vacaciones. Así, los otros partidos que se pronunciaron progresivamente contra la reforma se convirtieron en auxiliares del M5S, que ahora busca capitalizar el resultado del referendo para provocar nuevas elecciones. Irónicamente, en virtud de la ley electoral adoptada en mayo de 2015 (8) y combatida por Grillo, que la denunciaba como una “estafa” para el pueblo italiano, el M5S se encuentra en una posición de fuerza para ganar el próximo escrutinio. Máximo cuando el miedo a los movimientos “antipolíticos” parece haber pasado a la historia: al día siguiente de la victoria del “no” los mercados financieros y los bancos no padecieron el cataclismo anunciado. Tal vez ese miedo de hecho esté circunscripto a los dirigentes italianos y europeos...

Sólo el M5S logró unificar a su electorado en una misma línea: el 95% de sus simpatizantes habría votado por el “no” en el referendo del 4 de diciembre (9). El partido de Grillo aprendió a hacer política. Dotado de una gran plasticidad, resulta capaz de presentarse a la opinión pública bajo las formas más diversas: garante de la justicia, defensor de los valores constitucionales, reformador, ecologista, protector de los derechos de los más débiles, antiinmigrante y antieuropeo. Sabe poner de manifiesto, según las circunstancias, su aspecto agitador o su aspecto institucional, sin perder nunca, a los ojos de los italianos y en particular de los jóvenes, su “diferencia” respecto de los otros partidos. No obstante, una vez elegidos, los representantes del M5S pueden resultar menos brillantes. Es el caso de la alcaldía de Roma, conquistada por la candidata 5 Estrellas Virginia Raggi en junio de 2016 y paralizada luego por una se-

rie ininterrumpida de dimisiones y de guerras intestinas. El 15 de diciembre tuvo lugar un allanamiento judicial en el Capitolio.

Una vez más resucitado, Berlusconi aparece como otro gran ganador del referendo. Manteniendo durante un tiempo la prudencia, como buen animal político olfateó el humor del electorado y alineó *in extremis* a su partido, Forza Italia, en el campo del “no”. Incluso si una parte importante de sus

La izquierda institucional italiana se caracteriza por su falta de imaginación política: reproduce las mismas fórmulas desde los ochenta.

simpatizantes votó por la reforma (entre el 20 y el 40% según las regiones, de acuerdo con las estimaciones del Istituto Cattaneo), y aunque ya no tenga la voluntad de dirigir el país, logró así recuperar un papel político significativo para los equilibrios futuros. Sobre todo si, como lo espera, el modelo alemán de la gran coalición termina por imponerse como solución después de las elecciones.

La corriente minoritaria del PD también vaciló mucho antes de pronunciarse, casi demasiado tarde, por el “no”. Si bien esa opción ciertamente contribuyó a la derrota del presidente del Consejo, privado de casi el 30%

¿Qué proponía el referendo?

La reforma planteaba la modificación de 47 de los 139 artículos que integran la Constitución redactada en 1948. Los puntos centrales eran:

• Supresión del “bicameralismo perfecto”.

La intención era rebajar las competencias del Senado para que la Cámara Baja se convirtiera en el principal órgano legislativo. El Senado hubiera tenido poderes legislativos específicos y limitados y el número de sus miembros se hubiera reducido drásticamente.

• **Recentralización del poder.** La revisión del capítulo V de la Constitución apuntaba a reforzar al Estado central frente a los entes territoriales, recuperando para sí algunas competencias como energía, infraestructuras estratégicas o protección civil. En línea con esto, proponía el fin de la organización del país en 110 provincias.

• **Supresión del CNEL.** El Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo, un organismo creado en 1948 y compuesto por representantes de los ámbitos laboral y productivo, desaparecería por su alto costo (20 millones de euros anuales).

de los votos demócratas –una pérdida que sólo parcialmente compensó gracias a los electores de centro-derecha–, reforzó la imagen de oportunistas de Bersani y D'Alema, que aparecen, mucho más aun que Berlusconi y Renzi, como la encarnación del *establishment*, ese grupo de poderosos cuya única preocupación es su propia supervivencia.

Esa situación habría podido abrir una brecha a la izquierda del PD. El partido Izquierda, Ecología y Libertad (Sinistra Ecologia Libertà, SEL) se opuso vigorosamente a la reforma constitucional y figura entre los vencedores del referendo. Pero su espacio de intervención política paradójicamente se achicó, porque su campaña fue totalmente eclipsada por la del M5S. Reflejado en los sondeos con un miserable 4%, pero de todos modos dividido entre diversas corrientes y facciones, le cuesta trabajo labrarse un papel político bien definido: el espacio de la impugnación social está casi enteramente ocupado por el movimiento de Grillo, que impide la reconfiguración de las protestas en un modo antiliberal. Haciéndole sombra a la Liga del Norte (prima italiana del Frente Nacional francés), el M5S no obstante contribuye a contener el sentimiento xenófobo, también muy presente en otras partes de Europa.

La izquierda institucional italiana se caracteriza por su falta de imaginación política: reproduce las mismas fórmulas desde los años ochenta. Inmediatamente después del referendo, la punta de lanza de SEL y ex alcalde de Milán, Giuliano Pisapia, dijo estar abierto a una alianza con el PD si éste rompía todos los lazos con las fuerzas centristas que garantizaron su mayoría parlamentaria estos últimos años. Hasta se declaró candidato a ese papel de apoyo, una vez que hubiese unido a “la izquierda fuera del PD” en un “nuevo marco progresista” (*La Repubblica*, 7 de diciembre de 2016).

El coordinador nacional de SEL, Nicola Fratoianni, calificó ese proyecto de “democracia sin el pueblo”, inepta para “formular un juicio político sobre el país real” (*The Huffington Post*, 7 de diciembre de 2016). Por su parte, apela a una unión de la izquierda opuesta al neoliberalismo (y por lo tanto al PD), “como lo son todas las izquierdas del mundo, de [Bernie] Sanders a [Jeremy] Corbyn pasando por [Pablo] Iglesias y [Alexis] Tsipras” (*Il Manifesto*, 3 de diciembre de 2016). Pero Fratoianni parece olvidar que las experiencias progresistas en Estados Unidos, el Reino Unido, España o Grecia maduraron en contextos de fuerte movilización social. La envoltura política no crea el movimiento. Las franjas de la población que padecen los efectos de la crisis económica ven en el M5S y, en una menor medida, en la Liga del Norte, mejores soluciones; sin que se establezca con ellas una nueva “conexión sentimental” (para retomar las palabras de Antonio Gramsci), todo proyecto de izquierda “alternativa” corre el riesgo de quedarse “sin el pueblo”. ■

1. “El que desguaza”, apodo que se dio el propio Renzi.

2. Véase “Matteo Renzi, el hombre ‘demoledor’”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2014.

3. Nicolás Maquiavelo, *El príncipe*, 1532, varias ediciones.

4. Ilvo Diamanti, “La solitudine dei giovani elettori.

ecco perché hanno votato No al referendum costituzionale”, *La Repubblica*, Roma, 12-12-16.

5. En particular, esta reforma preveía reducir el poder del Senado y por eso mismo reforzar el del gobierno y de las instituciones territoriales.

6. Véase Francesca Lancini, “La pesada herencia del berlusconismo”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, noviembre de 2011.

7. Giuseppe Grillo, citado en “Gentiloni scioglie la riserva”, *www.corriere.it*, 12-12-16.

8. Defendida por Renzi, esta ley prevé conceder una mayoría de cerca del 55% de las bancas de diputados al partido que llegue primero en las elecciones generales.

9. “Referendum 4 dicembre 2016 – Gli elettori del PD e del PDL si sfaldano, quello del M5S è sempre più compatto”, Istituto Cattaneo, Boloña, 5-12-16.

*Profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Boloña.

Traducción: Victor Goldstein

Bloqueo político

2011

12 de noviembre. Envuelto en causas judiciales y con una economía al borde de la quiebra, Silvio Berlusconi renuncia como Primer Ministro después de 17 años en el poder.

13 de noviembre. Con el mandato de cumplir las medidas de austeridad exigidas por la UE, el ex comisario de la UE, Mario Monti, asume el doble cargo de Primer Ministro y ministro de Economía.

2012

12 de diciembre. Las impopulares políticas de ajuste adoptadas y la pérdida del apoyo del partido de Berlusconi (Partido del Pueblo de la Libertad, PDL) fuerzan a Monti a presentar su renuncia.

2013

24 y 25 de febrero. Las elecciones legislativas conducen a un Parlamento paralizado. Sorprende la victoria del M5S, el partido más votado, y el buen desempeño de la centro-derecha de Berlusconi.

28 de abril. Después de varios meses de caos político, asume como primer ministro Enrico Letta. El gobierno se logra gracias a la coalición de fuerzas de centro-izquierda y de centro-derecha.

2014

14 de febrero. Letta renuncia después de que su formación, el Partido Demócrata (PD), exigiera un nuevo Ejecutivo para sacar al país del inmovilismo. El propio PD propone a Renzi para asumir el cargo.

22 de febrero. El ex alcalde de Florencia y secretario general del PD, Matteo Renzi, asume como Primer Ministro. Se hace llamar el *rottamatore* por su voluntad de querer transformar el sistema político.

2016

7 de diciembre. Tras la aplastante derrota en el referendo que había convocado, Renzi renuncia. Días después asume el cargo Paolo Gentiloni (PD), ex ministro de Relaciones Exteriores de Renzi.

A pesar de que en 2015 Aung San Suu Kyi ganó las elecciones, un artículo amañado de la Constitución le prohibió acceder a la Presidencia. Sin embargo maneja los hilos del poder en Birmania, donde grupos étnicos armados y el peso político del ejército hacen difícil el establecimiento de un gobierno civil.

Fracturas, inequidades y vestigios dictatoriales

Birmania, una democracia condenada

por Christine Chaumeau*, enviada especial



Rangún, 1-2-15 (Soe Zeya Tun/Reuters)

Desde que ingresaron al Parlamento en marzo de 2016, los 390 diputados de la Liga Nacional para la Democracia (LND, el partido que preside Aung San Suu Kyi), se alojan en los monótonos edificios de una antigua residencia del ejército en Naypyidó, la capital birmana. En ocasión de las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 2015, su formación obtuvo el 75% de los escaños. A las 8:20 am, como todos los días de sesiones parlamentarias, aparecen vestidos con un uniforme especial, un traje de la región para los diputados de las minorías étnicas; *khaung paung*, el turbante tradicional, para sus homólogos bamar.

Ya listos, todos cierran con candado las puertas de sus rudimentarias habitaciones. No es cuestión de llegar tarde. Los esperan buses y motos. Los funcionarios del Ministerio del Interior se aseguran de que suban a las combis para escoltarlos hasta el Parlamento.

Por las gigantescas avenidas de aspecto marcial, la caravana parece muy vulnerable. Las barreras militares ubicadas en la entrada de las vías que conducen a la Cámara se cierran detrás de ellos. Hay que garantizar la seguridad de los nuevos diputados, afirman los soldados de guardia. ¿Pero qué amenaza planea sobre esos representantes elegidos con bombos y platillos? “El ejército!”, responde el diputado Win Htein,

un incondicional de Suu Kyi, consciente de la paradoja que sugiere su respuesta: “En cualquier momento, podríamos ser llevados a la cárcel –ironiza–. Esta idea se nos ocurrió los primeros días en que subimos a esos buses.”

Un cuadro cotidiano que ilustra lo que sucede a diario en Birmania (Myanmar). Una democracia naciente enmarcada por una Junta Militar que, desde 1962, bajo distintas formas y acrónimos alambicados, dirigía el país. Una evolución más que una revolución, subraya el periodista Myint Zaw: “Los militares tomaron la iniciativa del cambio. Y son imprescindibles”. Por cierto, ya no hay dictadura, pero este primer gobierno civil debe contentarse

con una Constitución escrita en 2008 por y para el ejército.

Sin embargo, los birmanos cuentan con Suu Kyi, opositora histórica y adulada. Su retrato se vende por la calle junto con el de su padre, el general Aung San, héroe de la independencia asesinado cuando ella tenía 2 años, y el del nuevo presidente Htin Kyaw. Las mismas frases se repiten: “Aung San Suu Kyi es nuestra madre”; “Confío en ella”; “Lucha por nuestro país”. Hoy tiene que mostrarse a la altura de las expectativas.

Su primer “golpe” político lo realizó en abril de 2016, a partir de la asunción del gobierno civil. El artículo 59 de la Constitución –hecho a medida para eso– le prohibía acceder a la Presidencia, ya que sus dos hijos son británicos. Con el apoyo de la mayoría parlamentaria, y a pesar de la oposición de todos los diputados militares, fue nombrada consejera del Estado –un puesto creado especialmente para permitirle dirigir “desde la cumbre” al gobierno del discreto y conciliador Htin Kyaw, un amigo muy cercano–. También se atribuyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre sus aliados, esta concentración de poderes desagrada. “Los problemas no pueden ser resueltos por una sola cabeza”, alerta Lut Latt Soe, directora del diario *The People’s Age* e hija de uno de los fundadores de la LND. Todo se decide “arriba”, confirman varios consejeros. Algunos denuncian un “culto a la personalidad” en torno a una mujer con fama de “poco conciliadora” y “que no escucha”. Esas asperezas enturbian poco a poco su imagen, muy difundida en Occidente, de “Nelson Mandela de Asia” y de defensora de los derechos humanos.

Si bien algunos diputados de la LND se lamentan al ver que sus roles se reducen a un “sello de aprobación”, el diputado Win Htein reivindica la disciplina casi militar que impone a los suyos: “La obediencia es absolutamente necesaria. Es por el bien de la construcción democrática y la reconciliación nacional. La situación sigue siendo muy frágil. Tenemos que asegurar la cohesión frente a los militares”.

Por ahora, Suu Kyi cultiva sus relaciones con estos últimos. Negociar con Tatmadaw (el ejército) es esencial para avanzar en la crucial cuestión de la paz con todos los movimientos étnicos armados. ¿Pero cómo ganar la paz cuando el país, desde la independencia en 1948, sólo conoció la guerra (1)? Voluntarista, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2016 Suu Kyi convocó una conferencia llamada “Panglong del siglo XXI” –en referencia a la organizada por su padre en 1947, que había trazado los contornos de una Unión Birmana–. Ya que “sin paz, no podemos responder a las necesidades de los ciudadanos”, afirmó en la apertura de los debates.

En el Palacio de Congresos de Naypyidó, se sucedieron en la tribuna representantes del ejército, del gobierno y de los grupos étnicos, cada uno exponiendo su visión de una Birmania federal. Sin embargo, este primer encuentro se parecía más a un diálogo de sordos que a la apertura de negociaciones para definir un futuro común. Los emisarios del poderoso ejército Wa, presentados como “observadores” y no como “participantes de pleno derecho”, se retiraron de la conferencia (2). Otros tres grupos armados estaban ausentes (3) ya que se habían negado a renunciar a la lucha armada, tal como lo exigían los generales como requisito previo a las

discusiones –una demanda irrealista, dada la enorme desconfianza que suscitan los militares–. “La cuestión del reconocimiento es fundamental”, estima Min Zin, director del Instituto para la Estrategia y la Política de Birmania (4). Así, durante la conferencia, los miembros de los grupos armados étnicos se sintieron ofendidos porque sus grados no fueran distinguidos como aquellos de sus homólogos de Tatmadaw, que asistían en uniforme de gala.

Por cierto, el federalismo, proyecto antes vilipendiado por el ejército, que se afirmaba como garante de la cohesión territorial del país, ahora está en el orden del día. Pero cada uno interpreta ese término a su manera. “Se corre el riesgo de que aparezca una federación de Estados diseñados sobre bases étnicas –explica Carine Jaquet, especialista en Birmania–. Una reproducción de aquello que la mayoría bamar impuso durante décadas a las minorías.” Algunos proponen volver a dibujar el mapa del país formando un Estado bamar compuesto de regiones donde vivirían una mayoría de bamar. Una manera de asegurar una atribución más equitativa de los recursos entre todos los componentes étnicos del país.

Los delegados tienen que reunirse cada seis meses. Pero, para el periodista Bertil Lintner, ese proceso se parece más a “una ópera en la que cada uno quiere ser divo y donde nadie desea cantar en el coro” (5). “Ayer –observa Min Zin–, se consideraba a la Junta Militar como el enemigo común. Hoy, Tatmadaw trabaja en colaboración con el gobierno en el proceso de paz” (6). La propia Suu Kyi está sospechada de debilidad respecto de la institución militar, fundada por su padre. Así, en noviembre de 2015, cuando cuatro ejércitos de la Alianza del Norte atacaron puestos policiales en el estado Shan, pidió poner fin a los combates. Pero permaneció muda frente a las ofensivas de Tatmadaw. “El ejército altera la dinámica de las relaciones en el campo de las antiguas fuerzas democráticas –asegura Carine Jaquet–. Antes se podían superar las divisiones étnicas para lograr una visión común.” Actualmente, eso se acabó.

Los marginados de la tierra

La LND cuenta con un estrecho margen de maniobra. El gobierno civil no controla ni las fuerzas armadas ni la función pública en su conjunto. Los ministerios clave de Defensa, Asuntos Fronterizos y del Interior se le escapan: están reservados a los militares. ¿Cómo el gobierno podría insuflar o hacer aplicar su política si no cuenta con la lealtad de sus funcionarios?

Algunos meses después de entrar en funciones, hay ministros de la LND a quienes les cuesta imponer sus puntos de vista. Así, en el Ministerio de Información, Pe Myint parece un novato. Se lo percibe torpe, perdido en su inmensa oficina. Los funcionarios que ya trabajaban para su predecesor manejan su agenda. Por otra parte, el jefe de la Administración del Ministerio, en el puesto hace quince años, está persuadido de que con este gobierno no se producirá ningún cambio fundamental. “Los antiguos dirigentes daban órdenes más claras, debido a su espíritu militar”, lamenta. Pero asegura: “Nosotros, los funcionarios, hemos votado por la LND”.

Con el levantamiento de las sanciones económicas estadounidenses, anunciadas en septiembre de 2016

durante la visita oficial de Suu Kyi a Washington y efectivas desde octubre, el gobierno perdió un medio para presionar a los generales. Existían ciento cuatro personalidades a las que no se les permitían ni visas ni comercio, tampoco a empresas en mano de militares y sus socios, a los que los birmanos llaman *cronies* (“acólitos”) (7). El director del sitio de información *The Irrawaddy*, Aung Zaw, fustiga la decisión estadounidense a la que juzga pre-

Ya no hay dictadura, pero este primer gobierno civil debe contentarse con una Constitución escrita en 2008 por y para el ejército.

matura: “Ahora, lo consiguieron todo”.

Durante años el ejército aseguró el enriquecimiento de los altos rangos desarrollando consorcios implicados en todos los sectores de la economía. Un verdadero Estado dentro del Estado (8). La extracción de gas, piedras preciosas y recursos naturales de zonas donde viven las minorías étnicas constituyó un maná. Según la organización Global Witness, en el estado Kachin, por ejemplo, el jade aseguraba ingresos de 31.000 millones de dólares, un saqueo en el corazón del conflicto. Una parte de las minas de jade estaría controlada por los más altos miembros de la ex Junta, entre ellos el general Than Shwe. Y la venta de piedras serviría para financiar al ejército kachin que lucha contra Tatmadaw para defender la soberanía de esta etnia sobre dichos recursos. El gobierno de Suu Kyi quiere revisar todas las licencias otorgadas para la extracción minera en ese estado. “Una manera de asegurar mayor transparencia –comenta Carine Jaquet–. Eso podría abrir un saludable espacio de discusión.” Pero con el levantamiento de las sanciones, las empresas vinculadas al ejército podrán asociarse a inversores occidentales. Una muy buena noticia para sus accionistas –los miembros de la institución militar–.

En cuanto a Min Zin, insiste sobre los peligros de desequilibrio en la distribución de las riquezas: “Si constantemente hablamos de paz sin prestar atención a la pobreza, van a surgir los problemas. La diferencia entre ricos y pobres es terrorífica” (9). Sólo un tercio de la población accede a la electricidad. En efecto, en el barrio de Hlaing Thar Yar, al oeste de Rangún, la ex capital, las aspiraciones se resumen en una fórmula: “*Sar wat nay yeikt*”, “Alimento, vestimenta y techo”. La expresión se repite en las conversaciones de los desplazados del delta del Irrawaddy que el ciclón Nargis devastó en 2008, provocando la muerte de 130.000 personas. Los pobladores fueron instalados en terrenos baldíos de los alrededores de la metrópoli. Desde el amanecer pequeños grupos bordean las calles: en cuclillas, jóvenes –hombres y mujeres– esperan el camión que los trasladará a sus fábricas. Una breve

detención basta para que los obreros alcancen el estribo y se aferren al vehículo, ya atestado. Les esperan doce horas de trabajo. En los cobertizos, los mayores se ocupan de niños que corren por los desagües.

“Este nuevo gobierno tiene que decretar un aumento salarial”, estima el obrero Than Ei. “Ahora seremos escuchados. Nos enteramos de que nuestras viviendas no serían desplazadas –quiere creer Tin Myint, llegado al barrio en 2010–. Nos sentimos aliviados. Antes, vivíamos siempre con miedo.” Su vecino, Aung Zaw, también espera mucho de este nuevo gobierno, que tiene “un margen de maniobra algo mayor; la injusticia va a acabarse”. “No sé mucho de política –dice, por su parte, Tun Wai, un habitante del barrio–. Lo que me importa, es que disminuya la corrupción.”

Mi Chai y su marido, Maung Gyi, defienden los derechos de esos marginados. Militan por una sociedad más justa, la lógica continuidad de su antiguo compromiso contra la Junta. Sonríen con amargura cuando escuchan a Suu Kyi exhortar a sus ex camaradas “a cesar de ‘cortar los árboles’”, es decir someterse y dejar de militar como antes. Una orden mal vista. “¿Cómo dejar de batallar cuando queda tanto por hacer? Todavía no somos una democracia. No basta con votar”, estima Maung Gyi.

El 70% de los 51 millones de birmanos vive de la agricultura. Pero la confiscación de tierras para proyectos de desarrollo o para empresas *cronie* aumenta el número de campesinos sin recursos. Según Sein Win, diputado de la LND responsable del *dossier* citado por la agencia Reuters, se habrían confiscado de uno a dos millones de hectáreas de tierras agrícolas. Acaparamiento de terrenos que se aceleró en 2000. El nuevo gobierno prometió devolverlos a los propietarios expoliados antes de abril de 2017. Todo un desafío...

Futuro incierto

“Tenemos que ofrecer empleos, y también formar nuestra mano de obra –declara Ko Ko Gyi, uno de los dirigentes de la Generación 88, el movimiento de la juventud para la democracia–. Temo que las empresas extranjeras o las organizaciones no gubernamentales que se instalan, atraídas por las recientes evoluciones de nuestro país, monopolicen los recursos humanos en detrimento de los inversores y proyectos locales.”

Nadie sabe a qué se parecerá Birmania en 2020, al terminar el mandato del presidente Htin Kyaw y su consejera de Estado. “En tanto no se enmiende la Constitución de 2008, no se podrá hablar de verdadera democracia”, recuerda el periodista Myint Zaw. Este objetivo, presentado como prioritario por la LND, parece haber pasado a un segundo plano. Militantes de los movimientos sociales e intelectuales temen que se anude un pacto de elites entre el partido de Suu Kyi y los herederos de la Junta, en detrimento de una población pobre y poco instruida. ¿Acaso la LND sólo puede decepcionar? Para el 1º de abril de 2017 se prevén elecciones legislativas parciales. Un test.

Diputado y escritor, electo de la LND al Parlamento regional de Rangún, Thein Lwin invita a analizar la historia reciente para avanzar mejor: “La dictadura que sufrimos durante décadas no se vincula a una intervención extranjera. Es señal de que nuestra sociedad está enferma. Tenemos que entender la razón. Este paso es indispensable para que nuestro país progrese democráti-

camente. Será largo, como cuando una persona sufre de cáncer”.

“El miedo, la angustia, la violencia están enraizados en nuestra sociedad”, agrega la escritora y directora del Pen Club Ma Thida. Así, considera que las violencias que desde 2012 se ejercieron contra la minoría musulmana, en especial los Rohingya (10), son consecuencia del pasado: “Se oprime al más débil por miedo al más fuerte. La furia que antes no podía expresarse por temor a la Junta se libera sin reservas. La atizan los rumores que difunden las redes sociales”. Por otra parte, Suu Kyi se muestra muy atemorizada frente a la creciente intolerancia religiosa. Mientras que se acusa al ejército de limpieza étnica en Arakan, ella se irrita por las recurrentes críticas de la “comunidad internacional” acerca de la suerte de los Rohingya.

La consejera de Estado cumplirá 72 años en junio de 2017. Agotada por su visita a Estados Unidos y al Reino Unido en septiembre de 2016, a su regreso tuvo que suspender sus actividades varios días. ¿Qué pasará cuando desaparezca? En particular se reprocha a la LND haber separado de las listas de candidatos a las elecciones de 2015 a miembros de Generación 88. “Hubieran podido hacer sombra a Aung San Suu Kyi –admite Win Htein–. No es cuestión de aceptar a personajes que puedan crear un partido en el seno del partido”. Reconoce que Suu Kyi no prevé un relevo: “¿Y entonces? La LND se construyó por ella y en torno a ella. Quizás el nuestro sea un culto a la personalidad, pero así funcionamos. Cuando ella desaparezca, tendrá que formarse otro partido”.

“Nos resulta difícil diseñar un sueño común”, observa Ma Thida, citando a Miguel Ángel, quien decía que adivinaba la obra futura en la piedra que se prestaba a esculpir. En Naypyidó, a dos pasos del “cuartel” donde viven los diputados, un habitante que votó por primera vez en noviembre de 2015 intenta tranquilizarse: “Al menos, ahora, podemos criticar”. ■

1. Véase Renaud Egretreau, “Una nación fracturada”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2015.

2. Conocido por sus estrechos lazos con China, administra un amplio territorio en el estado Shan. Véase “Panglong fractures with USA delegation’s indignant exit”, *Myanmar Times*, Rangún, 2-9-16.

3. El ejército Taang de Liberación, el ejército Arakan y el ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania.

4. Nyan Hlaing Lynn, “Min Zin: ‘It is essential that the democratic transition not be derailed’”, *Frontier*, Rangún, 23-9-16.

5. Bertil Lintner, “Burma misguided peace process needs a fresh start”, *The Irrawaddy*, Rangún, 11-10-16.

6. Nyan Hlaing Lynn, *op. cit.*

7. El embargo sobre las armas impuesto en 1993, a partir de 1997 había sido completado por la prohibición de inversiones estadounidenses.

8. Véase André y Louis Boucaud, “Valse-hésitation des dirigeants birmanes”, *Le Monde diplomatique*, París, noviembre de 2014.

9. Nyan Hlaing Lynn, *op. cit.*

10. Suu Kyi nombró a Kofi Annan a la cabeza de una conciliación para intentar calmar las tensiones en el estado de Arakan, donde los Rohingya sufren graves violaciones a sus derechos. La consejera de Estado fue muy criticada por su reticencia a abordar el conflicto. Véase Warda Mohamed, “Des apatrides nommés Rohingyas”, noviembre de 2014, www.monde-diplomatique.fr

Donkeyman Lee Tjupurrula, *Sin título*, 1989

En ocasión de los Juegos Olímpicos de Sidney, en 2000, Australia celebró con alegría la reconciliación nacional entre aborígenes y descendientes de migrantes europeos. Diecisiete años más tarde, la cuestión del derecho a la tierra y de la deuda colonial envenena nuevamente a la sociedad australiana.

Guerra por las tierras

Australia, contra los aborígenes

por Maxime Lancien*, enviado especial

El 30 de mayo de 2015, cerca de cien militantes aborígenes Nyungar que, desde el mes de marzo, acampaban en la isla Heirisson, en pleno centro de Perth (Australia Occidental), se movilizaron. Banderas de su nación, negra, amarilla y roja, flameaban con el viento. La isla sagrada de Matargarup, como se la denomina en lengua Nyungar, exhibe la estatua de Yagan. En el siglo XIX, la cabeza de este jefe guerrero, considerado un héroe de la resistencia a la colonización, estuvo expuesta en Liverpool como “curiosidad antropológica”. Recién en 1997 fue repatriada. Todos los meses, los organizadores del campamento invitan a los ciudadanos, blancos o negros, a discutir los derechos de los aborígenes, convertidos en “refugiados en su propio país”.

El origen de esta movilización se remonta a noviembre de 2014. El primer ministro liberal de Australia Occidental, Colin Barnett, confirmó en ese momento el próximo cierre de 150 de las 274 comunidades del Estado: “El gobierno federal es culpable de la decisión que recorta los fondos destinados a los servicios esenciales [la electricidad, el agua o la educación]. Ciento quince comunidades cuentan con

cinco residentes en promedio; el costo de su mantenimiento es demasiado elevado”.

Las “comunidades remotas” (*remote communities*) se sitúan en Kimberley, 2.000 kilómetros al norte de Perth; son “barracas” desperdigadas en pleno desierto, donde el Estado asegura lo mínimo. El apego a la tierra que funda su cultura motiva a las familias a permanecer aquí. Según el censo de 2014 (1), en la actualidad se cuentan en Australia 713.600 aborígenes e insulares del estrecho de Torres, o sea el 3% de los 23 millones de habitantes del continente. Un poco más de 50.000 de ellos viven en zonas “alejadas”; 90.000, en zonas muy aisladas. La extraordinaria diversidad de las “tribus” en Australia se mide en el pluralismo lingüístico: 120 lenguas aborígenes se hablan corrientemente sobre 250 reconocidas.

La evacuación de las barracas obligaría a centenares de personas a instalarse en la periferia de las ciudades o a sobrevivir en parques públicos. Esta amenaza despertó la conciencia de los aborígenes, poco movilizados. A pesar de las distancias, la solidaridad entre la gran mayoría de ellos renació, de los que viven sobre la costa este, y de los de Kimberley. Una larga historia de luchas volvió a surgir de pronto, con su

calendario, sus héroes, sus símbolos. Así, la reunión política sobre la isla Heirisson fue organizada a propósito a fines de mayo, durante la “semana de la reconciliación”, que conmemora el 27 de mayo de 1967. Ese día los australianos votaron, en un 90%, por el cómputo de los aborígenes en el censo nacional y, por lo tanto, por su acceso al estatus de verdaderos ciudadanos. Todos recuerdan igualmente el veredicto emitido por la Suprema Corte de Australia en 1992 en el asunto Mabo vs Queensland (Eddie Koiki Mabo, originario del estrecho de Torres, fue el instigador del proceso jurídico). “Los aborígenes y los indígenas del estrecho de Torres tienen una relación especial con la tierra, que existía antes de la colonización y que existe todavía en la actualidad”: el veredicto rechazaba la ficción de la *terra nullius* según la cual Australia colonizada no pertenecía “a nadie” puesto que los aborígenes no cultivaban la tierra.

“De alguna manera hubo una lectura selectiva de la historia”, explica el escribano Bruce Pascoe, que estudió los textos de los primeros exploradores. “Lo que no servía a la buena reputación de los británicos fue descartado –el hecho de que ellos habían invadido una tierra ya ocupada y bien mantenida–. Pretendieron ale-

gar que los aborígenes no habían utilizado la tierra o, en un principio, que ni siquiera estaban allí” (2). Ese mismo año 1992, el primer ministro laborista Paul Keating pronunciaba en Redfern, un barrio popular de Sidney, un discurso que se hizo célebre: “Somos nosotros quienes despojamos a los aborígenes. Tomamos sus tierras tradicionales y quebramos su modo de vida. Generamos un desastre”.

Borrar la historia

El Native Title Act, que siguió al juicio Mabo, autoriza a todas las grandes comunidades a disponer de un Consejo de Tierras, habilitado para llevar al National Native Title Tribunal los litigios territoriales que las oponen al gobierno o a intereses privados. Pero los liberales, bajo la presión de las compañías mineras, enmendaron la ley en varias ocasiones bajo pretexto de que ella acordaba “demasiados derechos”.

Esta protección jurídica de un proletariado que rechaza no sólo la explotación asalariada sino también la de las montañas de bauxita, de hierro, de plata y de oro que encierran sus tierras constituía la base de una posible reconciliación. No alcanza con decir que esta perspectiva se aleja. En noviembre de 2014, paralelamente a una cumbre del G20, el primer ministro federal de entonces Tony Abbott (Partido Liberal), explicaba a su par británico David Cameron hasta qué punto era “difícil imaginar que antes de la llegada de la primera flota, en 1788, hubiera algo más que matorrales”, borrando así un cuarto de siglo de progreso político y cincuenta mil años de historia humana atestiguada por las búsquedas arqueológicas. “Los marinos debieron pensar que acababan de llegar a la Luna; todo debía parecer tan extraño”, agregó (3). A pesar de las protestas que calentaron las redes sociales, Abbott reafirmó su visión de las cosas en marzo de 2015: “No podemos subvencionar siempre una elección de vida que no contribuye plenamente a la sociedad australiana”.

Al mes siguiente, cuatro mil personas bajaron a las calles de las inmediaciones de Flinders Street, la principal estación de Melbourne, para sostener a las comunidades aborígenes. *The Herald Sun*, de propiedad de News Corp, el grupo empresarial del multimillonario Rupert Murdoch, tituló: “El canalla egoísta bloquea la ciudad” (“*Selfish rabble shut city*”, 11 de abril de 2015). En un país dominado por los conservadores, bloquear una estación durante una jornada representaba una afrenta intolerable.

¿Es posible que el cierre de comunidades esté ligado, al menos en parte, a la explotación minera? Elizabeth Vaughan, investigadora en arqueología y fundadora con el sindicalista Clayton Lewis de la asociación de defensa del patrimonio Aboriginal Heritage Action Alliance, está persuadida de ello. “Una de las más grandes apuestas en Australia es la defensa del patrimonio de los aborígenes en el contexto de la explotación minera. Se trata de una verdadera ofensiva contra su cultura y su herencia.” A fines de 2014, recuerda Lewis, el Parlamento de Australia Occidental votó una ley destinada a facilitar la expulsión de las poblaciones redefiniendo la noción de “sitio sagrado”, que protege los lugares de culto. En adelante, la preciosa denominación solo se adjudicaría a los lugares donde se lleva a cabo un oficio religioso –una práctica que... no existe en la cultura aborígen–. Veintitrés sitios fueron eliminados de esta manera, como el de Murujuga, al norte de Perth, conocido por sus petroglifos milenarios. Una feliz coincidencia para Chevron, BHP Billiton y Woodside Petroleum que, hasta

entonces, no podían explotar el gas natural licuado disponible a pocos kilómetros más allá de estas gruesas piedras...

“La ley sobre sitios sagrados fue votada; después vino la que restringe la libertad de manifestar (4). Además está previsto cerrar decenas de comunidades remotas. Es una guerra para acceder a la tierra y explotar sus recursos naturales”, analiza Lewis. Este endurecimiento remite al Queensland de los años 1970. Durante la Guerra Fría, el primer ministro de este estado, Joh Bjelke-Petersen, conjugaba su política de desarrollo con un autoritarismo y un racismo asumidos. El día en que el histórico militante Charles Perkins sugirió rebautizar a los estados australianos con nombres aborígenes, Bjelke-Petersen lo invitó a “salir de su lugar abandonado de la mano de Dios” y lo comparó al *witchetty grub*, una larva gruesa que vive en el desierto y que sirve de alimento a los aborígenes (5).

La explotación de los abusos

Gastronomía de otro tiempo, “elección de vida” inadaptada a la modernidad o sobrecostos presupuestarios: los pretextos presentados para justificar la liquidación progresiva de las comunidades no impactan tanto sobre la opinión como el de la protección a la infancia. En 2011, la comunidad de Oombulgurri, en Kimberley, fue cerrada como consecuencia de violaciones cometidas contra menores. Este suceso trágico, masivamente explotado por los medios y por un sector de la clase política, alimentó la idea de que una pedofilia endémica obligaría al cierre de las comunidades lejanas.

El procedimiento no es nuevo. Entre los comportamientos antisociales atribuidos a los *boongs* o a los *coons* (6), el abuso sexual

respecto de los niños reemplazó desde hace tiempo a la antropofagia. Difundido por el canal ABC el 21 de junio de 2006, un reportaje del programa “Lateline” presentaba a un “delegado de la juventud” que relataba, con la cara oculta (“por razones de seguridad”), el tráfico de esclavos sexuales al cual él asistía en esta región descrita como una “zona de guerra”. El misterioso testigo, Gregory Andrews, trabajaba como funcionario en el Departamento de Asuntos Aborígenes. Aprovechando una ola de pánico moral, el primer ministro conservador de entonces, John Howard, consideró oportuno enviar el ejército a Darwin para “salvar a los niños”. El ruido de botas en el *outback* se percibió como una agresión. La antropóloga canadiense Sylvie Poirier observa que “estas medidas de emergencia fueron calificadas de caballo de Troya por investigadores, según quienes el Estado retomaba por esa vía el control de las comunidades y de las tierras aborígenes” (7).

Desde entonces, esa artimaña es usada regularmente. En 2007, el ministro de Asuntos Aborígenes Malcolm Brough denunciaba “la existencia de bandas pedófilas en proporciones inimaginables” en los Territorios del Norte. El gobierno revocó la vigilancia de sus propias tierras por los aborígenes e impuso un control médico obligatorio a los niños. Para la memoria colectiva este episodio fue el eco de las “generaciones robadas”, de esos 50.000 niños ubicados a la fuerza tanto en orfanatos, “para su bien” (8), entre fines del siglo XIX y principios de los años 1960, como en esos pensionados autóctonos de Canadá que apuntaban a “matar al indio desde su nacimiento”. Aunque nadie niega la existencia de casos de pedofilia ni la prevalencia del

alcoholismo en algunas comunidades remotas, el racismo y los intereses industriales facilitaron la transformación del hecho en rasgo social, como es el caso dentro de las comunidades autóctonas de Canadá o de Estados Unidos.

Sin dejar de preocuparse por los jóvenes, los dirigentes políticos hubieran podido preguntarse por otras “proporciones inimaginables”. En Australia Occidental, en 2013, los jóvenes aborígenes representaban el 6% de la población de 10-17 años, y el 78% de los menores encarcelados. En el plano nacional, corren 26 veces más riesgos de caer en prisión que los blancos (9).

¿Cómo explicar una sobrerrepresentación carcelaria semejante? ¿Los que acampaban en la isla Heirisson pueden esperar una mejoría en sus condiciones de vida? El 18 de junio de 2015, la policía de Perth expulsó *manu militari* a los “refugiados” de Heirisson (10); los militantes prometieron, por su parte, “volver una y otra vez”, lo que hicieron obstinadamente durante todo el año 2016. Robin Chapple, miembro ecologista del Consejo Legislativo en Perth, propuso en mayo de 2016 un proyecto de ley que apunta a impedir “la evicción forzada de las comunidades”. Después de un año de consultas, el gobierno de Australia Occidental detalló en julio de 2016 su política respecto de las comunidades remotas (11): diez de entre ellas debían ser identificadas desde esa fecha hasta principios del año 2017 y transformadas en ciudades; otras 110, aproximadamente, ya no gozan de ayuda gubernamental.

En enero de 1988, doscientos años después de la fundación de Sidney, el militante Burnum Burnum plantaba simbólicamente una bandera aborígen en Douvres:

“Yo, Burnum Burnum, noble de la antigua Australia, tomo aquí posesión de Inglaterra en nombre del pueblo aborígen. [...] Hemos venido a aportarles los buenos modales, el refinamiento y la posibilidad de un Koompatoo, un nuevo comienzo. Para los más inteligentes de ustedes, aportamos la lengua compleja de los Pitjnatjatjara; les enseñaremos cómo establecer una relación espiritual con la tierra y cómo encontrar alimento en el matorral”. Esta inversión simbólica espera siempre su traducción política. ■

1. “The health and welfare of Australia’s Aboriginal and Torres Strait Islander peoples: 2015”, Australian Institute of Health and Welfare, www.aihw.gov.au
2. Bruce Pascoe, *Dark Emu, Black Seeds: Agriculture or Accident?*, Magabala Books, Broome, 2014.
3. “Tony Abbott says Australia ‘nothing but bush’ before British arrived – video”, 14-11-14, www.theguardian.com
4. “Criminal Code Amendment (Prevention of Lawful Activity) Bill 2015”, www.parliament.wa.gov.au
5. *The Sydney Morning Herald*, 6-4-1983.
6. Términos racistas en inglés australiano.
7. Sylvie Poirier, “La différence aborigène et la citoyenneté australienne. Une conciliation impossible?”, *Anthropologie et Sociétés*, Vol. 33, N° 2, Quebec, 2009.
8. Según el informe oficial “Bringing them home”, repuesto en 1997.
9. “A brighter tomorrow. Keeping Indigenous kids in the community and out of detention in Australia”, Amnesty International, Sidney, 2015.
10. Brendan Foster, “Police remove Heirisson Island Aboriginal protesters in dawn raid”, 18-6-15, WAToday.com.au
11. “Resilient families, strong communities: A roadmap for regional and remote Aboriginal communities”, Regional Services Reform Unit, Gouvernement de l’Australie-Occidentale, Perth, julio de 2016.

*Periodista.

Traducción: Florencia Giménez Zapiola



LUNES A VIERNES DE 6 A 9 HS.

CABALLERO DE DIA

CON **ROBERTO CABALLERO**

encontranos en

descargá la app



amdelplata.com



Los deberes para con el mundo que su “destino manifiesto” le impone a Estados Unidos no tienen fin. Al punto que establece multas astronómicas a las empresas extranjeras que no se ajustan a sus normas nacionales, facilitando así la hegemonía comercial de sus propias empresas de alcance global.

La extraterritorialidad del derecho estadounidense

La ofensiva legal del imperio

por Jean-Michel Quatrepoint*



Juan Soto (www.sotografico.blogspot.com)

“Estamos frente a un muro de legislación estadounidense extremadamente complejo, cuya intención precisa es utilizar el derecho con fines de *imperium* económico y político, con la idea de obtener ventajas económicas y estratégicas”. El 5 de octubre de 2016, el diputado Pierre Lellouche del Partido Los Republicanos habló sin pelos en la lengua frente a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Finanzas de la Asamblea Nacional, en París. Allí presentó el informe de la misión sobre la extraterritorialidad del derecho estadounidense (1). Un informe cuya lectura “produce escalofríos”, según las palabras del diputado socialista Christophe Premat.

Fueron necesarias las dos colosales multas impuestas en 2014 a BNP Paribas (8.900 millones de dólares) y a Alstom (772 millones de dólares) para que dirigentes y medios de comunicación franceses tomaran conciencia de la intención de Estados Unidos de imponer su modelo jurídico y sus leyes a los demás países, aunque fuesen sus aliados más cercanos.

Intenciones hegemónicas

Todo comenzó en 1977 con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sobre la lucha contra la corrupción. Aplicable a las empresas nacionales, se extendió en 1998 a las empresas extranjeras. Segundo eje: una batería de leyes penalizaba el comercio con los Estados sometidos a embargo

estadounidense (Irán, Cuba, Libia, Sudán...). Más tarde, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se trató de luchar contra el blanqueo de dinero de terroristas o narcotraficantes. La Patriot Act otorgó amplias facultades a las agencias estadounidenses para acceder a datos informáticos, especialmente a través de la National Security Agency (NSA). En 2010, la Ley Dodd-Frank confirió a la Securities and Exchange Commission (SEC) la facultad de reprimir toda conducta que, en Estados Unidos, contribuyera de manera significativa a la comisión de infracciones, aun cuando la transacción financiera se hubiera realizado fuera de su territorio e involucrara sólo a actores extranjeros. En 2013, la Foreign Account Tax Compliance

Act (FATCA) otorgó al fisco facultades extraterritoriales. Los bancos extranjeros estaban obligados a convertirse en sus agentes y a brindar toda información sobre cuentas y activos de ciudadanos estadounidenses, residentes fiscales estadounidenses y binacionales.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2016, la Justice Against Sponsors for Terrorism Act (JASTA), votada por el Congreso, que se opuso al veto del presidente Barack Obama, permitió a toda víctima del terrorismo en Estados Unidos accionar contra un Estado ligado directa o indirectamente a actos de esa naturaleza perpetrados en su territorio. Esta ley apuntaba *a priori* a Arabia Saudita, por no haber controlado a sus residentes en el extranjero que cometieron los atentados del 11 de Septiembre; pero corre el riesgo de que se accione contra cualquier Estado, considerado responsable, incluso indirectamente, de los actos de sus ciudadanos. Un texto contrario al principio de soberanía de las naciones, en la medida en que confunde responsabilidad individual y responsabilidad colectiva.

Detrás de este arsenal jurídico pacientemente construido se vislumbra una intención hegemónica. En Estados Unidos, muchos se consideran un pueblo elegido encargado de difundir el buen mensaje y hacer el bien. Se atribuyen una competencia universal, en nombre de una visión universal. En consecuencia, los instrumentos de esta ideología, la moneda (el dólar), el idioma (el inglés), el derecho (el *common law*, por oposición al derecho escrito continental europeo) (2), están destinados a imponerse a todos.

La evolución de las tecnologías y la financiarización de la economía brindan a Washington los medios técnicos para llevar a cabo esta ofensiva ideológica. “Basta que una operación cuestionada se haya realizado en dólares o que un intercambio de correos electrónicos haya pasado por un servidor estadounidense para que la jurisdicción estadounidense resulte competente” (3), escribe el Dr. Paul Albert Iweins, decano y ex presidente del Consejo Nacional de Colegios de Abogados.

Esta “política jurídica exterior” moviliza medios considerables. Todo comienza con los servicios de inteligencia. Las diferentes agencias –desde la Central Intelligence Agency (CIA) hasta la NSA, pasando por el Federal Bureau of Investigation (FBI) y sus agentes en las embajadas– envían información utilizando, si es necesario, fuentes remuneradas, incluso organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta información es tratada por diversos organismos: el Departamento de Justicia (DOJ), el Tesoro, la SEC, la Reserva Federal y la Office of Foreign Asset Control (OFAC), que supervisa la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses. A lo que puede agregarse la acción de fiscales locales, incluso de estados, como el de Nueva York, que suele inmiscuirse en los procedimientos contra los grandes grupos extranjeros.

El DOJ y los demás organismos se comportan como fiscales, con un objetivo: lograr que el infractor “se declare culpable”. Cuanto más tarde este último en confesar y aceptar la sentencia, más pesada será ésta. Lo que explica en parte la diferencia de tratamiento en materia de corrupción entre las empresas estadounidenses y las demás. Acostumbradas a procedimientos de este tipo, las primeras negocian rápidamente, mientras que las segundas, como Siemens y Alstom, se demoran en tomar conciencia de la dimensión del peligro.

También intervienen consideraciones estratégicas. En un caso de corrupción en Indonesia, Alstom estaba asocia-

da a una japonesa, Marubeni. Ésta llegó a un acuerdo en 2012 con el DOJ y sólo fue condenada a pagar 88 millones de dólares de multa. La factura para Alstom, negociada en 2014, será nueve veces más alta. Marubeni no interesaba a los pesos pesados estadounidenses del sector, mientras que Alstom ya era un objetivo para General Electric.

Otro ejemplo: Alcatel. Este grupo francés de telecomunicaciones era mal visto del otro lado del Atlántico. Había equipado la red iraquí en tiempos de Saddam Hussein y disponía de tecnologías superiores a las de sus competidores estadounidenses, especialmente Lucent. En 2005, el DOJ inició una causa por corrupción que involucraba a Alcatel en Costa Rica y Honduras. Cinco años más tarde, el grupo fue condenado a pagar 137 millones de dólares de multa. Mientras tanto, debió fusionarse con Lucent, que sería condenada por actos de la misma naturaleza cometidos en China a pagar una multa de... 2,5 millones de dólares. Tras la fusión, a fines de 2006, Lucent asumiría progresivamente el control de Alcatel. Un escenario que anticipaba lo que sucedió con la rama de energía de Alstom (las tres cuartas partes de la actividad del grupo), adquirida por General Electric en 2015. Estas multas debilitan considerablemente a las empresas involucradas. Y no únicamente con vistas a hacer prevalecer el derecho.

Así como la desregulación financiera permitió al mundo de las finanzas, una de cuyas capitales es Wall Street, crecer de manera exponencial desde hace un cuarto de siglo, el *common law* explica el extraordinario desarrollo de las profesiones jurídicas del otro lado del Atlántico. Se necesita mucho dinero para mantener a más de un millón de abogados –uno cada trescientos habitantes–. Imponiendo sus leyes a los demás países, Estados Unidos procede pues a lo que algunos califican de extorsión.

En pocos años, las empresas europeas pagaron alrededor de 25.000 millones de dólares a las diversas administraciones estadounidenses: más de 8.000 millones en concepto de la FCPA y 16.000 millones por incumplimiento de las sanciones económicas. Sobre ese total, la factura para Francia supera los ¡12.000 millones de dólares! Lo que indudablemente repercutió en la balanza de las transacciones corrientes. Si se suman las multas pagadas en concepto de otros procedimientos, especialmente para los bancos, el total para los europeos supera ampliamente los 40.000 millones de dólares. Y esta cifra no tiene en cuenta las futuras multas para Volkswagen, acusada de haber cometido fraude en las emisiones tóxicas de sus motores diesel en Estados Unidos –la factura ascendería a decenas de miles de millones de dólares–, ni para el Deutsche Bank, debido a su accionar en las *subprimes* –una suma que debería situarse entre los 5.000 y los 10.000 millones de dólares–.

¿Adónde va ese dinero? Directamente a las cajas de aquellos que llevaron a cabo la investigación, impulsaron los procedimientos y celebraron los acuerdos. Se trata de una suerte de reparto del botín entre el DOJ, la SEC, la OFAC, la FED, el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York y el fiscal de Nueva York. Finalmente, en los procedimientos FATCA, el fisco recupera directamente las sumas reclamadas a los estadounidenses residentes en el extranjero. Este reparto explica la motivación de los equipos, interesados en multiplicar los procedimientos y recuperar el maná que engrosará el presupuesto de su agencia o su departamento, permitiéndoles cobrar buenos salarios y contratar colaboradores.

En cuanto a los flujos financieros generados por estos procedimientos, alimentan la esfera jurídica y los estudios de abogados. No sólo deben pagarse sus honorarios durante toda la instrucción de la causa, sino que, una vez pagada la multa, la cuestión no termina para las empresas involucradas. Generalmente deben recibir en su sede social a un supervisor encargado de controlar durante un período de tres a cinco años que actúen de conformidad con las directivas impuestas en el marco del

La agresividad jurídica estadounidense paraliza cada vez más a las empresas y los bancos europeos.

acuerdo. Ese supervisor no sólo es remunerado por la empresa, sino que lo asisten decenas de colaboradores, también a cargo de sus anfitriones. Como si esto fuera poco, explica el Dr. Iweins, “se orienta al ‘pecador’ hacia cuatro o cinco estudios muy especializados de Washington, dispuestos a seguir su actividad durante los años de supervisión”, y sobre todo a hacer que cumpla las leyes estadounidenses. Es necesario entonces multiplicar el monto de la multa por dos, incluso por tres, para tener una idea del costo total.

El hecho de declararse culpable y la transacción no eliminan formalmente los riesgos de acciones penales individuales, que quedan suspendidas... a condición de que se respeten estrictamente los términos del acuerdo, especialmente las reglas de confidencialidad. ¿Acaso Patrick Kron niega que la investigación del DOJ haya tenido alguna influencia en su decisión de vender Alstom Power a General Electric? Simplemente no puede decirlo. Por eso, durante mucho tiempo, las empresas involucradas intentaron resolver el problema por su cuenta, discretamente, sin movilizar a sus respectivos gobiernos y mucho menos a la opinión pública.

Efectivamente, tenían algo que reprocharse, y la legislación europea, especialmente francesa, no se adaptaba a este tipo de delito. Aquí es donde la ofensiva estadounidense fue particularmente eficaz: “¿Ustedes no actúan? Nosotros actuamos”. Actualmente, Europa está abriendo los ojos. En Francia, se entendió finalmente que había que contar con un verdadero dispositivo anticorrupción y no dudar en accionar contra las empresas culpables. Al menos por dos razones. Por un lado, el inicio de acciones por parte de la justicia francesa permite invocar el principio del *non bis in idem* (no juzgar dos veces por los mismos hechos). Por otro lado, la multa se paga al Tesoro francés. El reciente proyecto de la Ley Sapin 2, “sobre la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica”, va en ese sentido.

Una contraofensiva nada fácil

La agresividad jurídica estadounidense paraliza cada vez más a las empresas y los bancos europeos, que revisan sus redes comerciales para adaptarlas a las

normas anglosajonas. Privilegian a los grandes estudios de auditores estadounidenses, sin reparar que estos últimos están obligados a comunicar a sus autoridades toda operación contraria al interés nacional que podrían observar en ellos. Dudan en trabajar con países en la mira de Washington, especialmente Irán. Incluso tras el acuerdo en materia nuclear celebrado bajo la presidencia de Obama, en 2015, los bancos franceses no quieren correr el riesgo de otorgar créditos en Irán. Así como son reticentes a financiar inversiones en Rusia (Airbus debió dirigirse a bancos chinos). O las empresas encuentran otros financiamientos que no sean en dólares, lo que es prácticamente imposible para las pequeñas y medianas empresas (PYME), o renuncian a su proyecto. Tal es el objetivo buscado, con el fin de reservarse el mercado iraní. El 30 de septiembre de 2016, el grupo estadounidense Xerox envió a sus clientes y proveedores franceses un correo solicitándoles que no hicieran negocios con Irán... si querían mantener buenas relaciones con Xerox.

La contraofensiva no es nada fácil. Primero, porque algunas de las empresas involucradas prefieren no enfrentar a Estados Unidos. Además, en el propio seno de la tecnoestructura francesa y sobre todo europea, no falta buena gente convencida de la superioridad del *common law* y de la necesidad de que evolucione el derecho europeo. Finalmente, Francia por sí sola no puede aplicar medidas de represalia eficaces. Europa debe movilizarse. Un camino comienza a trazarse en Bruselas: cuestionar el comportamiento de las grandes multinacionales, comenzando por Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (Gafam).

Se presentan tres ángulos de ataque. El primero sería señalar la responsabilidad de los grandes bancos de negocios estadounidenses en cierto número de casos. Así, Goldman Sachs es responsable de haber disimulado el estado real de las finanzas de Grecia al momento de su adhesión al euro; si algo semejante se hubiera producido en Estados Unidos, el banco extranjero culpable habría sido sin duda demandado por las autoridades locales. El segundo es arremeter contra los mecanismos de optimización fiscal de las multinacionales. Starbucks en Reino Unido, Google en Francia, Apple en Irlanda: los procedimientos se encadenan. Las sumas en juego representan decenas de miles de millones de euros que dejan de ganar los países europeos. Tercer ángulo: los procedimientos antimonopólicos contra los gigantes de la web, en posición cuasi monopólica.

Pero para que estas acciones desemboquen en una nueva relación de fuerzas, sería necesario además que los numerosos lobbies al servicio del *imperium* estadounidense no las bloqueen. Ya que, también en materia de lobby, Estados Unidos es experto. ■

1. “Informe presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Finanzas como conclusión de los trabajos de una misión informativa creada el 3 de febrero de 2016 sobre la extraterritorialidad de la legislación estadounidense”, Asamblea Nacional, París, 5-10-16.
2. Véase Cyril Laucci, “Quand le droit anglo-saxon s’impose”, *Le Monde diplomatique*, París, abril de 2014.
3. *Le Monde*, París, 6-11-15.

*Periodista. Autor, entre otras obras, de *Alstom, scandale d’État*, Fayard, París, 2015. Traducción: Gustavo Recalde

ARMAS EN DIRECCIÓN OPUESTA

Terroristas de distinta clase

por Noam Chomsky*

Las terroríficas atrocidades del 11 de Septiembre son algo del todo nuevo en el mundo, no por su escala ni condición, sino por el objetivo que perseguían. Para Estados Unidos, ésta es la primera vez desde la guerra de 1812, que el territorio nacional se ha visto atacado o siquiera amenazado. Muchos analistas han sacado a relucir la analogía con Pearl Harbor, pero esa interpretación puede inducir a error. El 7 de diciembre de 1941 fueron atacadas bases militares en dos colonias de Estados Unidos, no en el territorio nacional, que nunca estuvo amenazado. Estados Unidos prefería llamar “territorio” a Hawai pero, en realidad, era una colonia. Durante cientos de años, Estados Unidos aniquiló a la población indígena (millones de personas), conquistó la mitad de México (de hecho, territorios de indígenas, pero ése es otro asunto), intervino violentamente en la región circundante, conquistó Hawai y Filipinas y, particularmente, en el último medio siglo, extendió el uso de la fuerza por gran parte del mundo. El número de víctimas es colosal. Por primera vez, las armas han sido apuntadas en dirección contraria. Ése es el tremendo cambio.

[...]

Llamarla “guerra contra el terrorismo” es simple propaganda, a menos que la “guerra” apunte de verdad al terrorismo. Y, evidentemente, tal cosa no está contemplada porque las potencias occidentales nunca se someterían a sus propias definiciones del término, como figura en el Código de Estados Unidos o en los manuales de las Fuerzas Armadas. Si lo hicieran, se revelaría en el acto que Estados Unidos es un conspicuo Estado terrorista, como lo son sus socios.

Querría citar al politólogo Michael Stohl: “Debemos reconocer que por convencionalismo –y debe recalarse que sólo por convencionalismo–, el uso del enorme poderío y la amenaza del uso de la fuerza se consideran como diplomacia coercitiva y no como una forma de terrorismo” aunque, en general, supone “la amenaza y, a veces, el uso de la violencia para lo que se denominarían propósitos terroristas, si no fueran las grandes potencias quienes –según el significado literal del término– siguieran la mismísima táctica”. ■

*Linguista, filósofo y activista político estadounidense. Entre sus numerosas obras se cuenta *El nuevo orden mundial (y el viejo)*, Crítica, Barcelona, 1997. Este texto se extrajo de sus declaraciones al diario italiano *Il Manifesto*, del 19-11-01, recogidas en el libro *11/09/2001*, RBA, Barcelona, 2001. Traducción: Carmen Aguilar

Las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de la ONU a menudo suscitan fuertes críticas. Ocurrió en Ruanda en 1994, cuando los cascos azules no pudieron oponerse al genocidio de los tutsis, y al año siguiente en la ex Yugoslavia con las masacres de civiles en Srebrenica. Más recientemente, soldados de la ONU fueron acusados de abusos sexuales en República Centroafricana. ¿Cómo reformar las OMP, que a pesar de todo siguen siendo indispensables?

La legitimidad de la ONU puesta a prueba

¿La reforma imposible?

por Sandra Szurek*



Protesta contra la Minustah (Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití), Puerto Príncipe, 28-7-11 (Swoan Parker/Reuters)

Para muchos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se define por las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). En el presente involucran a más de 128.000 civiles y funcionarios de uniforme (policías, militares, gendarmes) en 39 misiones en 4 continentes. La tarea resulta ser tan amplia como ingrata. Las críticas son acerbadas y las infracciones, en particular cuando se trata de abusos sexuales o de corrupción, con justa razón suscitan escándalos (1).

Mientras que entre 1948 y 1988 la ONU sólo había realizado quince OMP, éstas aumentaron de forma espectacular cuando finalizó el enfrentamiento Este-Oeste. Entre 1988 y 2015, se pusieron en marcha cincuenta y seis operaciones, con éxitos variables. El informe Brahimi de 2000 (2) cosechaba sus lecciones.

Preconizaba mandatos más claros, una mejor adecuación entre los medios desplegados –muy estandarizados– y el terreno involucrado, así como una coordinación más estrecha entre la sede de la ONU en Nueva York y las fuerzas desplegadas, para una mayor eficacia.

A fines de 2014, sin embargo, se encendió una nueva alarma: el secretario general Ban Ki-moon encargaba a un grupo independiente de alto nivel que procediera a su examen en profundidad. Entregado el 16 de junio de 2015, el informe, conocido bajo el acrónimo inglés “Hippo” (High-Level Independent Panel on Peace Operations), plantea una conclusión sin apelaciones: “De Oriente a Occidente y del Sur al Norte, los gobiernos y las organizaciones locales hicieron saber claramente al grupo que era imperativo un cambio, considerando que estaban en juego ni

más ni menos que ‘la credibilidad, la legitimidad y la validez de la ONU en los años venideros’” (3).

Nuevos conflictos

Para comprender este diagnóstico alarmante se impone hacer un poco de historia. No se encontrará ningún artículo consagrado a los cascos azules en la Carta de las Naciones Unidas adoptada en 1945. Éstos son el fruto de una práctica que se remonta a 1948, con el envío de una misión de observación a Palestina, pero sobre todo en 1956, con el despliegue de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) tras la crisis de Suez. Desde entonces, la cantidad de las OMP varió según el grado de entendimiento que podía existir entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia). El capí-

tulo VI está consagrado al arreglo pacífico de los diferendos; el capítulo VII contiene principios relativos a la puesta a disposición de la ONU de Fuerzas Armadas y a la constitución de un Comité de Estado Mayor, principios que quedaron en el tintero. Entre los dos, las OMP constituyeron una suerte de capítulo VI bis, dominado por tres principios fundamentales: el consentimiento del Estado huésped; la imparcialidad, y el no uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa de los cascos azules.

Hasta el fin de la Guerra Fría, las OMP fueron esencialmente fuerzas de interposición. Debían hacer respetar un alto el fuego, servir de “tapón” entre Estados enemigos y garantizar el respeto de una frontera. La más antigua, el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) en Palestina, moviliza a 387 personas en el terreno desde

1948. Creado en 1949, el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP) aún supervisa a 110 personas. Desde 1964, la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) sigue contando con 1.075 personas. Los cascos azules hacen aquí las veces de centinelas solitarios en diferendos congelados o fosilizados.

A partir de los años noventa, los conflictos internos y las guerras asimétricas reemplazaron los conflictos entre Estados, al tiempo que el derrumbe del bloque del Este permitía encontrar un consenso entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Establecidas por lo general sobre la base de un acuerdo de paz cuyo respeto por todas las partes debían garantizar, las OMP tuvieron además el mandato de contribuir al restablecimiento de una “paz duradera” en Estados fragilizados por la guerra civil, poniendo en marcha diferentes facetas: humanitaria, derechos humanos, seguridad, desarme, desmovilización, etcétera.

La longitud de las resoluciones, que pasó de una o dos páginas a una quincena, ilustra aquello que los anglosajones llaman una acción “árbol de Navidad” (4). Mandatos que sirven para todo, compartimentados, sin prioridades establecidas entre los objetivos, extendieron las misiones de manera excesiva. Es conveniente tomar nota de las expectativas a veces desmesuradas de los Estados y de la preocupación permanente de la organización por impedir la reanudación de los conflictos, que malogran los involucramientos consentidos en favor de la paz.

Las acciones llevadas a cabo en Burundi en los años 2000 ilustran con claridad los esfuerzos aparentemente interminables que deben desplegar las Naciones Unidas con el objeto de restaurar el Estado y el derecho, que van de la mano. Luego de los Acuerdos de Paz de Arusha del 28 de agosto de 2000, que ponían un término a violencias que produjeron varios centenares de miles de víctimas, se instituyeron la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB) y después, en 2006, una Oficina Integrada (BINUB). El plan estratégico adoptado por la Comisión de Consolidación de la Paz, creada para garantizar un acompañamiento a largo plazo de los Estados más débiles, completó ese dispositivo en 2007. La acción en Burundi podía entonces ser considerada un éxito, hasta 2015, cuando otra vez aparecieron tensiones graves tras el anuncio de la candidatura del presidente Pierre Nkurunziza para un tercer mandato. El Consejo de Seguridad, por lo tanto, autorizó el despliegue de 228 policías de las Naciones Unidas con el mandato de observar y rendir cuentas de la situación securitaria y las violaciones de los derechos humanos.

Pero ¿cómo pensar las OMP cuando no existe en la práctica una paz para mantener? Algunos conflictos ponen en juego una multiplicidad de grupos armados y provocan una reacción de la ONU sin un acuerdo claro del Estado huésped, mientras que los apoyos políticos regionales e internacionales se muestran vacilantes (fue lo que ocurrió en Burundi en 2016). Estas dificultades se vuelven a presentar en Malí, donde el Norte padece una inseguridad permanente y más de diez mil personas son desplegadas en el seno de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).

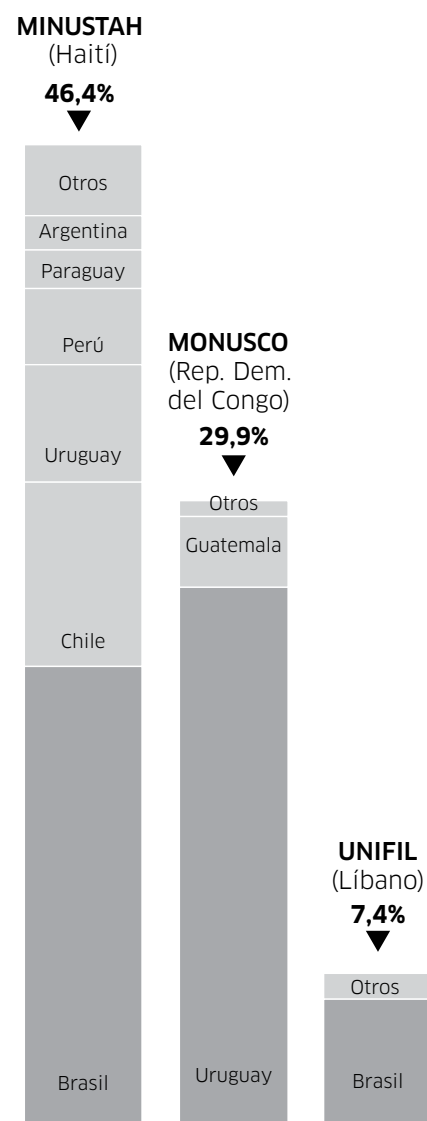
Un gran número de misiones se desarrollan en un contexto peligroso para la seguridad tanto de las tropas (los cascos azules son tomados como blancos, como

en Malí en junio de 2016) como de las poblaciones. En 2000, el informe de Lakhdar Brahimi subrayaba que los cascos azules “debían ser capaces de defenderse a sí mismos, de defender a los otros componentes de la misión y de defender el mandato de esta misión”. La protección de las poblaciones civiles fue erigida como principio fundamental. En consecuencia, el mandato de ciertas fuerzas, colocadas cada vez con mayor frecuencia bajo el capítulo VII, incluyó expresamente la posibilidad para los cascos azules de utilizar medios “robustos”, en otros términos de hacer uso de la fuerza en legítima defensa no ya para su propia seguridad, como en el pasado, sino para la de poblaciones amenazadas por un peligro grave e inminente (5). Es lo que ocurre desde 2011 en Sudán del Sur, pero también en República Democrática del Congo (RDC), donde están estacionados los 25.000 integrantes de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización de la RDC (ONUSCO).

Marca de ambivalencia

En unos sesenta años, pues, se pasó de operaciones compuestas de fuerzas estáticas de algunos centenares de hombres posicionados como vigías a operaciones multidimensionales que implican a miles de miembros encargados de tareas que pueden llegar hasta la imposición de la paz y el recurso a la fuerza. La experiencia les permitió a las Naciones Unidas formalizar el marco operativo y conceptual de las OMP con lo que se llama la “Doctrina Capstone” (2008) (6). Se realizaron así progresos consentidos

Efectivos militares latinoamericanos desplegados en Operaciones de Paz (en porcentaje, 2015)



Fuente: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, Resdal, 2016.

siderables en materia de formación de las tropas y de afirmación de una “tolerancia cero” para los abusos sexuales, que sin embargo todavía se deploran. La búsqueda de un mínimo de interoperabilidad y el posicionamiento de ciertos medios permiten un establecimiento más rápido de una OMP tras la decisión del Consejo de Seguridad. En la sede de las Naciones Unidas se crearon estructuras como el Departamento de las OMP (DOMP) y el Departamento de Apoyo a las Misiones (DAM), para enmarcarlas mejor (7).

Algunos conflictos ponen en juego una multiplicidad de grupos armados y provocan una reacción de la ONU sin un acuerdo claro del Estado huésped.

¿Significan estos esfuerzos que las Naciones Unidas emprendieron la tarea de dotarse de un ejército internacional, así fuera de un género inédito? La compatibilidad de esas evoluciones con los objetivos de la Carta, que algunos consideran como exclusivamente reservada al arreglo pacífico de los diferendos, puede suscitar interrogantes. El informe Hippo parece implícitamente hacerse eco de ellos. Apela a cuatro reformas de fondo. En primer lugar, poner el acento en la prevención y el arreglo político de los conflictos. Una vez más, es la política la que debe determinar la concepción y la ejecución de las operaciones de paz. En otras palabras, la OMP no debe ser un paliativo a la ausencia de acuerdo o, por lo menos, de voluntad de paz. En segundo lugar, las OMP, encargadas de acompañar y facilitar la paz, deben ganar en eficacia estando mejor adaptadas al contexto local. Esto significa terminar con las operaciones estandarizadas privilegiando un recurso graduado en diferentes medios en función de la situación, sobre la base de un diálogo con las poblaciones locales. La tercera orientación preconiza establecer asociaciones para la paz más numerosas, particularmente con organizaciones regionales como la Unión Africana, cuyo continente recibe el 70% de las OMP. Por último, es preciso enmarcar mejor el recurso a la fuerza, lo que supone que los Estados que colaboran con tropas participen en la reflexión en el marco de una “cooperación triangular” con el Consejo de Seguridad y el secretario general.

El mantenimiento de la paz, más que ningún otro de sus campos de acción, lleva la marca de la doble ambivalencia de la organización. Ésta agrupa Estados soberanos llamados a promover los valores humanistas que todos los pueblos proclamaron solemnemente en 1945 y que supuestamente comparten. Pero si bien está por completo consagrada a la paz, valor supremo que condiciona el resto de sus acciones, su Carta también prevé la posibilidad de que el Consejo de Seguridad pueda “decidir el recurso a la fuerza” (artículo 44). La supervivencia de algunos pueblos tiene ese costo. El nuevo secretario general, António Guterres, elegido en octubre de 2016, ¿sabrá finalmente convertirse en

el portavoz de la fórmula que abre la Carta, “Nosotros, pueblos de las Naciones Unidas”, y convencer a los Estados miembros de que el camino de la paz pasa primero por la afirmación de una voluntad política sin fisuras de actuar y de no resignarse a las violencias contra los pueblos en los cuatro puntos cardinales del planeta? ■

1. Ronald Hatto, *Le Maintien de la paix. L'ONU en action*, Armand Colin, Paris, 2015.
2. “Informe del Grupo sobre las Operaciones de la Paz de las Naciones Unidas”, doc. A/55/305-S/2000/809, ONU, Nueva York, 21-8-00.
3. “Aunar nuestras ventajas en pro de la paz – política, alianzas y personas”, Informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz, doc. A/70/95-S/2015/446, ONU, 17-6-15.
4. Arthur Boutellis y Alexandra Novosseloff, “Le Conseil de sécurité et l'évolution des opérations de maintien de la paix”, en Alexandra Novosseloff (dir.), *Le Conseil de sécurité des Nations unies entre impuissance et toute puissance*, CNRS Éditions, col. “Biblis”, Paris, 2016.
5. Namie Di Razza, “Le Conseil de sécurité des Nations unies et la ‘protection des civils’ : un nouveau cadre d'action pour les opérations de maintien de la paix?”, en Alexandra Novosseloff, *op. cit.*
6. “Operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Principios y directrices”, ONU, Departamento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Departamento de Apoyo a las Misiones, Nueva York, 2008.
7. Alexandra Novosseloff, “La professionalisation du maintien de la paix des Nations unies ou le travail de Sisyphe”, *Peacekeeping Operations Review*, Nueva York, marzo de 2016.

*Profesora emérita en la Universidad París-Nanterre, vicepresidente de la Asociación Francesa para las Naciones Unidas (AFNU). Traducción: Víctor Goldstein

Contribuciones variables

Al 31 de agosto de 2016, 123 países contribuían en el suministro de fuerzas policiales o militares a las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero el esfuerzo que hacen los Estados sigue siendo muy desigual. Dieciocho de ellos, entre los cuales se encuentran Guinea-Bissau, Jamaica y Montenegro, ponen menos de cinco personas a disposición de la ONU. A la inversa, los más grandes contribuyentes en tropas le suministran más de 5.000 hombres y mujeres. Se trata de Bangladesh, Etiopía, India, Nepal, Pakistán y Ruanda. Algunos países pueden encontrar allí una manera de mantener en otros terrenos un ejército importante cuyos gastos son reembolsados por la ONU (1). Un motivo suficiente para suscitar vocaciones...

La desigualdad también reina entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: con más de 2.000 personas, China se encuentra hoy ampliamente en punta, seguida de lejos por Francia (867), Reino Unido (337), Rusia (98) y Estados Unidos (68). El presupuesto 2015-2016 de las OMP era de 8.270 millones de dólares, lo que no corresponde más que al 0,5% de los gastos militares mundiales, estimados en 1.747 billones de dólares en 2013. Una miseria... con la cual se puede estimar que las Naciones Unidas hacen milagros, en primer lugar impidiendo que las situaciones degeneren. ■

1. www.un.org/fr/peacekeeping

El 1 de enero de 1999, Suecia se convertía en el primer país en penalizar la compra de servicios sexuales en nombre de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, mientras que otros, como Alemania en 2001, elegían legalizar los prostíbulos. Quince años de distancia permiten observar los efectos de estos dos enfoques opuestos sobre la prostitución.

El debate sobre el trabajo sexual

¿Legalizar o prohibir la prostitución?

por William Irigoyen*, enviado especial



Gustavo Cimadoro (cima-cima-doro.tumblr.com)

La luz rasante del atardecer inunda la localidad de Tyreso, uno de los veintiséis municipios de la provincia de Estocolmo. Sentada en la terraza de su edificio, Pye Jakobsson disfruta un momento más de la clemencia del cielo: “Ellos ganaron y yo perdí. Voy a dejar este país a fin de mes para instalarme en alguna parte del sur de Europa, donde la legislación es diferente”, anuncia con calma esta mujer de 48 años, vocera de “Rose Alliance”. Esta organización, fundada en Suecia en 2003, tiene la misión de defender al conjunto de las “trabajadoras sexuales”, expresión que Jakobsson justifica del siguiente modo: “Hay trabajo desde el momento en que hay una actividad remunerada”. Seguir con la prostitución en Suecia, según ella, conduciría a exponerse aun más a los peligros de la clandestinidad.

Reinserción y clandestinidad

En 1998, los diputados decidieron cambiar de enfoque, en nombre de los prin-

cipios que florecieron en los años 70 y que siempre fueron la base de la sociedad sueca. En primer lugar figura la igualdad hombre-mujer, noción incompatible, estimaron los legisladores, con la práctica de relaciones remuneradas. El dinero impone una obligación; los consumidores que pagan por un servicio sexual –generalmente hombres– someten a los vendedores –generalmente mujeres–. Tomando nota de este desequilibrio, el Parlamento decidió sancionar una ley que obligara a los clientes a cambiar sus comportamientos duraderamente y que llevara *de facto* a las prostitutas hacia otras actividades.

La ley se inserta en un arsenal muy represivo. Por ejemplo, un propietario privado o un hotelero no pueden alquilar su bien a prostitutas si no quieren verse acusados de proxenetismo. Según la vocera de “Rose Alliance”, el dispositivo que entró en vigor en enero de 1999, es de clara inspiración luterana: “Se sigue pensando que las trabajadoras sexuales son unas traidoras que alejan a los maridos de sus esposas”.

Estas palabras, que hacen eco a la crítica del abolicionismo (1), interpelan directamente a los poderes públicos a los que la abogada canadiense de origen sueco Gunilla Ekberg se asoció en el momento de la elaboración de la ley. Cuando se invoca la religión, ella responde categóricamente: “No tiene nada que ver con este asunto. En cambio, sí tenemos principios basados en la ética. Si queremos vivir en una sociedad en la que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, entonces hay que erradicar la violencia que los primeros infligen a las segundas.”

Esta especialista de la prostitución y del tráfico de personas explica que en treinta y cinco años de actividad, nunca conoció a una mujer que se dedicara voluntariamente y con placer a las relaciones sexuales remuneradas: “Esta actividad no se elige. Hay una historia de violencia, de drogas, de pobreza detrás del recorrido de cada prostituta. La industria del sexo genera opresión. En Suecia, país de tradición socialdemócrata, sabemos lo que esa palabra signifi-

fica”. En su opinión, este es el motivo por el cual el país decidió modificar la ley y abordar esta cuestión desde un ángulo político: “¿Es coherente tener hoy en Europa personas de izquierda que defienden los derechos de los trabajadores mientras adoptan posiciones neoliberales cuando se trata de legislar sobre la prostitución?”.

Según un estudio de 2014, el 72% de los suecos (85% mujeres y 60% hombres) está a favor de la prohibición de la compra de servicios sexuales (2). Pero, ¿esto significa que la ley probó su eficacia? La prostitución sigue siendo un fenómeno difícil de abordar. Según la Coordinación Nacional de Lucha contra el Tráfico de Personas en Suecia, la prostitución callejera sólo implicaba en 2014 a entre 200 y 250 mujeres, mayoritariamente extranjeras, contra 650 en 1995 (3). Sin embargo, la página de la radio pública sueca (4) revelaba en el verano de 2016 un aumento de la prostitución en Malmö, tercera ciudad del país tras Estocolmo y Gotemburgo: se contabilizó a cuarenta y siete mujeres en las calles, siete más que en 2014. Y esta tendencia, siempre según la misma fuente, debería confirmarse este año. Para Ekberg, el problema no es la ley de 1999 sino su aplicación: “Seamos honestos: no se puede cambiar todo en veinte años. Suecia es actualmente el país de Europa con menos tráfico de personas. Pero esto no quiere decir que la ley se aplique correctamente en todo el país”.

Al interrogarlas en el marco de la lucha contra la trata, a las prostitutas suecas se les propone un programa de salida. Pero sus colegas extranjeras pueden ser expulsadas inmediatamente. Si, tras un mes de reflexión, aceptan cooperar, pueden obtener un permiso de residencia de seis meses y recibir una ayuda social. En caso de que el estudio de su caso lleve más tiempo, se les puede otorgar seis meses suplementarios. Durante este período, tienen la posibilidad de estudiar o de buscar otro trabajo: “Atención: todo esto es temporario. Una vez que se cierra el caso, le corresponde a la justicia decidir si pueden quedarse y obtener una autorización de residencia permanente”, precisa Kajsa Wahlberg, comisaria de policía e informante oficial sobre el tráfico de personas por cuenta del gobierno.

La reinserción de las prostitutas es una de las treinta y seis medidas de un vasto programa adoptado en julio de 2008 y al cual el gobierno destinó el equivalente a 20 millones de euros (5). Según la comisaria, este plan muy ofensivo redujo drásticamente la captación de clientes visible. Pero también reconoce: “Con Internet, la prostitución dejó la esfera pública. La oferta de servicios sexuales está en constante aumento en los salones de masaje, de manicura y en las peluquerías”.

Rehabilitar al cliente

La persecución activa de los clientes, que se hizo posible gracias a una red de informantes, cambió de terreno en pocos años. En el transcurso de los últimos ocho años, la cantidad de anuncios en Internet se multiplicó por veinte. Esta progresión parece seguir la evolución de la red, pero no está relacionada con un aumento de la cantidad de individuos implicados.

Según Wahlberg, la policía detiene, en promedio, a quinientos hombres por año, una cifra más o menos constante. Una vez detenidos, los contraventores se exponen a una pena que va desde una simple multa hasta un año de prisión. La multa, que se calcula en función de los ingresos, puede llegar a los 350 euros para un desempleado o, caso extremo, a ciento cincuenta días de salario para una persona en actividad.

Para que no reincidan, los clientes pueden recibir acompañamiento terapéutico. La ciudad de Gotemburgo puede jactarse

de su experiencia en la materia. En 1997, antes de que el Parlamento votara la ley sobre la prostitución, se creó el programa Köpare Av Sexuella Tjänster (KAST, “los compradores de servicios sexuales”) que trató a más de mil pacientes. Para intentar terminar con su dependencia de las relaciones remuneradas, los pacientes acuden por voluntad propia. Los consumidores de servicios sexuales reciben ayuda para llegar al origen del traumatismo familiar que sería “siempre la causa de este comportamiento”, según Maïa Strufve, terapeuta familiar de formación, que trabaja en estrecha colaboración con la Municipalidad en calidad de agente de la protección social. Las sesiones, generalmente semanales, duran aproximadamente una hora y se extienden durante dos años y medio en promedio.

“Muchos pacientes dicen que se sienten más libres de hacer algunas cosas con las prostitutas que con sus parejas. Afirman que escapan a una forma de presión”, explica esta trabajadora social. Por lo tanto, no aconseja recurrir a la psicoterapia de pareja, que “nunca dio buenos resultados en la materia y suele conducir a una crisis. No obstante, los hombres que vienen a vernos primero necesitan ser escuchados y recibir consejos”. Al estar solos en el consultorio, los clientes se expresan con mayor facilidad. Suelen estar incómodos al contar su primer encuentro, que casi nunca califican como una experiencia excitante.

Además del acompañamiento social, las prostitutas pueden recibir ayuda terapéutica. En el espíritu de la ley de 1999, debe hacerse todo lo posible para llevarlas a cambiar de actividad profesional y no para mejorar sus condiciones de trabajo. Apoyándose en un trabajo a largo plazo, Strufve se jacta de haber podido contri-

buir a reducir la prostitución, aunque no puede brindar datos cuantificables.

Controlar “el infierno en la tierra”

En 2010, la magistrada más importante del país, Anna Skarhed, emitió un informe muy favorable a la penalización, que permitiría impedir que los clientes reincidieran y que el crimen organizado se instalara. Pero Susanne Dodillet, investigadora en la Universidad de Gotemburgo, reclama otro tipo de asesoramiento, porque el Estado, según ella, sería juez y parte: “No deja que ninguna personalidad crítica evalúe la ley de manera independiente”, denuncia. Según ella, las prostitutas nunca fueron escuchadas. Esto fue formalmente desmentido por Ekberg.

Nacida en Alemania, Susanne Dodillet se instaló en Suecia a los 21 años. Cuando llegó, comprendió que el feminismo que ella reivindicaba difería del de las estudiantes suecas: “Había un desfase cultural. Yo pensaba que mis amigas eran de izquierda. Pero defendían la ley y hasta calificaban los actos sexuales remunerados de ‘violación’”. En nombre de la libertad individual, la universitaria denuncia la penalización del cliente, pero también un arsenal de leyes que prohíben, por ejemplo, que las prostitutas ofrezcan asistencia bajo pena de ser acusadas de proxenetismo. Finalmente, lamenta que los legisladores tengan, desde la sanción de esta ley, el sentimiento de pertenecer a un país “moralmente ejemplar”.

Contrariamente, la psicóloga alemana Ingeborg Kraus milita activamente a favor de la importación de las leyes suecas en su país y de la ratificación de la Convención Internacional de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Iniciadora del manifiesto de los psicotraumatólogos alemanes contra la prostitución, le escribió a la canci-

lla Angela Merkel para denunciar las consecuencias de la legalización de los prostíbulos en 2001 (6), que habría alentado fuertemente la demanda: “El ‘modelo alemán’, lejos de protegerlas, resultó ser ‘el infierno en la tierra’ para las mujeres [...] Puede observarse una industrialización de la prostitución, con un ingreso total estimado en 14.600 millones de euros y 3.500 burdeles declarados oficialmente”, escribe en otro artículo (7). Algunos de estos establecimientos, como el Pascha Club, en Colonia, se convirtieron en grandes lugares de la industria del sexo. Más de ciento veinte prostitutas trabajan en esta “institución” que se enorgullece de albergar un “Eros Center del sexo barato, un prostíbulo tradicional más confortable y con tarifas más elevadas, un piso reservado a los transexuales, una discoteca con acompañantes y un hotel”.

Estas empresas, que siempre buscan la competitividad, llegan a proponer paquetes: “comida, alcohol, masaje tailandés, una o varias chicas, todo durante tres horas, por la módica suma de 50 euros” (8). Un desastre humano, según Kraus, que cita un estudio de 2008: “El sesenta y ocho por ciento de las mujeres en situación de prostitución presentaba síntomas de estrés post-traumático de una intensidad similar a la de los ex combatientes o a la de las personas torturadas. Pueden desarrollarse otros trastornos: todo tipo de angustias, diversas dependencias, trastornos afectivos como la depresión o la bipolaridad, dolores psicosomáticos, trastornos de la personalidad, trastornos disociativos, etc.” (9).

Porque lamenta “la inacción de los responsables políticos” alemanes, Kraus quiere solicitarle a la Comisión Europea que emita un dictamen contra Alemania por incumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales, que garantiza la “integri-

dad de la persona” y la “prohibición de tratos degradantes”. Quiere que se reconozca que la prostitución está en total contradicción con los valores de la Unión Europea. En 2014, el Parlamento Europeo votó varias preconizaciones, entre las cuales se encontraba la aplicación de la sanción contra los clientes, pero se trataba de una resolución no obligatoria. Fuera de la Unión Europea, Noruega e Islandia ya siguieron a Suecia en 2009. En el seno de la Unión, sólo Irlanda del Norte (en 2015) y Francia (en 2016) modificaron sus leyes. Pero el ejemplo sueco muestra que no se puede esperar que la ley haga todo, y que la lucha contra la prostitución se inscribe en un trabajo a largo plazo, con un acompañamiento social duradero. ■

1. Lilian Mathieu, “On ne se prostitue pas par plaisir”, en Femmes, la guerre la plus longue, *Manière de voir*, n° 150, diciembre de 2016 – enero de 2017, y “Prostitution, quel est le problème?”, *Textuel*, Paris, 2016.

2. Y sólo el 48% está a favor de la penalización de la venta de servicios sexuales. “The extent and development of prostitution in Sweden”, Estocolmo, octubre de 2015, www.lansstyrelsen.se

3. *Ibid.*

4. “Street prostitution on the rise in Malmö”, Sverige Radio, 4-8-16.

5. “Against prostitution and human trafficking for sexual purposes”, Informe del Ministerio de la Integración y la Igualdad de Géneros, Estocolmo, 2009.

6. Los prostíbulos fueron también autorizados en Holanda y en España. “Rapport d’information sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel”, Asamblea Nacional, 17-9-13.

7. Ingeborg Kraus, “Lettre à ONU Femmes”, 15-10-2016, www.trauma-and-prostitution.eu

8. “Prostitution, des forfaits ‘tout compris’ à 50 euros”, emisión *Avenue de l’Europe*, France 3, 13-1-16.

9. Ingeborg Kraus, “La prostitution est incompatible avec l’égalité hommes-femmes”, www.trauma-and-prostitution.eu

*Periodista.

Traducción: María Julia Zaparart

Lecturas que nos acompañan todo el año



**DIVERSIDAD DE NATURALEZAS,
DIVERSIDAD DE CULTURAS**
Philippe Descola



¿POR QUÉ OBEDECEMOS?
Jean-Luc Nancy



**LA COMPOSICIÓN DE
LOS MUNDOS**
Philippe Descola

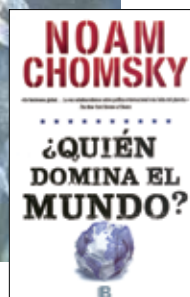


**HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE MEDIO ORIENTE**
Leyla Dakhli

Internacional



Franco Angelì, Esplosione, 1965 (Fragmento, gentileza Christie's)



Del (ab)uso del poder

¿Quién domina el mundo?

Noam Chomsky
Ediciones B; Barcelona, octubre de 2016.
392 páginas, 299 pesos.

“Abre los ojos” parece decirle al lector el célebre intelectual radical de izquierda estadounidense con esta obra, pensada para sacudir el conformismo y la apatía política. Porque si alguien se viera tentado a pensar que las ideologías ya no existen, que las corporaciones no controlan el mundo y que las conspiraciones son sólo fábulas, Chomsky se encarga de recordarle que

el verdadero poder ejerce su fuerza de manera subterránea, en la oscuridad, pues si sus mecanismos salieran a la luz, inevitablemente se debilitarían.

Sin temor a arruinar la intriga se puede responder de entrada a la pregunta que da título a la obra: Estados Unidos. Chomsky no pretende descubrir una realidad inexistente, paranoide, sino simplemente reflejar lo que está a la vista de todos, pero que diversos mecanismos e intereses logran camuflar y que una ciudadanía engeguada por el consumo, los medios de comunicación y la propaganda se niega a ver: los mayores conflictos que acechan al mundo hoy han sido moldeados por las políticas desarrolladas a lo largo del siglo XX por Estados Unidos, que a pesar del lento declive que vive desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo la mayor potencia global y lo demuestra utilizando su poderío militar de forma unilateral para asegurar su “acceso libre a mercados clave, suministros de energía y recursos estratégicos”. Así, amparado en el discurso de la seguridad global, amenazada por distintos enemigos según las épocas y las necesidades, se ha dedicado a combatir el “virus” del nacionalismo independiente a lo ancho del planeta protegiendo a una casta y sus intereses empresarios del descontento social interno y externo.

Chomsky combate lo que el especialista en relaciones internacionales Michael Glennon ha llamado “ignorancia intencionada” denunciando la traición de los intelectuales y la mentalidad imperial que mantiene una “memoria viva” que sólo parece recordar los crímenes ajenos y olvida eficazmente los propios (considerados “una defensa noble de los valores más elevados”), que están muy bien documentados en el libro. Así, repasa la responsabilidad central de Estados Unidos en la decadencia de América Central, en la represión en América del Sur, en la falta de solución pacífica al conflicto palestino-israelí, en el caos de Medio Oriente, en la expansión del yihadismo, en la amenaza nuclear y en el cambio climático, entre otros. Deconstruye los discursos en contra de Cuba, Irán y Rusia y califica a Estados Unidos de principal Estado terrorista canalla del mundo, recordando sus principales crímenes de guerra y actos terroristas, y al Partido Republicano de “peligro real para la supervivencia humana decente”.

Como buen lingüista, desnuda con ironía las falacias y el doble rasero del discurso civilizatorio occidental y revela la farsa contenida en el lenguaje cotidiano de representantes, analistas y periodistas. Presenta un panorama pesimista de la evolución global, pero incita a quitarse las anteojeras para replantear las luchas por el progreso reformulando la pregunta inicial: ¿qué principios y valores gobiernan el mundo?

Pablo Stancanelli

Investigación



Una historia oral de la infamia

John Gibler
Tinta Limón; Buenos Aires, octubre de 2016.
192 páginas, 180 pesos.

John Gibler llegó a la Normal de Ayotzinapa cuando aún perduraba la conmoción. Corroídos por el dolor y el miedo, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas procuraban entender qué era lo que había pasado. Los relatos eran piezas inconexas y los hechos permanecían oscuros incluso para sus protagonistas. El periodista, nacido en Canadá y residente hace muchos años en México, tomó testimonios y reconstruyó lo que luego fue conocido como “la masacre de Iguala”: 43 estudiantes desaparecidos, 6 asesinados y más de 40 heridos fue el saldo de la represión co-ejecutada por distintas fuerzas policiales, parapoliciales y militares. Los gobiernos estatal y federal hicieron correr información falsa, inventando una versión de los hechos que vela la participación de sus funcionarios, al mismo tiempo que traslada la responsabilidad a las víctimas. Contra estas mentiras fue escrito *Una historia oral de la infamia*: entretejiendo las voces de los sobrevivientes y de otros protagonistas de aquella jornada, Gibler compone una obra coral en la que las marcas de su ausencia refuerzan el modo eficaz con el que mezcla labor periodística e intervención política ante un hecho que muestra la saña del Estado mexicano contra las organizaciones y comunidades indígenas (las escuelas normales rurales han estado históricamente vinculadas a movimientos populares y a guerrillas rurales), al tiempo que hace evidente el tipo de violencia, de conflictividad social, que atraviesa y reconfigura el territorio mexicano.

Diego Picotto

Historia



El crimen de lesa humanidad de los jóvenes turcos

Taner Akçam
Eduntref-Prometeo; Buenos Aires, septiembre de 2016.
540 páginas, 470 pesos.

Ensayo



¿Dónde queda el Primer Mundo?

Hinde Pomeraniec, Raquel San Martín Aguilar; Buenos Aires, noviembre de 2016.
224 páginas, 229 pesos.

Solemos buscar un mundo mejor. Preguntarnos donde está ese lugar en el que se garantiza la igualdad, se respeta la democracia y se vive con felicidad. Quizás, sólo esté en nuestro deseo. *¿Dónde queda el Primer Mundo?* va en la busca de ese sitio. El “Primer Mundo” afirman las autoras, es un concepto en disputa, tanto como lo es el “Tercero”. Más aun en un contexto que, como dicen, ha puesto en debate “la democracia y el capitalismo, los dos pilares de la vida de Occidente”.

Lo que llamamos “Primer Mundo”, ¿se encuentra en el modelo nórdico que sostiene altos estándares de bienestar, pero donde la vida se ha vuelto previsible? ¿Está en Israel, el “país startup” que innova pero que sufre desigualdades y vive en conflicto? ¿Está en América del Norte, donde Estados Unidos y Canadá manifiestan modelos en disputa? ¿O en países tan disímiles como China, Australia y Corea? ¿Acaso se encuentra en los BRICS, donde crecimiento y pobreza se combinan de manera escandalosa? “Primer Mundo” y “Tercer Mundo” parecen mezclarse. El paraíso, lamentablemente, no existe aquí y ahora.

Las autoras proponen pensar en nuevos términos. Para mensurar la satisfacción ciudadana ya no alcanzan los índices económicos clásicos como el PIB. Se precisan herramientas novedosas como el Happy Planet Index. Y se precisa, también, discutir la noción de “desarrollo”.

Un libro formidable y ameno, combinación de buen periodismo que ofrece datos y análisis, y gran libro de crónicas y de viajes a mundos contradictorios.

Mariano Schuster

El reconocido historiador y sociólogo turco Taner Akçam, uno de los primeros intelectuales de ese país que se atrevió a desafiar la historia oficial y reconocer e investigar el genocidio de la población armenia por parte del agonizante Imperio Otomano a partir de 1915 (razón por la cual fue encarcelado en Ankara y debió exiliarse), presenta en este libro su trabajo más completo y documentado sobre el tema.

Akçam aporta nuevas pruebas por medio de más de seiscientos documentos secretos otomanos que hasta ahora permanecían inaccesibles. Así, con un excelente trabajo de contextualización y análisis, demuestra de manera precisa que el genocidio armenio y la expulsión de la población griega del Imperio Otomano constituyeron parte de un plan oficial de turquificación que buscaba la total transformación demográfica de Anatolia a través del desplazamiento, la deportación y la masacre de los súbditos cristianos del Imperio, lo que allanó el camino para la creación de la República Turca.

Historia



Hiroshima

John Hersey
Debate; Buenos Aires, junio de 2016.
192 páginas, 259 pesos.

A las 8.15 del 6 de agosto de 1945 un estallido torció el rumbo de Hiroshima, de su gente y su memoria, cuando la bomba atómica relampagueó sobre la ciudad japonesa causando la muerte de unas 140 mil personas.

En 1946, John Hersey publicó un ensayo sobre los momentos previos, el instante preciso, y los meses posteriores de seis sobrevivientes. Cuarenta años después, el autor volvió a Japón y añadió "Las secuelas del desastre", sobre el destino de aquellas víctimas del odio y la destrucción.

Así, *Hiroshima* les pone voz a los relatos de Hatsuyo Nakamura, del Doctor Terufumi Sasaki, del Padre Wilhelm Kleinsorge, de Toshiko Sasaki, del Doctor Masakazu Fujii y de Kiyoshi Tanimoto, afectados como tantos otros por enfermedades desconocidas hasta entonces y vinculadas con emanaciones depositadas en el aire por la bomba. También se narran padecimientos menos perceptibles pero tan hondos y destructivos como la tristeza, la angustia, la soledad y la desazón.

Hiroshima desnuda el costado humano y poco atendido de la tragedia. Apela a las subjetividades y advierte sobre los silencios y las censuras que le siguieron. Meticuloso y claro, Hersey fotografía con palabras las escenas más terribles y logra transmitir las imágenes del horror con tanta lucidez, que fácilmente el lector puede sentir e imaginar el dolor y el estruendo de la bomba en sus oídos.

Bárbara Schijman

Cultura



Diario argentino

Witold Gombrowicz
El Cuenco de Plata; Buenos Aires, febrero de 2016. 256 páginas, 290 pesos.

Corrosivo, sarcástico, ácido, excéntrico, polémico y genial. Este volumen resulta de una selección realizada por el propio Gombrowicz -gracias a la insistencia de sus amigos argentinos- de su *Diario* (1953-1969), de más de mil páginas y traducido a veinte idiomas. Esta edición es traducción directa del polaco a cargo del mexicano Sergio Pitol, e incluye únicamente los textos referidos a Argentina.

Witold viajó bastante por el interior de un país del que afirmaba: "Si la Argentina me conquistó, fue a tal grado que (ahora ya no lo dudaba) estaba profundamente, y ya para siempre, enamorado de ella (y a mi edad no se arrojan estas palabras al viento del océano). Debo agregar que si incluso alguien me lo hubiera exigido, aunque me mataran, no hubiese logrado precisar qué fue lo que me sedujo en esta pampa fastidiosa y en sus ciudades eminentemente burguesas. ¿Su juventud? ¿Su 'inferioridad'? (¡Ah, cuántas veces me frecuentó en la Argentina la idea, una de mis ideas capitales, de que 'la belleza es inferioridad'!). Durante los 24 años que permaneció en Argentina (1939-1963), Gombrowicz tal vez haya logrado captar el meollo de esa gran paradoja llamada *argentinidad*, que aún hoy resulta indescifrable: "El argentino auténtico nacerá cuando se olvide de que es argentino y sobre todo de que *quiere ser argentino*; la literatura argentina nacerá cuando los escritores se olviden de Argentina... de América; se van a separar de Europa cuando Europa deje de constituir para ellos un problema, cuando la pierdan de vista; su esencia se les revelará cuando dejen de buscarla".

Julián Chappa

Estética



El hilo perdido Ensayos sobre la ficción moderna

Jacques Rancière
Manantial; Buenos Aires, marzo de 2015.
136 páginas, 165 pesos.

Rancière aplica el concepto político de revolución para interpretar lo ocurrido en la ficción en el siglo XIX, que funda la literatura -y el arte- modernos. Con Flaubert, con Conrad, la ficción vio alterado lo que había constituido su columna vertebral desde Aristóteles: un ordenamiento interno que subordina los detalles al conjunto, con encadenamiento de las acciones por vínculos coherentes de causalidad, en un desarrollo temporal. Y aparecen nuevas formas experimentales: los tiempos muertos, la errancia o vagabundeo, la transformación del final, los desequilibrios entre la inmovilidad de las descripciones y la dinámica de las acciones. Aquellas premisas significaban un determinado esquema de pensamiento, un modo de representación que construye relaciones sociales y un sentido de realidad, que fueron alterados.

El autor profundiza las relaciones entre política y estética en su análisis de la narrativa: la democracia de los personajes de Flaubert, la variedad de impresiones, triviales o evanescentes, que no siguen la lógica de la verosimilitud en Joseph Conrad o Virginia Woolf, la multiplicidad de subjetividades en ésta. Pero también la democracia de la poesía de Keats, el republicano de Baudelaire o la destrucción de los géneros en el teatro y la adopción de papeles heroicos por parte del pueblo. En todos ellos desenmascara la política de la ficción, la destrucción de un modelo jerárquico que trajo la democratización de la literatura.

Josefina Sartora

Fichero

Drogas, narcotráfico y poder en América Latina



Marcelo Bergman
FCE; Buenos Aires,
febrero de 2016.
308 páginas, 179 pesos.

El tráfico, consumo y abuso de estupefacientes, con sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias, se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes de América Latina. Y uno de sus mayores peligros es la progresiva diversificación criminal que genera el narcotráfico. Sin tomar posición política ni normativa, el autor busca realizar un análisis estructural del negocio y aportar elementos para un juicio informado sobre las políticas públicas en debate.

Las vías abiertas de América Latina



Emir Sader (dir.)
Octubre; Buenos Aires,
noviembre de 2016.
304 páginas, 280 pesos.

Ante la ofensiva conservadora en América Latina, el sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader convocó a siete intelectuales (Álvaro García Linera, Ricardo Forster, Constanza Moreira, Manuel Canelas, Alfredo Serrano Mancilla, René Ramírez y Juan Guijjarro) para responder a la pregunta de si el nuevo panorama implica un fin de ciclo o un repliegue temporal. Así, a través de un balance de las conquistas, los errores y desafíos del progresismo, busca renovar las disputas por el horizonte regional.

La 21/24



Inés Arteta
Peña Lillo-Continente; Buenos Aires,
noviembre de 2016.
192 páginas, 239 pesos.

Con prólogo del padre Pepe Di Paola, esta "crónica de la religiosidad frente al desempleo" ofrece un relato coral sobre la construcción de la villa 21/24 en Barracas por inmigrantes que desde los años 50 llegaron en busca de trabajo. Considerado uno de los más peligrosos de la ciudad de Buenos Aires, el barrio encontró en la fe popular una fuerza de transformación, identidad y resistencia frente a la desesperanza y la marginación.

La fuerza de los fuertes y otros cuentos



Jack London
IPS; Buenos Aires,
octubre de 2016.
144 páginas, 200 pesos.

Tras su adhesión al socialismo, el célebre escritor estadounidense Jack London combinó sus relatos exóticos de viajes y aventuras con críticas a la sociedad capitalista e ideas relacionadas al cambio social. Este volumen reúne cuentos del autor que, como señala el historiador Pablo Pozzi en su presentación, contrastan "fuertemente con la literatura popular difundida por la burguesía [...] ya que rescata al individuo del marasmo del individualismo".

Geopolítica

Sudamérica futuro

China global, transición energética y posdesarrollo

Bruno Fornillo
El Colectivo-CLACSO; Buenos Aires, agosto de 2016. 196 páginas, 200 pesos.

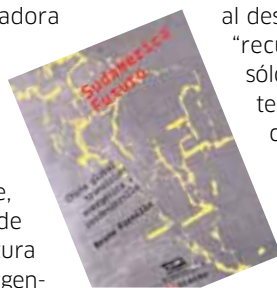
¿Cómo pensar, desde Sudamérica, una transición energética superadora del modelo hegemónico del desarrollo? El investigador Bruno Fornillo aporta claves para avanzar hacia un nuevo paradigma energético que deberá ser "sustentable, renovable y eficiente", desde la comprensión de la coyuntura actual, marcada por la reemergen-

cia china, la profundización del modelo extractivista en América Latina y la consolidación de un orden neoliberal que ha instalado una gobernanza mundial basada en la privatización y capitalización de los recursos naturales.

Los combustibles fósiles, que han sido "la savia que hace viable la sociedad industrial", han entrado en declive, y nada podrá en el futuro igualar su potencia. La crisis ambiental y climática deja ver una encrucijada política y cultural: por una parte, queda al descubierto que la idea de "recursos inagotables" era sólo un mito; por otra, el sistema hegemónico impone categorías como "capital natural" y "propiedad privada colectiva", que animan a resolver los problemas sin salir del capitalismo.

En ese contexto aparecen nuevas tecnologías, como las vinculadas al litio, que ofrecen posibilidades de descentralizar y democratizar el acceso a la energía. Pero la reflexión en torno a la energía no puede abordar sólo la generación, sino también el consumo: un solo *shopping*, enfatiza el autor, requiere la misma energía que un pueblo de diez mil habitantes. La cifra, contundente, alerta de que el problema no es técnico: es político. Un nuevo paradigma energético pasa, como pide Pablo Bertinat, por considerar la energía como un derecho, que como tal debe desmercantilizarse. Fornillo se pregunta: "¿Qué tipo de posdesarrollo tenemos la capacidad de crear?". El autor ofrece algunas claves teóricas, como la noción de bienes comunes, como eje para pensar un orden social alternativo.

Nazaret Castro



Un espía ruso en la Casa Blanca...

por Serge Halimi*

El 9 de febrero de 1950, en lo más álgido de la Guerra Fría, un senador republicano todavía oscuro vociferaba: “Tengo en mis manos la lista de doscientas cinco personas que el secretario de Estado sabe que son miembros del Partido Comunista, y que sin embargo deciden la política del Departamento de Estado”. Joseph McCarthy acababa de entrar en la historia de Estados Unidos por la puerta de la infamia. Su lista no existía, pero la ola de histeria anticomunista y de purgas que siguió destruyó la existencia de miles de estadounidenses.

En 2017, lo que se cuestiona es directamente la lealtad patriótica del próximo presidente de Estados Unidos. Con su gabinete de militares y de multimillonarios, las razones para temer su entrada en funciones son abundantes. Sin embargo, el Partido Demócrata y numerosos medios occidentales parecen obsesionados por la idea descabellada de que Donald Trump sería la “marioneta del Kremlin” (1). Y que debería su elección a un pirateo de datos informáticos orquestado por Rusia. Mucho tiempo ha pasado desde la paranoia macartista, pero *The Washington Post* acaba de renovar esa historia al preocuparse por la existencia de “más de doscientos sitios que, voluntariamente o no, publican o difunden la propaganda rusa” (24 de noviembre de 2016).

Una alianza histórica

Malos vientos soplan sobre Occidente. Cada elección o casi es apreciada a través del prisma de Rusia. Ya se trate de Trump en Estados Unidos, de Jeremy Corbyn en el Reino Unido o de candidatos tan diferentes como Jean-Luc Mélenchon y François Fillon o Marine Le Pen en Francia, basta con cuestionar las sanciones económicas

contra Moscú o las conjeturas antirrusas de la Central Intelligence Agency (CIA) –una institución que, como nadie ignora, es infalible e irreprochable– para ser sospechado de servir a los designios del Kremlin. En un clima semejante, apenas se atreve uno a imaginar el torrente de indignación que habrían suscitado el espionaje por Rusia, más que por Estados Unidos, del teléfono de Angela Merkel, o la entrega por Google a Moscú, más que a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), de miles de millones de datos privados recolectados en Internet. Sin medir el alcance de sus palabras, Barack Obama ha declarado a propósito de Rusia, “un país más pequeño, más débil” que Estados Unidos: “Es necesario que comprendan que lo que ellos nos hacen, nosotros podemos hacérselo a ellos” (2).

Cosa que Vladimir Putin no ignora. En la primavera de 1996, en efecto, un presidente ruso enfermo y alcohólico, artífice (corrupto) del caos social en su país, no sobrevivió a una impopularidad abismal sino gracias al apoyo declarado, político y financiero, de los capitales occidentales. Y a un beneficioso resultado en las urnas. Boris Yeltsin, el favorito de los demócratas de Washington, de Berlín y de París (aunque haya mandado a disparar sobre el Parlamento ruso provocando, en diciembre de 1993, la muerte de centenares de personas), fue por lo tanto reelegido. Cuatro años más tarde decidió transmitir todos sus poderes a su fiel primer ministro, el delicioso Vladimir Putin... ■

1. Según la expresión de Robby Mook, entonces director de campaña de Hillary Clinton, *ABC News*, 21-8-16.

2. Conferencia de prensa del 16 de diciembre de 2016.

*Director de *Le Monde diplomatique*.
Traducción: Víctor Goldstein

Sumario

Staff 3

Editorial:
El macrismo realmente existente 2
por José Natanson

¿Qué quiere la clase media? 3

Dossier El peronismo contraataca

Cambiamos y los cinco peronismos 4
por Julio Burdman

Veranito peronista 6
por Andrés Fianza

Así lo viví, de H. Magnetto y M. Novaro 10
por Martín Sivak

El mundo según Trump 12
por Michael Klare

¿Cambio estratégico hacia el “patio trasero”? 14
por Alexander Main

Temerarios distribuidores de patrañas 15
por Pierre Rimbart

Irak: Los yazidíes, eternos perseguidos 16
por Vicken Cheterian

Irán y Turquía, ¿aliados o rivales? 18
por Mohammad-Reza Djalili y Thierry Kellner

Medio Oriente en la mira 20
por Ignacio Ramonet

Dossier Crisis sin fin en Brasil

Brasil sangra 22
por Marcelo Falak

Recuperar la radicalidad 24
por Guilherme Boulos

Italia, ruptura y *statu quo* 26
por Raffaele Laudani

Birmania, una democracia condenada 28
por Christine Chaumeau

Australia contra los aborígenes 30
por Maxime Lancien

La ofensiva legal del imperio 32
por Jean-Michel Quatrepoint

Las OMP de la ONU:
¿La reforma imposible? 34
por Sandra Szurek

Suecia: ¿legalizar o prohibir
la prostitución? 36
por William Irigoyen

Libros del mes 38

Editorial: Un espía ruso en la Casa Blanca 40
por Serge Halimi

¡YA SALIÓ!

ATLAS DE HISTORIA CRÍTICA Y COMPARADA

LE MONDE diplomatique

TEXTOS, GRÁFICOS, MAPAS Y DOCUMENTOS
ELABORADOS POR LOS MEJORES HISTORIADORES Y CARTÓGRAFOS PARA ESTUDIANTES ESPECIALISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL.

LE MONDE diplomatique | Capital intelectual

www.eldiplo.org

EN VENTA EN KIOSCOS Y LIBRERÍAS